

2^a
edición

HUMBERTO SOTELO MENDOZA



1972-1973, PUEBLA

DE LOS

DEMONIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
CUADERNOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO UNIVERSITARIO

Cuadernos del Archivo Histórico Universitario

**HUMBERTO SOTELO
MENDOZA**

**1972-1973,
PUEBLA DE LOS DEMONIOS**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
CUADERNOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO UNIVERSITARIO**

Gobernador Constitucional del Estado de Puebla,
Melquiades Morales Flores

Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Enrique Doger Guerrero

Director del Archivo Histórico Universitario,
Alfonso Yáñez Delgado

Fotografía de portada: Uno de los principales responsables de los hechos de 1973, Gonzalo Bautista O'Farril. Revista *Crítica*, número 1, año 1 octubre-diciembre de 1978.

© Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Archivo Histórico Universitario

4 Sur 104
Centro Histórico
Tel: 2327479
e-mail: tiempo@siu.buap.mx

ISBN 968863541-3
Impreso y hecho en México
Printed and made in Mexico

*Puebla de Zaragoza es
una ciudad que guarda la mayor
parte de esas páginas sombrías de nuestras
revoluciones. Es el álbum donde hay cantos heroicos
y hojas ensangrentadas. Esa ciudad, unas veces ha sido
el baluarte de la libertad y de la independencia, y otras el
castillo feudal donde se han concentrado las ideas y los
monumentos de la barbarie. La ciudad de Zaragoza es
una plaza fuerte, toda vez que se fortifica.*

Juan A. Mateos. El cerro de las campanas.

INTRODUCCIÓN

En mayo de 1973 el conocido poeta Efraín Huerta escribía en la revista *Siempre!* el estremecedor poema *Puebla endemoniada*, que decía lo siguiente:

PUEBLA ENDEMONIADA

Los asesinos llegan, y se van.
Pongo como testigos a los ángeles de Catedral.
Llegan los gobernadores, los pequeños obispos,
los demacrados párrocos —y se van.
Llegan los halcones, matan y se van.
Los gobernadores no son decapitados;
decapitan, y se quedan para siempre jamás.
Los gobernadores ordenan la matanza.
La policía dispara, mata y se va.

Los banqueros ordenan, roban el cheque,
y allí se quedan, nadie los moverá.
El espectro de Jenkins aúlla, maúlla:
los espectros no matan, pero sólo son muerte.
Ah, pero entonces, a la Universidad
llega la Muerte —y la muerte no muere, pero da.

Lo miraron los ángeles, los ángeles andróginos;
lo vieron los santitos, los santotes,
las beatas, los monaguillos.

Lo vio la hermosa sangre
de Carmen y de Aquiles Serdán.

Puebla —Primero de Mayo.
La Puebla asesinada —y ya.
El pueblo adolorido —y nada más.

Los asesinos en la embriaguez —¿y qué?
Los asesinos se largan,
los procuradores procuran,
los estúpidos juran
que nunca vieron lo que los ángeles,
mis testigos —vieron.

¿Quién carajos vio nunca cómo matan
los matones? ¿Cómo disparan a sueldo suelto
los asesinos de la asesina puntería?

Puebla enlutada, Puebla
de mi corazón como un azulejo despedazado,
te doy mi ennegrecido recuerdo,
mi Diez de junio, Puebla,
te doy mi encolerizada condolencia
y mi rabia....

Y un poco de mi alegría
por el futuro de mi patria.

Evoco este poema porque a mi parecer, difícilmente podemos encontrar otro texto más apropiado para describir el descarnado ambiente de violencia que vivió Puebla en los años de 1972 y 1973, cuando se unen como un solo hombre las “fuerzas vivas” de la entidad con el propósito de aplastar al

movimiento democrático-popular que estalla en esa etapa, y que tuvo su epicentro en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

Ciertamente daba la impresión de que “la sucia muerte” había decidido imponer sus designios, bajo la mirada atónita —y no pocas veces cómplice— de “los ángeles andróginos”, de “los santitos”, “los santotes”, “las beatas” y “los monaguillos”, metáforas mediante las cuales Huerta aludía a los grupos más reaccionarios del clero católico quienes, olvidándose completamente del mensaje de paz y de amor de Cristo, decidieron incorporar sus huestes al ejército de las fuerzas derechistas, plenamente dispuestas a aniquilar al movimiento universitario que había estallado en la Universidad Autónoma de Puebla, convencidas que tras el mismo se encontraba la versión moderna de Satanás, esto es, el comunismo ateo, enemigo de la civilización occidental y cristiana.

En esos años los asesinos “llegaban y se iban” actuando con una impunidad escalofriante y, del mismo modo, “los gobernadores ordenaban matanzas” para imponer “el orden” que imploraban a gritos los organismos empresariales, los clubes de servicios y las organizaciones creadas por la derecha poblana para sofocar al movimiento democrático popular.

El poema de Efraín Huerta apareció unos días después de la masacre del Primero de Mayo de 1973. La tragedia se suscitó a raíz de la detención por parte de la policía de un grupo de universitarios que repartía propaganda entre los trabajadores que participaban en el desfile conmemorativo de la gesta de los Mártires de Chicago. Al enterarse de tal hecho varios contingentes de universitarios decidieron organizar un mitin de protesta en la Plaza

de la Democracia,* en donde instantes después fueron agredidos por un grupo de francotiradores apostados en los edificios adyacentes al edificio Carolino. En la balacera perdieron la vida los estudiantes Enrique González Romano, Alfonso Calderón Moreno, Víctor Manuel Medina Cuevas y Norberto Sánchez Lara.

Y, aún cuando la tragedia conmovió profundamente no sólo a Puebla sino a todo el país, el gobernador Bautista O'Farril no tuvo empacho en declarar que la masacre era una “lección” para los agitadores profesionales que se proponían sembrar el caos en la entidad. Y agregó, con una frialdad inefable: “En la actualidad la policía local está debidamente armada y tiene la habilidad necesaria para imponer el orden... La policía tiene órdenes para matar de un tiro al que atente contra la paz pública”.

Como puede verse, el gobernador no emitía una declaración destinada a condenar el proditorio acontecimiento o a explicar las causas del mismo; más bien emitía algo semejante a “un parte de guerra”. Esto no era de ningún modo casual; tanto Bautista O'Farril como sus aliados de la derecha poblana, reiteramos, estaban convencidos de que la única forma de exterminar al comunismo en Puebla era declarándole la guerra y, como escribe Elías Canetti, en *Masa y Poder*:

en las guerras se trata de matar. Se trata de un matar por montones. Hay que acabar con la mayor cantidad posible de ene-

* Esta plaza se encuentra frente al edificio Carolino. Ahí los estudiantes del Colegio del Estado realizaron un acto apoteótico de respaldo a la candidatura de Francisco I. Madero a la Presidencia de la República el 15 de mayo de 1910. La directiva de la Sociedad de Estudiantes de dicha institución, encabezada por Alfonso G. Alarcón y Luis Sánchez Pontón, había convocado a tal evento en el salón destinado a la clase de matemáticas del primer año, pero este espacio se vio incapacitado para albergar a la gran cantidad de estudiantes que asistieron a dicho acto, por lo cual se tuvo que efectuar en el sitio mencionado. Desde entonces se le denominó Plaza de la Democracia.

migos; la peligrosa masa de adversarios vivos ha de convertirse en un montón de muertos. Vence el que mata a más enemigos.

Unos meses antes habían sido asesinados los líderes universitarios Joel Arriaga Navarro, Enrique Cabrera y el estudiante Josaphat Tenorio Pacheco.

Se trató, pues, de una etapa que daba la impresión de que Puebla “era el imperio de las matarifes”, como escribió el columnista de la revista *Siempre!*, Alberto Domingo, en un artículo publicado el 3 de enero de 1973:

era el imperio de los matarifes. Ya nadie en Puebla tiene la vida segura bajo un sórdido manto de impunidad, cien, mil asesinos andan sueltos, emboscados en las esquinas, rastreando nuevas víctimas por las calles de la ciudad entera, acosando las calles de los “enemigos”. Es cosa cotidiana que el teléfono suene y la amenaza de muerte se vomite entre insolencias delirantes.

Frente a tanta sangre derramada, finalmente el gobierno federal se vio obligado a exigirle la renuncia al gobernador Bautista O’Farril, logrando de este modo los universitarios poblanos y las fuerzas progresistas que los respaldaban desarticular la ofensiva derechista, creando a la vez condiciones propicias para que Puebla dejase de ser el reino de la intolerancia, para convertirse en un estado en el que predominase el respeto a los derechos humanos y a las libertades políticas y sociales.

En ese sentido, el movimiento universitario popular de los años de 1972-1973 constituye un hito decisivo en la vida moderna de Puebla, ya que a partir de entonces los gobiernos que sucedieron al de Bautista O’Farril se vieron obligados a respetar la autonomía de la universidad, y a brindarle un tratamiento político

a los problemas sociales, en lugar —como sucedía otrora— de darles un tratamiento policiaco.

Desde luego surge la interrogante: ¿pero acaso se justificó tanto derramamiento de sangre para que Puebla dejara de ser una entidad controlada por los enemigos de la libertad y de la tolerancia política? Desde luego que no, no era necesario que se perdieran tantas vidas. Como expresó en cierta ocasión el célebre revolucionario ruso Alexander Herzen, “es terriblemente doloroso —cito de memoria— que los triunfos de la razón impliquen el sacrificio de miles de inocentes... Ya es hora de que Saturno deje de devorar a sus hijos”.

Por ello se torna necesario que las fuerzas democráticas y en general los sectores más avanzados de la ciudadanía poblana enarboles la exigencia del esclarecimiento de todos los crímenes perpetrados en esa etapa negra de nuestra historia. Ya pasaron 30 años y aún los asesinos intelectuales y materiales de los mismos no han recibido el castigo que merecen.

Hace unos meses un nutrido contingente de connotadas personalidades de la vida política y cultural de Puebla se presentó ante las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado para exigir la reapertura de las investigaciones de los asesinatos de Joel Arriaga Navarro y de Enrique Cabrera, dado que el plazo de las mismas estaba por prescribir. Tal iniciativa es loable, pero debería incluir también a todos aquellos que perdieron la vida en esa etapa sangrienta. Nos referimos al estudiante Josaphat Tenorio Pacheco, a los universitarios que murieron en la masacre del Primero de Mayo de 1973, y al policía David Morales Flores, quien fue asesinado en noviembre de 1972 por grupos vinculados al movimiento democrático universitario. Estamos persuadidos que en este hecho bochornoso no participaron los líderes más serios y destacados de dicho movimiento, empero cometieron el error de no deslindarse

enérgicamente de tales grupos, a efecto de que fueran sometidos a la acción de la justicia.

Tal como escribió un conocido columnista poblano, no es justo —ni moral ni políticamente— que cada grupo político se dedique a pedir justicia para sus muertos, olvidándose de las otras víctimas de la represión. Del mismo modo, no se vale que sólo se exija justicia para los caídos del movimiento universitario popular. También —si somos consecuentes— debemos exigir el esclarecimiento del crimen del policía David Morales Flores. ¿Es que acaso éste, por tratarse de un humilde servidor público, no merece un trato semejante?

En determinadas esferas de la sociedad poblana —al igual que sucede en otros ámbitos del país— se arguye que sería más benéfico para nuestra sociedad olvidar los crímenes de referencia con tal de abrirle paso al inefable “borrón y cuenta nueva”. Pensamos que tal actitud, lejos de permitirnos fortalecer nuestra vida democrática, impide la misma, ya que ninguna sociedad que pretenda aspirar al título de “sociedad abierta” —en el sentido de Karl Popper— puede darse el lujo de olvidar su pasado, y con mayor razón su pasado reciente. Evoco al respecto las palabras de Milán Kundera: “la lucha contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido”.

Ahora, indiscutiblemente, existen en el país y en el estado condiciones más propicias para emprender esta tarea. La decisión del presidente Vicente Fox de abrir los archivos referentes al movimiento estudiantil de 1968 constituye un hecho de enorme relevancia histórica que, sin duda, contribuirá de manera decisiva a frenar la impunidad que se enseñoreó en México durante las décadas anteriores. Los poblanos, al calor de tal iniciativa, deberíamos exigir la reanudación de las investigaciones de los crímenes que se perpetraron en los años de 1972-1973, y en general de los asesinatos de todos aquellos luchadores

sociales y personas que fueron víctimas de la represión en décadas recientes.

Sólo así, insisto, los poblanos estaremos en posibilidades de marchar hacia una auténtica democracia.

Este trabajo, pues, pretende contribuir —aunque sea con un grano de arena— a tal objetivo.

Aclaraciones y precisiones

En esta obra no pretendemos abordar la historia del proceso de reforma universitaria de la Universidad Autónoma de Puebla, ya que desbordaría los límites de la investigación que nos propusimos, que se limita al movimiento universitario popular de los años de 1972 y 1973. Si bien abordamos algunos de los principales hitos de dicho movimiento, no nos detenemos a examinar minuciosamente su desarrollo y sus vicisitudes. Por ello el lector advertirá la presencia de algunos vacíos o de saltos bruscos en la descripción del mismo.

Para una comprensión más amplia del proceso de reforma universitaria remito al lector a trabajos tales como el libro de Alfonso Yáñez Delgado, *La manipulación de la fe* (Imagen Pública y Corporativa, 1995), en el que se aborda de manera exhaustiva el estallido de dicho proceso en los años sesenta; y al ensayo de Alfonso Vélez Pliego, intitulado “La sucesión rectoral, las lecciones de la historia y las tareas actuales del movimiento democrático universitario”, publicado en el número 1 de la revista *Crítica* de la Universidad Autónoma de Puebla (octubre-diciembre de 1978). También recomiendo el libro de Jesús Márquez Carrillo, *Cátedra en vilo* (Centro de Estudios Universitarios de la UAP, 1992), en el que se abordan aspectos importantes de la historia moderna de la UAP, en particular el movimiento estudiantil de Puebla en 1968.

El análisis del movimiento universitario popular de 1972-1973 nos obligó, también, a analizar las causas sociales y políticas que lo sobredeterminaron sin pretender, obviamente, agotar la inmensa complejidad de las mismas, lo cual nos hubiese alejado también del tema de nuestra investigación. A este respecto le recomiendo al lector los libros *Política y poder en México*, de Will Pansters (Centro de Estudios Universitarios de la UAP, 1992), y *Los movimientos sociales en Puebla*, editado en dos tomos por el departamento de Investigaciones Arquitectónicas y Urbanísticas del Instituto de Investigaciones de la Universidad Autónoma de Puebla, en el que aparecen contribuciones importantes al análisis de los movimientos obrero, empresarial, campesino y universitario que estallaron en Puebla en la década de los setenta. Quien escribe estas líneas tuvo el honor de colaborar en dicho libro con el ensayo “La Reforma Universitaria y el movimiento popular de 1973”, el cual constituye un antecedente del trabajo que el lector tiene en sus manos. Si bien retomo en este libro las tesis básicas de dicho ensayo, he intentado superar algunas limitaciones del mismo, en particular una identificación excesiva con una de las fuerzas más destacadas del movimiento democrático universitario.

CAPÍTULO I

LA CRISIS DE PUEBLA EN LOS SETENTA

La crisis del sector textil y la modernización industrial

Desde el porfiriato hasta mediados del siglo pasado la industria textil fue el eje fundamental del que dependió el desarrollo económico de Puebla, a tal grado que algunos investigadores afirman que la entidad era “monoindustrial”.¹ El auge de dicho sector se mantuvo hasta 1960, año en que la industria textil representaba 60 por ciento de la producción total del estado, pero a partir de entonces entró en una etapa de decadencia debido a la incapacidad o al desinterés de los empresarios por modernizarse, tanto en lo que respecta a los métodos productivos como en lo referente a sus formas de organización.

Según el investigador Víctor González Lara, la industria manufacturera poblana enfrentó en los años treinta magníficas condiciones para avanzar hacia su modernización, pero las desaprovechó, persistiendo en la producción de bienes de consumo inmediato, y escasamente diversificada.² Todavía en la década de los cuarenta la industria textil poblana continuó experimentando un crecimiento notable, debido a la expansión económica propiciada por la segunda guerra mundial. Empero esto no trajo consigo una reconversión de la planta industrial. Leonardo Lomelí Vanegas señala al respecto:

A pesar del esfuerzo que habían realizado algunos empresarios durante la segunda guerra mundial, la mayoría de las fábricas seguían trabajando con maquinaria que había sido construida entre 1888 y 1910, lo que significaba costos muy poco

competitivos. Durante la guerra, la industria textil había llegado incluso a exportar, pero terminado el conflicto había sido incapaz de retener esos mercados a pesar de las exhortaciones del presidente Miguel Alemán, que había convocado a los empresarios poblanos a modernizarse.³

Aparte de mantenerse rezagada respecto a las transformaciones tecnológicas de la época, la empresa textil poblana —a excepción de algunos establecimientos propiedad de libaneses— mantuvo en lo fundamental sus rasgos de organización familiar, resistiéndose a integrarse en las formas modernas de sociedades de acciones o de capitales.⁴

Sin embargo, no sólo fueron los empresarios textiles quienes mostraron renuencia a la modernización, sino también la mayoría del sector privado poblano. Así, Carlos Contreras Cruz observa:

Por lo que toca a la estructura productiva de la ciudad de Puebla, [ésta] se caracterizaba a finales del porfiriato por el creciente predominio de la producción textil, sobre todo de la producción mecanizada de los hilados y tejidos de algodón, a la cual seguía en orden de importancia la elaboración de alimentos y bebidas. Por otra parte, el desarrollo de la planta productiva porfiriana no implicó la desaparición de la producción artesanal que se amplió y diseminó en casi todos los sectores productivos que formaban la economía urbana de la ciudad. Paralelamente, es muy significativa la ausencia de actividades fuera del sector textil, que reflejaran un avance cualitativo en el proceso de lo que se ha dado en llamar “industrialización”. En Puebla, a diferencia de otras regiones y ciudades, no existían ramas productivas destinadas a la fabricación de máquinas y herramientas. Se sabe, que el movimiento de la industria pesada fue la gran novedad del porfiriato, y si bien su peso no fue significativo, su aparición

marcó un cambio cualitativo fundamental para la economía nacional... En nuestro caso, la industria del metal y la de productos químicos se restringió a pequeños establecimientos productivos como las herrerías, hojalaterías, fábricas de velas, coheterías... Sólo conocemos la existencia de un establecimiento, fundado en 1902, que producía refacciones para la industria textil. Las causas del relativo atraso económico de la estructura productiva poblana no se pueden buscar, exclusivamente, en la falta de efectos multiplicadores de la moderna industria textil, sino más bien, en la composición y magnitud del mercado.⁵

En Puebla, pues, el sector privado permaneció anclado en el capital comercial, sin impulsar a tiempo la llama industria de “bienes de capital”. Esto sobredeterminó en poca medida sus rasgos de burguesía atrasada y reaccionaria, temerosa de los cambios, y sempiternamente en guardia contra las transformaciones sociales y los movimientos políticos que se llevaban a cabo en la entidad.

En entidades como Nuevo León, Jalisco y el Estado de México, el sector privado evitó estancarse en un sector determinado, fortaleciéndose en los más diversos campos de la industria. La burguesía regiomontana, en particular, engendró desde muy pronto cadenas industriales, que se ligaron a sectores complementarios. A partir de la creación de la Cervecería Cuauh-témoc (1890) y de Vidriera Monterrey (1911-1925), surge un verdadero complejo industrial y financiero, que además de fabricar materias primas, empaques de cartón, hojalata, lámina y aceros, produjo aparatos electrodomésticos, fibras químicas para la industria textil, productos químicos y otros más.⁶

Un ejemplo inequívoco del atraso de la burguesía poblana y de las oportunidades que ésta dejó escapar para modernizarse, lo encontramos por los años treinta cuando Puebla a pesar de ser la entidad con mayor capacidad para producir electricidad

—representaba más de la quinta parte (22 por ciento) del total nacional—, el sector industrial, y en especial el manufacturero, no sacó provecho de tal situación, pues continuó generando electricidad con sus propias plantas, en lugar de aprovechar las potencialidades energéticas de la entidad para abrirle paso a proyectos industriales más complejos y ambiciosos.⁷

Hacia los primeros años de la década de los sesenta la infraestructura industrial de Puebla ya era notablemente obsoleta. A excepción de algunos núcleos industriales de origen libanés, la mayoría de los empresarios poblanos se mostraban reticentes a modernizar sus negocios.

No es sino hasta mediados de los sesenta que Puebla ingresa al umbral de la modernización industrial, gracias al ambicioso programa de inversiones que a través de Nacional Financiera (NAFINSA) impulsa la federación. En esos años los gobiernos federal y estatal invierten alrededor de mil 500 millones de pesos en la construcción de parques industriales.⁸

La construcción de la autopista México-Puebla y el mejoramiento de la conexión Puebla-Orizaba contribuyen de manera decisiva al fenómeno de referencia.

A raíz del programa de estímulos fiscales, subsidios y otras facilidades que promueve el gobierno estatal, entre 1964 y 1973, más de 120 compañías industriales se establecen en Puebla, particularmente en sectores que no tenían presencia en la entidad, como en los casos de la industria automotriz y metálica. Con la llegada de Volkswagen la industria automotriz pasa a ser la primera rama industrial, con 27.1 por ciento de la inversión, y con el establecimiento de Hylsa, la industria metálica contará con 18.9 por ciento de la inversión.⁹

La industria textil no pudo eludir dicho proceso de modernización.¹⁰ Diversos empresarios de este sector aprovechan el ambiente favorable para la inversión, estableciendo nuevas fábricas en las que las fibras sintéticas desplazan al

algodón. La mayoría de estos establecimientos, a diferencia de los antiguos, se dirigen al mercado externo.

El proceso descrito trajo consigo, como era de esperar, alteraciones fundamentales en la composición de la burguesía poblana.¹¹ No pocas de sus familias más antiguas fueron desplazadas a un segundo término en lo que a poder económico se refiere, siendo desplazadas por aquellas que sí se dieron a la tarea de modernizar sus empresas (*vgr.* las familias Abed, Budib y Chedraui).

Desde luego, el establecimiento de empresas como Volkswagen, Hylsa y otras corporaciones multinacionales propició que la burguesía poblana perdiese su posición dominante en la economía de la entidad, pero esto no trajo consigo la pérdida correspondiente de su influencia política. Por el contrario, se abre un proceso curioso: en la medida en que varios de sus sectores más tradicionales eran desplazados por las nuevas empresas que se instalaban en Puebla o por grupos poblanos, como el de origen sirio libanés que tenían una mentalidad más moderna, al mismo tiempo, iban tomando participación política, convirtiéndose no pocos de sus miembros en destacados —y aguerridos— líderes empresariales e incluso sociales, pasando a desempeñar un papel de gran relevancia en las luchas que habría de librar la derecha poblana en las décadas de los setenta y los ochenta contra los movimientos sociales que estallaron en la entidad en esa etapa, e incluso contra el mismo gobierno federal, hacia quien manifestaban un odio cerval por estar convencidos de que era el principal promotor del socialismo en México, o en todo caso, el principal responsable de la “conjura judeo-masónica-comunista” que se cernía sobre nuestro país en esos años, la cual, según esto, tenía en la entidad su principal bastión o “atalaya” en la Universidad Autónoma de Puebla.

El discurso anticomunista y antiestatista de tales sectores se sustentó, sin duda, en su resentimiento y frustraciones provocadas por su caída en la pirámide social. De ahí que se convirtieran en los voceros o líderes de todas aquellas capas sociales fuertemente castigados por las transformaciones que experimentó el capitalismo mexicano en dicha etapa, principalmente de la constelación de establecimientos medianos y pequeños cuyos propietarios, como observa Jesús Márquez Carrillo, dejaron de ser los administradores de sus propios negocios.¹² Estos sectores se convirtieron, en las décadas de los sesenta y los setenta, en la principal caja de resonancia de los proyectos que impulsó la derecha en esa época, la cual explotó hábilmente sus temores y su miedo al cambio.

Si algo distinguía a dichos sectores —y hablamos en tiempo pasado porque los mismos prácticamente ya han sido arrasados del escenario económico del país y del estado por las transformaciones que se presentaron en el capitalismo en México a partir de la década de los ochenta y los noventa— era su incapacidad para discernir acerca de las causas económicas y sociales de fondo que estaban propiciando su aniquilación: así, en lugar de advertir que las causas de su desplazamiento eran las nuevas expresiones del capitalismo, el fortalecimiento de los monopolios, etcétera, atribuyeron ese fenómeno a los “complots” del comunismo “ateo”, y al “estatismo” del gobierno de Echeverría.

Según el censo de 1974 existían en el estado de Puebla mil 225 empresas industriales y alrededor de 26 mil 700 establecimientos comerciales y de servicios, que en su mayoría pertenecían a pequeños y medianos empresarios, o sea, a sectores que resintieron duramente las transformaciones que experimentó el país en esa década, caso concreto, el “capitalismo salvaje” que habría de surgir a finales del siglo pasado, arrasando sin piedad a las clases medias y a los pequeños y medianos empresarios.

Estos sectores, irritados y exasperados por dichas transformaciones, fueron muy sensibles al discurso de la derecha poblana, cuyo “antiestatismo” —y la identificación de éste con el comunismo— se convirtió en un discurso muy atractivo para los mismos.

Un factor crucial que contribuyó al fortalecimiento político de los núcleos beligerantes de la burguesía poblana fueron sus vínculos con la jerarquía eclesiástica, en quien encontraron no sólo un magnífico aliado sino, sobre todo, un “hermano gemelo” en la lucha frontal contra el movimiento universitario popular.

Tal situación se presentó también en los años sesenta, cuando estalla el proceso de reforma universitaria de la Universidad Autónoma de Puebla. En el libro *La manipulación de la fe*,¹³ Alfonso Yáñez Delgado nos describe con lujo de detalles el papel crucial que desempeñó el arzobispo Octaviano Márquez y Toriz en la ofensiva que desplegó la derecha poblana contra el movimiento estudiantil de 1961.

La iglesia católica poblana, al igual que los sectores hegemónicos del sector privado de la entidad, se había atrincherado también en el pasado.¹⁴ Al igual que éstos, se caracterizaba también por su miedo cerval a las transformaciones que se presentaban en el país y el mundo, no sólo en los campos de la economía y de la política, sino también en las esferas del arte y de la cultura, viendo señales del demonio por todos lados. Así, debido a la filmación de unas escenas en el atrio de la basílica por parte del cineasta Alejandro Jodorowski, en junio de 1972, el arzobispo poblano Márquez y Toriz promovió “un acto de desagravio” a dicho templo, arguyendo que las escenas implicaban un insulto a la virgen de Guadalupe. En realidad esta iniciativa fue un pretexto para emprender una cruzada nacional contra “la pornografía”, que a su vez no fue sino una maniobra desplegada por los sectores más recalci-

trantes de la burguesía mexicana enderezada a frenar las reformas que en ese periodo se proponía impulsar el presidente Luis Echeverría Álvarez, que fueron asumidas como señales inequívocas de que el gobierno federal estaba dispuesto a llevar a México al socialismo. Al columnista Manuel Buendía no le pasó por alto esta situación pues señaló:

En realidad el pretexto de Jodorowski no es más que eso, un pretexto. El trasfondo de la cuestión es poner en pie de guerra a centenares de miles de católicos en una cruzada nacional supuestamente contra la pornografía para esconder los fines verdaderos. La fracción del clero católico que encabeza el arzobispo de Puebla está accionando ya los dispositivos necesarios para asumir posiciones desde las cuales ejercer presión sobre el gobierno. La bandera será la pornografía, pero la maniobra desembocará en planteamientos típicamente macartistas.¹⁵

Márquez y Toriz desempeñó —al igual que en los años sesenta— un papel fundamental en la lucha contra el movimiento universitario popular de 1972-1973 aunque, como observa Nicolás Dávila Peralta, a diferencia de aquellos años, en esta ocasión lo hizo más bien orillado por las presiones de la derecha poblana.¹⁶

Habría que aclarar, sin embargo, que no todos las autoridades eclesiásticas estaban de acuerdo en que la Iglesia fuese utilizada como ariete contra el movimiento universitario popular, y en general contra los diversos movimientos sociales que estallaron en ese periodo. Así lo manifestó claramente el entonces arzobispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, durante su visita a la UAP, el 17 de julio de 1970, respondiendo a la invitación que le hicieron los estudiantes de la preparatoria popular. En dicho acto, aparte de manifestar su identificación con

los ideales de la Reforma Universitaria, Méndez Arceo señaló que las estructuras de la Iglesia tenían que ser transformadas a efecto de que estuviese en condiciones de cumplir su compromiso con los pobres. En ese sentido, expresó: “la verdadera razón del cambio de la Iglesia es la palabra de Dios, es el pobre, el hambriento, el que clama justicia, el preso condenado sin culpa o aquel que convicto y confeso no recibe el trato humano”.¹⁷

La visita del arzobispo de Cuernavaca, que por cierto provocó una gran irritación entre los sectores conservadores de Puebla, dejó una impronta imborrable en la comunidad universitaria poblana, y entre los creyentes que aspiraban a que la Iglesia dejara de ser un bastión de los poderosos contra los movimientos populares.

La crisis social

Al arribar la década de los setenta el aparato productivo de Puebla —en particular la industria textil— despierta, pues, con la noticia de que ya no estaba en condiciones de generar el desarrollo económico que requería la entidad, ni en posibilidades de responder con éxito a los grandes desafíos que le planteaba la sociedad en esa etapa. Ciertamente, como señalamos en líneas anteriores, Puebla experimenta en esa etapa un notable desarrollo industrial, pero éste no trae consigo la generación de nuevos empleos, lo cual es de comprenderse si tomamos en cuenta que se basó en procesos tecnológicos intensivos que propiciaron un gran desplazamiento de trabajadores.

De acuerdo a información proporcionada por Martha García Amero, tan sólo en la ciudad de Puebla el número de empresas textiles entre 1970 y 1983 se reduce en 67 por ciento (de 200 establecimientos en el primer año se pasa a 66 en la segunda fecha de referencia). Esto propicia que de 16 mil

trabajadores que existían en el primer año de referencia se pase a 14 mil en 1983.¹⁸

Mientras que el aparato productivo se mostraba incapaz de generar nuevos empleos, la población del estado de Puebla crecía vertiginosamente, duplicándose entre 1940 y 1970, fenómeno que marcha en contrapunto con la notable urbanización que tiene lugar en esos años. Al iniciarse la década de los setenta, la población urbana ya constituía 47 por ciento, en contraste con 33 por ciento en 1950.

La capital del estado, según el censo de 1970, concentraba 413 mil habitantes, de los dos millones 548 mil que tenía la entidad. Este fenómeno obedeció principalmente a la industrialización que tuvo lugar a mediados de los sesenta, la cual propicia que amplios sectores rurales decidieran emigrar a las ciudades, en particular a la ciudad de Puebla. A la vez este hecho fue un resultado de la crisis que comenzó a experimentar el agro poblano en esa etapa. Si bien en 1967 el gobierno de Aarón Merino Fernández había intentado llevar la “revolución verde” al estado mediante el impulso a nuevas tecnologías y métodos de producción, lo cierto es que tal proyecto no alcanzó los fines esperados, continuando el agro poblano con sus seculares limitaciones para asegurarle un adecuado nivel de vida a los campesinos. Hacia 1970 las tierras de riego ascendían tan solo a la cantidad de 98 mil 338 hectáreas, mientras que las de temporal ascendían a 732 mil 282 hectáreas. Esto sobredeterminó la formación de campesinos depauperizados, y el fenómeno que Severino Cortés denominó “subproletariado agrícola”.¹⁹

Esa situación, aunada a la subsistencia de grandes latifundios y de cacicazgos seculares —particularmente en la Sierra Norte del estado—, provocó el estallido de varias luchas campesinas en esos años, las cuales tenían como eje principal la adquisición de la tierra. En una primera, tales demandas son encauzadas por la Central Campesina Independiente (CCI), y después, por la Federación Independiente de Obreros Agrícolas

y Campesinos (FIOAC), vinculada al Partido Comunista Mexicano (PCM). Esta organización impulsa el 10 de abril de 1972 una iniciativa que habrá de tener un gran impacto en el movimiento campesino, no solo a nivel estatal sino también a nivel nacional: nos referimos a la marcha agraria hacia la ciudad de México, que parte simultáneamente de las capitales de varios estados. Aunque no pudo llegar a su destino, debido a que el ejército se lo impidió, estimuló de manera notable las luchas por la tierra en todo el país, principalmente en Puebla.

Al respecto Ramón Danzós Palomino —el entonces líder principal de dicha organización, quien se distinguió además por su solidaridad hacia la Universidad Autónoma de Puebla— anotaba:

Esta marcha tuvo repercusiones importantes en todo el país; fortaleció considerablemente la decisión de lucha de los campesinos así como de otros sectores que solidariamente participaron en esta movilización, principalmente los agrupados en el Frente Obrero Campesino Estudiantil Popular (FOCEP), y se fortaleció también la organización de la CCI y su prestigio, tanto en las masas campesinas, como entre los sectores democráticos y verdaderamente revolucionarios.²⁰

Durante los años de 1972 y 1973 la FIOAC se fortalece de manera notable en el estado, creando varios comités regionales y distritales en los valles de Tepeaca, Tecamachalco, Cholula, Atlixco y la Sierra Oriental del estado de Puebla.²¹

El hecho de que la dinámica industrial no generase los empleos que requería la entidad propicia la formación de un inmenso ejército industrial de reserva, pero el problema es que buena parte del mismo estaba constituido por mano de obra carente de calificación. No es casual, por ello, que de 1960 a 1970 la población clasificada como “improductiva” aumentase

de 106 mil 966 personas a 147 mil 501, de la cual, 50.6 por ciento se concentraba en el municipio de Puebla.²² Ante tal situación, gran parte de esa población se vio obligada a ubicarse en el llamado “sector informal” de la economía, principalmente como vendedores ambulantes.

En esos años estallan varios movimientos sociales en la entidad —sobre todo en la ciudad de Puebla— como resultado del malestar popular ante algunas medidas que adopta el gobierno estatal, como el aumento en las tarifas del transporte urbano y del consumo doméstico de agua.

Estallan, asimismo, manifestaciones de inconformidad en algunos sectores de la clase obrera contra el denominado charrismo sindical. Es el caso, por ejemplo, del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM), quien a raíz de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje lo despoja ilegalmente de su contrato colectivo de trabajo, el 9 de septiembre de 1971, inicia uno de los movimientos sindicales más importantes de esa década. La sección Puebla del STERM se convierte en una de las combativas de dicho sindicato, vinculándose con los otros movimientos sociales que estallan en la entidad.

En abril de 1972, los obreros de Volkswagen deciden por unanimidad romper con la CTM, y crear un sindicato independiente. Ello los lleva a vincularse con el STERM y con el Frente Obrero Campesino Estudiantil Popular (FOCEP), que había surgido al calor del movimiento universitario que estalla en se mismo año en la principal casa de estudios de la entidad.

Asimismo, en la Universidad Autónoma de Puebla estalla otra secuela más del proceso de Reforma Universitaria que surge en 1961. Tal movimiento es originado, por un lado, por la descarada intromisión gubernamental en su vida interna; y, por otro, por los problemas que genera la notable expansión de su población escolar, el cual se agudiza debido a sus limitaciones económicas. En el ciclo escolar de 1972 la inscripción desbordó

las previsiones: se registraron quince mil estudiantes. En el anuario de 1968 se esperaba una población de doce mil estudiantes. En 1967 la UAP tuvo una población de siete mil 473 alumnos, la cual en 1968 se elevó a nueve mil 824, y en 1969 a diez mil 638.²³

La UAP, pues, comenzaba a enfrentar el problema de la masificación creciente que enfrentaron las universidades mexicanas en esa época. En la década de los sesenta sólo había 106 mil 200 alumnos inscritos en educación media, pasando a 335 mil 438 al iniciarse los setenta. Asimismo, mientras que en 1960 había 28 mil 100 alumnos inscritos en educación superior, en 1970 la población aumenta a 271 mil 275.²⁴

Frente a la problemática descrita, las autoridades universitarias se vieron ante la necesidad de restringir la matrícula, lo cual suscitó un gran malestar entre los estudiantes rechazados, quienes recibieron el respaldo de los comités de lucha de la institución. El problema se presentó principalmente en la preparatoria diurna Benito Juárez y en la escuela de Medicina.

El gobierno estatal y las principales organizaciones del sector privado local, en lugar de preocuparse por buscar salidas concretas a la problemática de referencia, adoptaron iniciativas hostiles hacia el movimiento democrático universitario, lo cual no hizo otra cosa que exacerbar los conflictos que padecía la universidad (como lo veremos, en el capítulo II).

La crisis política

El 8 de agosto de 1968 Rafael Moreno Valle presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública (SSA) en el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, con el objeto de postularse como candidato del PRI a la gubernatura de Puebla.

Unos días antes Alfonso Martínez Domínguez, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, hizo acto de

presencia en la entidad a efecto de “auscultar” la opinión de las bases de su partido. Las elecciones se realizarían en noviembre de 1968.

Entre los otros aspirantes a la gubernatura se encontraban Gonzalo Bautista O'Farril y Cosme Aguilera. El primero gozaba de un gran ascendiente en Puebla, y sin lugar a dudas era el que tenía más respaldo, no sólo en el interior del tricolor, sino entre los principales sectores de la burguesía poblana. Parafraseando las célebres palabras que Vicente Lombardo Toledano aplicó a Miguel Alemán, O'Farril era uno de los “cachorros” favoritos del cacicazgo avilacamachista, dado que provenía de una familia muy vinculada al fundador de este enclave, Maximino Ávila Camacho. De 1953 a 1954 fue rector de la Universidad de Puebla, brillando de manera notable en su gestión.²⁵

Sin embargo, dada su lealtad a Díaz Ordaz, Moreno Valle fue impuesto como “candidato de unidad”, lo cual generó un gran malestar entre los sectores que se inclinaban por la candidatura del doctor Bautista O'Farril, a quien veían como un candidato idóneo por su arraigo en Puebla, mientras que a aquél lo miraban como un “candidato del centro”.

Aunque los partidarios de O'Farril se “disciplinaron”, lo cierto es que la imposición del exsecretario de Salud generó todo un cúmulo de rencores, no solo en el seno del PRI, sino principalmente entre la burguesía poblana. Aunque Moreno Valle intentó ganarse la buena voluntad de ésta, retomando algunas de las iniciativas modernizadoras del ingeniero Aarón Merino Fernández, su gestión se caracterizó por un periodo de gran inestabilidad política.

Ello provocó el surgimiento de grandes figuras al interior del bloque en el poder en Puebla, deteriorándose de manera notable, en particular, el Partido Revolucionario Institucional, tal como se observó en los comicios de noviembre de 1971, en los que se renovaron las autoridades municipales. En la ciudad

capital la disputa fue tan reñida que el PRI —quien postuló a Bautista O'Farril— se vio obligado a recurrir al fraude para vencer al candidato del PAN, Alejandro Cañedo Benítez, lo que a la postre generó un gran resentimiento entre la ciudadanía poblana, hecho que habría de tener consecuencias fatídicas para el tricolor en años posteriores.²⁶ Fue la primera ocasión en la historia moderna de la entidad en la que el entonces partido gobernante estuvo a punto de perder su dominio avasallador en la ciudad capital.

Todo ese complejo de problemas fue la fuente que alimentó la caldera que habría de estallar en los primeros años de la década de los setenta, cuando los círculos más beligerantes de la derecha poblana —encabezados por el gobernador Bautista O'Farril— desatan una feroz ofensiva contra la Universidad Autónoma de Puebla, convencidos de que esta institución era la atalaya del “comunismo ateo” que pretendía apoderarse del país y del estado en esos años.

¹ García Amero, Martha, “El movimiento obrero en Puebla”, en *Los Movimientos Sociales en Puebla*, t.II, Departamento de Investigaciones Arquitectónicas y Urbanísticas (DIAU)-Instituto de Ciencias de la UAP, Puebla, 1986, p. 28.

² González Lara, Víctor, “Los años treinta en Puebla: momento propicio a un desarrollo de la industria manufacturera”, en *Boletín de investigación del movimiento obrero*, CIHMO-ICUAP, año V, núm. 8, marzo de 1985, p. 69.

³ Lomelí Vanegas, Leonardo, *Breve historia de Puebla*, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica-Fideicomiso Historia de las Américas, México, 2001, pp. 374, 375.

⁴ Gamboa Ojeda, Leticia, *Los empresarios de ayer*, Universidad Autónoma de Puebla, Centro de Investigaciones Históricas del Movimiento Obrero, México, 1985, p. 262.

⁵ Contreras Cruz, Carlos, “La Ciudad de Puebla en el siglo XIX: espacio, población y estructura productiva”, en *Puebla, de la Colonia a la Revolución*, Centro de Investigaciones Históricas y Sociales del Instituto de Ciencias de la UAP, Puebla, 1980, pp. 257, 258.

⁶ Alba, Carlos, “Las respuestas a la crisis en dos metrópolis regionales”, en *Las realidades regionales de la crisis nacional*, El Colegio de Michoacán, Morelia, 1996, p. 154.

⁷ González Lara, Víctor, *op. cit.*, p. 78.

⁸ Lomelí Vanegas, Leonardo, *op. cit.*, p. 384.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Según Martha García Amero tal proceso se desarrolló en dos grandes etapas, una, en que priva el problema de la modernización tecnológica, y otra, en que priva el problema de la integración de la industria. La primera etapa, a su vez, contempla dos fases. A la primera, la investigadora citada le denomina modernización/recomposición, y arranca de 1946 a 1966, y está constituida “por ese proceso que se inicia con el impulso a la innovación tecnológica estimulada por los altos niveles de exportación, que tropieza de inmediato con el cierre del mercado externo”. La segunda fase, a la que denomina “fase de modernización compulsiva” —que abarca de 1966 a 1976-1977— surge a raíz del establecimiento de un nuevo marco legal (el Contrato Ley) que se impone a toda la industria textil, el cual termina por favorecer a los capitales más fuertes. La segunda etapa, la integración de la industria textil, arranca en 1975-1976, y llega a nuestros días. *Vid.* “El movimiento obrero en Puebla”, *op. cit.*, pp. 39-41.

¹¹ Hasta donde llega nuestra información no se ha escrito aún algún texto en el que se aborde ampliamente esta problemática. El historiador Jesús Márquez Carrillo ha hecho observaciones muy interesantes, pero fragmentarias. Esperamos que pronto se dé a la tarea de desarrollar sus investigaciones al respecto.

¹² Márquez Carrillo, Jesús, notas al libro *La lucha universitaria en Puebla*, de Manuel Lara y Parra, edición del autor, p. 272. En la nota 82 escribe: “los negocios comerciales y las pequeñas y medianas empresas de Puebla, hasta principios de los años sesentas, estuvieron administrados generalmente por sus propietarios. Sin embargo la Ley de Fomento Industrial en 1957, el proyecto de hacer la autopista México-Puebla, el nacimiento de la comisión Permanente de Promoción Industrial en 1959, entre otros, condicionaron la necesidad de modernizarse, planificando ‘científicamente’ el uso de sus recursos. Así el 28 de enero de 1959 el Consejo Universitario de la UAP acordó crear la Escuela de Administración de Empresas, hoy escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública”.

¹³ Yáñez Delgado, Alfonso, *La manipulación de la fe*, Imagen Pública y Corporativa, Puebla, 2ª ed., 2000, 268 pp.

¹⁴ “En Puebla —anota Jesús Márquez Carrillo—, contrariamente a lo que sucede en otros estados, al término del conflicto cristero (1929), la estructura jerárquica y laica de la Iglesia no cambia. Sobre esta base Octaviano Márquez y Toriz (1904-1975) asume el mando de la grey católica en 1951. Furibundo

defensor de Franco y la tradición hispánica, ataca frontalmente a protestantes, liberales, masones, etcétera; aboga por la primacía de la Iglesia en la sociedad”, *op. cit.*, nota 38.

¹⁵ Buendía, Manuel, “El gran cazador de brujas”, en *El Día*, 2 de junio de 1972.

¹⁶ Dávila Peralta, Nicolás, *Las santas batallas, el anticomunismo en Puebla*, Cuadernos del Archivo Histórico Universitario, BUAP-Gobierno del Estado de Puebla, 2001, p. 161.

¹⁷ “Sergio Méndez Arceo en la UAP”, en *Tiempo Universitario*, Gaceta Histórica de la UAP, núm, 13, 8 de julio de 1999.

¹⁸ Amero García, Martha, *op. cit.*, p. 34.

¹⁹ Cortés, Severino, “El movimiento campesino en Puebla”, en *Los movimientos sociales en Puebla*, *op. cit.*, t I, p. 266.

²⁰ Danzós Palomino, Ramón, *Desde la cárcel de Atlixco*, Ediciones de Cultura Popular, México, 1974, pp. 162, 164.

²¹ Cortés, Severino, *op. cit.*, p. 286.

²² Castillo Palma, Jaime, “El movimiento urbano popular en Puebla”, en *Los movimientos sociales en Puebla*, *op. cit.*, t. II, p. 220.

²³ *Novedades*, 3 de enero de 1972.

²⁴ Solana, Fernando; Raúl, Cardiel Reyes y Raúl Bolaños Martínez, *Historia de la educación pública en México*, SEP-FCE, 1981, p. 270.

²⁵ Entre sus méritos más notorios destaca el haber trasladado al salón Barroco la sillería del salón de actos del antiguo Colegio de San Pantaleón, verdadera obra maestra de la imaginación artística poblana.

²⁶ C. Manjarrez, Alejandro, *Puebla, el rostro olvidado*, 2ª ed., BUAP, Puebla, 1999, p. 249. El ímpetu panista de 1971 cristalizó en julio de 1973, cuando el PAN obtuvo la mayoría de votos en dos distritos federales de la ciudad de Puebla.

CAPÍTULO II

LAS CONTRADICCIONES DEL BLOQUE EN EL PODER Y SU IMPACTO EN LA UNIVERSIDAD

A finales del siglo XIX, e incluso en la primera década del siglo XX, el Colegio del Estado experimentó avances notables en su vida académica y cultural, por lo cual algunos historiadores designan a ese periodo como “la época de oro” de dicha institución. En su libro *Conflictos estudiantiles y poder estatal en Puebla (1900-1925)*, Luis Navarro Rojas escribe lo siguiente:

El siglo XX encontró al Colegio del Estado transformado en una de las instituciones de mayor prestigio en materia de educación superior, no solamente para la entidad, sino también para otras regiones, particularmente para el centro, sur y sureste del país, erigiéndose como una opción para el desarrollo profesional... La cuestión científica ocupó un lugar preponderante dentro de la labor del Colegio, y para ello se dotó al establecimiento de lo último en materiales y equipo; de este modo se engrandeció la clase de física, se separaron los servicios del Gabinete y del Observatorio; en 1904 se le suministró de una mesa de trabajo esmaltada, y en 1906, se adquirió una colección de sustancias radioactivas y dos estaciones de telegrafía inalámbrica con el sistema Herzog, que fueron las primeras en llegar al país. También en 1906 se logró obtener un grupo electrógeno que desarrollaba una energía de 5 kilowatts.¹

Tales avances se debieron —como observa el investigador de referencia— al hecho de que “la institución respondió a los intereses que el engranaje porfirista le impuso, por tanto no es de extrañar el impulso que había recibido”.²

El Colegio comenzó a declinar en su vida académica a raíz de la ley de 1889, ésta prescribía que la pensión de herencias que disfrutaba la institución desde 1843, habría de compartirla con la escuela de Artes y Oficios y el Hospicio, afectando tal iniciativa los recursos del Colegio.³

Los estudiantes del Colegio del Estado tuvieron una participación destacada en el movimiento antirreeleccionista encabezado por Francisco I. Madero. Los guiaba no sólo el ánimo de reorientar el sentido de la enseñanza a favor de todo el pueblo —y no sólo a favor de las élites porfiristas— sino también el deseo de participar en el cambio revolucionario del país. Tal como escribe Manuel Lara y Parra, quien fue rector de la UAP del 5 de abril de 1963 al 10 de septiembre de 1965,

los estudiantes (del Colegio del Estado) creyeron que el cambio no sólo debería ser político sino total, que involucrara a la juventud de entonces y a las generaciones futuras en la gran marcha que ellos suponían debería ser el movimiento revolucionario de 1910.⁴

La Directiva de la Sociedad de Estudiantes del Colegio, encabezada por Alfonso G. Alarcón y Luis Sánchez Pontón, convocó a sus condiscípulos a participar al lado de Madero, quienes llenos de euforia decidieron participar en el movimiento antirreeleccionista. Acto seguido los estudiantes tomaron el estandarte de la institución a efecto de enarbolarlo en las jornadas que habrían de presentarse, como en el acto apoteótico que tuvo lugar al presentarse Madero en Puebla, el 15 de mayo de 1910.⁵

Aunque la inestabilidad política y social que imperó en el país en las primeras décadas que siguieron al triunfo de la Revolución hicieron imposible la cristalización de los propósitos renovadores de la juventud maderista del Colegio del Estado, lo cierto es que su idealismo impregnó a las futuras generaciones, las cuales con el paso de los años habrían de retomar el tirso de la reforma de su centro de estudios. El historiador Jesús Márquez refiere al respecto:

En Puebla, entre 1920 y 1930, hubo varios grupos estudiantiles con el espíritu de introducir la revolución y sus reformas al plano educativo. Quizá el grupo más interesante desde muchos puntos de vista sea el Bloque Único de Estudiantes Socialistas del Colegio del Estado (1929-1939), en el que participaron J. Ramón Palacios, Saturnino Téllez, Manuel Popoca, Julio Glockner, Antonio Sáenz de Mier, Gabriel y Enrique Carrasco, Ignacio Hermoso, y otros.⁶

Entre los principales anhelos de esas generaciones destaca el afán por transformar el Colegio en Universidad, como señaló Lara y Parra:

La Juventud de aquella época consideró que la transformación requerida se había de lograr cambiando el nombre del plantel. Así comenzó a pensar en sustituir la palabra colegio por la de Universidad. Un tanto ilusos iniciaron su lucha por alcanzar la calidad por el milagro de un término. Para ello habría que pelear en contra de los conceptos oficiales que pensaban que el cambio de nombre significaría mayor responsabilidad para el régimen, y no lo permitiría, pero la juventud se echó a las espaldas esa tarea y esa responsabilidad para crear la institución que diera mejores profesionistas.⁷

Durante la era del predominio del llamado cacicazgo avilacamachista, el Colegio del Estado estuvo sometido a los gobiernos en turno, quienes lo utilizaban como un importante bastión para su predominio ideológico y político. Dicho enclave premoderno se inicia con la llegada al poder, en 1937, de Maximino Ávila Camacho. Le siguen a éste, durante los siguientes 35 años, Gonzalo Bautista (1941-1945), Carlos I. Betancourt (1945-1951), Rafael Ávila Camacho (1951-1957), Fausto M. Ortega (1957-1963), Antonio Nava Castillo (1963-1964), Aarón Merino Fernández (1965-1969), Rafael Moreno Valle (1969-1972) y Gonzalo Bautista O'Farril (1972-1973).

Dicho cacicazgo constituyó una sociedad cerrada en la que estaban excluidas la tolerancia y las libertades democráticas. Predominaban el autoritarismo y la represión contra todos aquellos que osaban desafiar el orden establecido. Escribe Will Pansters:

El estricto control de las principales instituciones políticas, organizaciones campesinas y sindicales por parte de los avilacamachistas, combinado con la estrecha alianza con la burguesía regional, dieron a la estructura del poder regional un carácter cerrado a mediados de la década de los cincuenta. No se toleraba la oposición dentro o fuera de las instituciones que se encontraban bajo el control de dicho enclave premoderno. Los intelectuales y periódicos críticos habían salido del estado o habían sido expulsados. Además, las facciones políticas disidentes ya habían sido perseguidas o cooptadas durante la gubernatura de Maximino. La cerrada naturaleza del bloque de poder regional y la carencia de espacio para la formación de bandos políticos alternativos fueron ciertamente condiciones importantes para el régimen de los avilacamachistas, pero al mismo tiempo contribuyeron a la petrificación de la estructura del poder regional.⁸

En el transcurso de las primeras etapas de dicho enclave caciquil los diversos grupos y sectores de la burguesía poblana no mostraban un marcado protagonismo político, simple y sencillamente porque no tenían necesidad de ello dado que el gobierno estatal les garantizaba la estabilidad que requerían sus negocios.

Durante varios años los estudiantes del Colegio enarbolaron la demanda de la transformación del colegio en universidad, ora a través de manifestaciones callejeras, ora aprovechando los foros estudiantiles que se llevaban a cabo a nivel nacional; y fue el 23 de abril de 1937 cuando el entonces gobernador, Maximino Ávila Camacho aceptó poner en marcha el proyecto multicitado, el cual, en realidad, no fue precedido de los trabajos que exigía el paso de colegio a universidad. Comenta al respecto Lara y Parra:

Era demasiado simplista el cambio de nombre sin cambio académico. Esto significaba el desconocimiento absoluto del significado de universidad y de las condiciones de la institución del por qué del reclamo juvenil. Para la transformación no hubo un estudio previo que lo fundamentara.⁹

¿Qué razones llevaron a Maximino Ávila Camacho a tomar tal determinación? Tal vez se trató de una simple veleidad de lucimiento personal, como era típico en esa época entre los gobernantes surgidos de la Revolución Mexicana, para quienes era motivo de satisfacción el tener una universidad en sus entidades. Sea lo que sea, la transformación del Colegio en Universidad no fue más allá de un simple cambio de nombre. En los hechos la institución continuaba sujeta a las disposiciones de los gobernantes en turno. No se efectuó ninguna reforma profunda en los planes y programas de estudio, en los cuales siguieron predominando las viejas concepciones del mundo y

de la sociedad. Lejos de que la nueva institución fuese un crisol en el que se reflejasen las inquietudes y aspiraciones del México posrevolucionario, se antojaba una rémora del *Ancien Régimen*.

Manuel L. Márquez fue el último rector del Colegio del Estado y el primer rector de la Universidad de Puebla; así como también, uno de los pocos estudiantes del Colegio del Estado que se opuso tenazmente a que sus condiscípulos apoyaran a Madero. Era un personaje que no se caracterizaba precisamente por su pensamiento progresista, por el contrario, era un hombre al que distinguían su conservadurismo y su incondicionalidad respecto a sus superiores. De ahí que no fuese de ningún modo casual que durante su gestión la Universidad de Puebla estuviese plenamente sometida al gobierno de Maximino Ávila Camacho.

Al arribar Gonzalo Bautista Castillo (1896-1952) a la gubernatura, en 1941, impulsa un proyecto de nueva ley universitaria encaminada a reforzar el control político sobre la institución. En 1942, con la aprobación del congreso local, militariza a la universidad, decisión que se adopta a raíz de la declaración de guerra de México a las potencias del Eje. Todos los centros educativos del país en el que hubiese jóvenes en edad de prestar el servicio militar fueron objeto de dicha medida.

Dado el sometimiento de que era objeto la institución por los gobiernos en turno, los universitarios comenzaron a enarbolar desde esos años la bandera de la autonomía universitaria, pero las condiciones objetivas que predominaban en la entidad no eran propicias para la cristalización de tal objetivo.

No es sino hasta la llegada de Horacio Labastida Muñoz a la rectoría de la institución (1947-1951) que la máxima casa de estudios de la entidad comienza a tomar distancias respecto al gobierno del estado. Su rectorado constituye un hito fundamental para la historia moderna de la institución, ya que durante su periodo ésta deja de ser un centro de estudios quasi medieval para pasar a convertirse en una universidad más acorde con los

signos de los tiempos. Así, por ejemplo, en febrero de 1950 el H. Consejo Universitario aprueba la creación de la Escuela de Físico Matemáticas, iniciativa mediante la cual la institución ingresa al umbral de la ciencia moderna.¹⁰

En dicho acto, Labastida Muñoz —hombre visionario y de ideas progresistas— sintetizó la relevancia histórica de dicha iniciativa:

Para tener un concepto científico, moderno, del mundo, es necesario el estudio metódico y concienzudo de las matemáticas y de la física nuclear, dado que estas ciencias han tenido un desarrollo extraordinario en los últimos años, modificando radicalmente la mayor parte de las ideas científicas anteriores... Si nuestra universidad no proporciona esta enseñanza vive ignorante y retrasada... Para solucionar este problema se ha pensado en la creación de la Escuela de Físico-Matemáticas que ahora propone.¹¹

Mediante tal iniciativa, en efecto, la universidad dio un gran salto en lo referente a su modernización académica. Se trató, sin duda, de un proyecto sumamente audaz porque en ese tiempo la Universidad de Puebla apenas comenzaba a despertar del letargo en que estuvo sumido durante varias décadas, debido al férreo control que ejercían sobre ella las clases dominantes de la entidad.

Además, durante la gestión rectoral de Labastida Muñoz, se creó un ambiente cultural que sacudió la inercia en que vivía la institución. Se impulsaron, asimismo, iniciativas relevantes como el fortalecimiento de la preparatoria de la universidad, en la que se introdujo un magnífico plan de estudios que abarcaba un tronco común, tanto para los abogados como para los médicos y los ingenieros. El destacado periodista y sociólogo

Gastón García Cantú fue el primer director de la preparatoria que trabajó con ese plan.¹²

Un factor que contribuyó de manera notable al impulso de los proyectos de Labastida fue la llegada a la universidad de un núcleo de exilados españoles que habían participado en defensa de la república. Las escuelas más favorecidas con la presencia de estos profesionistas fueron las de Ingeniería y Derecho.¹³

Generalmente se piensa que es a partir del estallido del movimiento de reforma de 1961 cuando se inicia la era moderna de la actual Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sin embargo, en honor a la verdad, se inicia con el rectorado de Horacio Labastida Muñoz. Sus proyectos transformadores fueron, sin duda, una expresión del febril anhelo de cambios que experimentaban los estudiantes y profesores de la época.¹⁴

Lamentablemente Labastida no estuvo en condiciones de cristalizar todos sus proyectos. En 1951, al arribar al gobierno del estado Rafael Ávila Camacho, desistió de continuar en la rectoría una vez que advirtió la intención de éste de volver a controlar rígidamente a la universidad. Y, en efecto, entre las primeras iniciativas de aquél destacó el intento de militarizar a la institución, nombrando a algunos elementos castrenses en los principales puestos de la misma, como la Oficialía Mayor, que habían sido parte de su equipo como director del Colegio Militar.

Los estudiantes, inconformes con el proyecto citado, desencadenaron un fuerte movimiento de protesta que obligó al gobierno a dar marcha atrás.

Este triunfo, como considera Alfonso Vélez Pliego,

representa la primera impugnación importante al cacicazgo avilacamachista y a sus métodos de gobierno. Simboliza también el resurgimiento en las filas estudiantiles de una

conciencia crítica y de las tendencias a su independencia frente a la clase dominante.¹⁵

En dicho movimiento tuvo una participación notable la recién organizada Juventud Comunista, que aun con su escaso número de militantes —no pasaba de diez personas— era capaz de impulsar iniciativas audaces, y de promover iniciativas que encontraban eco entre los universitarios. Destacó, en particular, la actuación del ingeniero Luis Rivera Terrazas, miembro del Partido Comunista Mexicano,¹⁶ quien a partir de entonces habría de convertirse en uno de los líderes más connotados del proceso de Reforma Universitaria.

Este movimiento, además, despertó un viejo sueño de los universitarios: la conquista de la autonomía universitaria. En un principio tal demanda fue una aspiración de sectores reducidos de estudiantes y profesores, pero a partir de la década de los cuarenta se convirtió en un verdadero clamor en el seno de la comunidad universitaria. En el periódico *Umbral*, órgano de la Federación Estudiantil Poblana (FEP), en su edición del 10 de septiembre de 1956, se describía en términos muy precisos esa realidad: “Año con año el anhelo por la autonomía universitaria ha ido creciendo; algunas generaciones pasadas se lanzaron a la lucha por adquirirla, sin embargo, hasta ahora este sentido unánime de los universitarios conscientes ha sido defraudado”. Y se subrayaba que desde 1956 la FEP estaba dispuesta a impulsar un fuerte movimiento orientado a hacer realidad ese viejo anhelo.¹⁷

Y, en efecto, la FEP se dio a la tarea de organizar varias movilizaciones en aras de ese objetivo, que culminaron con la conquista de la autonomía en ese año.

Durante mucho tiempo predominó la versión de que la Universidad de Puebla obtuvo su autonomía gracias a la “benevolencia” del gobernador Rafael Ávila Camacho. Pero en realidad, como subraya Karmele Azcué Bilbao: “La obtención

de la autonomía por los universitarios poblanos fue la cristalización de un proceso que comenzó mucho antes de 1956”.¹⁸

Ciertamente al parecer hubo buena voluntad del gobernador, derivada sin duda de su afán (retomando la actitud de su hermano Maximino) de lucimiento personal. No es de ningún modo casual que poco tiempo después recibiera el doctorado *honoris causa* por parte de la UAP, iniciativa que seguramente indujo, por más que el H. Consejo Universitario sostuviese —en una sesión celebrada el 10 de mayo de 1957— que se trataba de una decisión tomada de *motu proprio*. Pero no conformes con ello, los universitarios adoptaron diversas medidas de presión para conquistar la autonomía. Así, entre otras iniciativas, solicitaron la solidaridad de las otras universidades del país. De este modo, en noviembre de 1956 el Congreso del Estado aprobó el proyecto presentado por la FEP, no obstante, le introdujo diversas modificaciones que irritó a los universitarios. La autonomía que se concedía a la universidad era restringida, lo cual propiciaba que la institución continuase sujeta al gobierno. Aunque en el “considerando” se señalaba que el otorgamiento de la autonomía era “uno de los medios más eficaces” para que la universidad cumpliera con sus fines, en los hechos, reiteramos, se imponía una cortapisa a la misma, la cual se encontraba en la forma de gobierno de la universidad, que quedaba estructurada del siguiente modo: Artículo 10, 1. El Consejo de Honor, 2. El Consejo Universitario, 3. El rector y 4. Los directores de facultades, escuelas o institutos. En el Artículo 11, en su fracción 1, se indicaba: “el Ejecutivo del Estado designará a los primeros componentes de este Consejo”.¹⁹ Como puede verse, pues, la universidad continuaba sujeta al gobierno.

Sin embargo, los universitarios decidieron aceptar el proyecto aprobado, a la espera de que se presentasen condiciones favorables para pugnar por una auténtica autonomía. Esta fue precisamente una de las principales demandas que

enarboló el movimiento universitario que estalló en 1961, aparte de la desaparición del Consejo de Honor.

No es sino hasta la década de los sesenta que comienza a desmoronarse el edificio del cacicazgo avilacamachista. La primera grieta política que se abre en el mismo se presenta durante el mandato presidencial de Adolfo Ruiz Cortínez (1951-1957), cuando el entonces gobernador Rafael Ávila Camacho (1951-1957) se “brinca las trancas” de las normas del sistema político para imponer a su sucesor en el gobierno, esto es, Fausto M. Ortega. Ruiz Cortínez se molestó por la “indisciplina” de aquél, ya que simpatizaba con otros políticos poblanos que no estaban en el ánimo del mandatario poblano. Así las cosas, dada la forma en que había sido impuesto, el nuevo gobernador corría el riesgo de no recibir el apoyo del gobierno federal. Frente a ese problema, Fausto M. Ortega decide ganarse la buena voluntad del presidente de la república tomando distancias respecto a su predecesor. Sin duda, el nuevo mandatario poblano intuía que soplaban vientos adversos contra los cacicazgos a nivel nacional. Habría que recordar al respecto que tanto Ruiz Cortínez como López Mateos, a lo largo de sus administraciones, se manifestaron adversos a esa expresión premoderna de control político. El segundo, en particular, desde su campaña electoral decidió enfrentarse a los principales cacicazgos que sobrevivían en el país. Así, en su paso por San Luis Potosí, lanzó un fuerte ataque al famoso cacique Gonzalo N. Santos, el *alazán tostado*, que tenía el dominio absoluto en esa entidad, en la que su rancho “el Gargaleote” era un verdadero arquetipo del poder económico que gozaban los caciques. En uno de sus principales actos electorales en ese estado, López Mateos declaró: “los caciques duran mientras el pueblo los tolera”.

Sin embargo, los primeros síntomas de la decadencia del cacicazgo avilacamachista no obedecían sólo a factores políticos, también entran en escena todo un complejo de factores

económicos y sociales. Por esos años, se iniciaba a nivel nacional —como señalamos en el capítulo anterior— una modernización del aparato productivo del país, como consecuencia de las políticas desarrollistas en los sexenios de Alemán, Ruiz Cortínez y del propio López Mateos, hecho que condujo, entre otras cosas, al desplazamiento de no pocos de los sectores económicos tradicionales. En Puebla, los grupos empresariales que habían sido el apoyo tradicional del cacicazgo avilacamachista comienzan a experimentar cierto vértigo ante lo que parecía una modernización ineluctable, pero en lugar —como decíamos líneas arriba— de adoptar medidas orientadas a adaptarse a esa situación, por el contrario, se atrincheraron no sólo en sus métodos tradicionales de hacer negocios sino también en sus valores y prácticas políticas y culturales. De este modo, la petrificación de la estructura de poder regional comienza así, poco a poco, a convertirse en un obstáculo para el desarrollo económico del estado. En ese periodo, como observa Pansters, la carencia de inversiones productivas y la cambiante situación económica internacional “fueron una amenaza para la burguesía industrial poblana, y estuvieron acompañados por quiebras y despidos forzosos”.²⁰

El estallido del movimiento de Reforma Universitaria de 1961

El proceso de reforma que estalla en la UAP, en 1961, contribuye de manera notable a la crisis del cacicazgo avilacamachista. Aunque el movimiento perseguía básicamente el objetivo de impulsar un conjunto de transformaciones orientadas a erradicar de la institución una estructura autoritaria de gobierno y una estructura académica oscurantista y anquilosada, despertó el encono de los grupos más atrasados de la burguesía y del clero católico, quienes a través de organizaciones como el Frente Universitario Anticomunista (FUA) y el Movimiento Universitario

de Renovadora Orientación (MURO),²¹ se dieron a la tarea de combatir a los estudiantes que enarbolaban el proyecto de Reforma Universitaria, convencidos de que ésta era una expresión inequívoca de los “planes perversos del comunismo internacional”.

Un factor que contribuyó de manera notable al estallido de dicho movimiento fue el triunfo de la Revolución Cubana, hecho que no sólo provocó un gran impacto entre los universitarios poblanos sino en la mayoría de los universitarios del país. En la “Declaración de Morelia”, documento elaborado por la Conferencia de Estudiantes Democráticos (CNED) en mayo de 1963, se señalaba lo siguiente:

La invasión a Cuba, perpetrada por mercenarios adiestrados por la Central Intelligence Agency (CIA), movilizó a los estudiantes de todo el país en protesta por la descarada intervención del imperialismo norteamericano en los asuntos del pueblo hermano. La humillante derrota del imperialismo en Playa Girón, significó una brillante victoria de los movimientos de liberación de los pueblos oprimidos... Las grandes conquistas de la Revolución Cubana han espantado a la reacción y al imperialismo, los que se han lanzado a una histórica campaña contra los centros de enseñanza, reprimiendo y mediatizando a las organizaciones estudiantiles, porque se dan cuenta de la gran fuerza que éstas han demostrado tener en sus luchas por el progreso de México.²²

En un principio los núcleos universitarios poblanos que enarbolan la solidaridad con la Revolución Cubana son rechazados, pero paulatinamente encuentran una buena respuesta, no sólo entre sus compañeros, sino incluso en amplios sectores de la población.²³

Retomando la famosa frase de Lenin, la universidad era el “eslabón más débil de la cadena” de la estructura de poder

estatal. ¿Por qué decimos esto? Porque en una sociedad asfixiada por unas estructuras políticas y sociales sumamente rígidas, era el único espacio en que podía respirarse un poco de libertad y tolerancia. Aunque la institución estaba controlada por los sectores más retardatarios de la entidad, era un ámbito más sensible a los ánimos modernizadores que circulaban por el país, y, sobre todo, a las iniciativas de reforma del presidente López Mateos, algunas de las cuales fueron asumidas como “medidas de carácter socialista”. Entre ellas descollaban la adquisición por parte del gobierno de algunas empresas productoras de energía eléctrica en 1960, y la edición de los libros de texto gratuito.²⁴

A la burguesía poblana —al igual que a los otros sectores más reaccionarios del sector privado del país— le alarmó, sobre todo, el radicalismo retórico del presidente López Mateos, en particular su célebre pronunciamiento en el sentido de que su gobierno “era de extrema izquierda, dentro de la Constitución”, y el respaldo abierto a la Revolución Cubana.

De ahí que desprendiese la conclusión de que el movimiento universitario estaba siendo cobijado por el gobierno federal, planteamiento que si bien encerraba algo de verdad —la Federación, en efecto, veía con buenos ojos al movimiento, dado que el mismo podía “oxigenar” la sofocante atmósfera política de Puebla—, estrictamente hablando, constituía una exageración el aseverar que el movimiento era estimulado desde el poder central, dado que su dinámica obedecía a las contradicciones que en ese tiempo enfrentaba la Universidad Autónoma de Puebla, sobredeterminadas principalmente por la intervención del gobierno estatal en su vida interna. Habría que tomar en cuenta, sobre todo, los problemas que enfrentaba la universidad en esa época. Hacia 1959 su población estudiantil alcanzaba ya la cantidad de tres mil 752 alumnos, comenzando así un proceso de masificación que haría estallar las rígidas estructuras universitarias.²⁵

El supuesto respaldo del gobierno federal al movimiento universitario propicia que la burguesía poblana decida establecer vínculos con las otras fracciones beligerantes del sector privado del país —como el Grupo Monterrey— que también se oponían a las iniciativas reformadoras del presidente López Mateos.

Desde esa época, asimismo, la burguesía poblana decide impulsar la creación de diversas organizaciones sociales para enfrentarlas contra el movimiento democrático, en unos casos, y en otros, contra el gobierno federal. De este modo pone en marcha una estrategia que años más adelante mostrará su efectividad: la creación de organizaciones dentro de la sociedad civil para luchar por sus intereses. Es así como en 1961 surge el Comité Coordinador de la Ciudadanía Poblana, encabezado por Abelardo Sánchez Gutiérrez, organismo que logra aglutinar en torno suyo a las organizaciones empresariales más importantes de la entidad, como el Centro Patronal de Puebla, la Cámara de la Industria Textil de Puebla y Tlaxcala, y los principales clubes de servicio como el Club Rotario de Puebla y el Club de Leones.

El movimiento universitario despierta a no pocos sectores sociales explotados que no manifestaban su malestar, ora por el temor a la represión, ora porque también eran presa del adormecimiento que envolvía al conjunto de la sociedad. Intempestivamente brotan también diversas expresiones del malestar popular. En el campo comienzan a estallar diversas luchas por la tierra. En la ciudad capital estallan diversos actos de protesta ante el alza de las tarifas del servicio telefónico y del transporte urbano. Asimismo, entre los trabajadores crece el descontento ante los despidos masivos que se producen como resultado del cierre de las viejas empresas textiles.

Ante esa irrupción de las clases subalternas, la burguesía poblana y los sectores más atrasados del clero católico deciden de consuno “restaurar el orden”, desatando una vehemente

embestida contra el movimiento universitario, convencidos de que éste amenazaba con provocar una “insurrección comunista” en la entidad. Esta situación nos hace evocar aquellas palabras que hizo Gramsci en sus *Cuadernos de la cárcel*:

Ocurre casi siempre que un movimiento “espontáneo” de las clases subalternas coincide con un movimiento reaccionario de la derecha de la clase dominante, y ambos por motivos concomitantes: por ejemplo, una crisis económica determina descontento en las clases subalternas y movimientos espontáneos de masas, por una parte, y por otra, determina complots de los grupos reaccionarios.²⁶

Para desarrollar la ofensiva contra la universidad, la derecha recurre a las diversas organizaciones religiosas, cívicas, empresariales y culturales que existían en la entidad. El entonces arzobispo de Puebla, Octaviano Márquez y Toriz, desempeña un papel fundamental en tal ofensiva, lanzando la tristemente célebre consigna “cristianismo sí, comunismo no”. En la pastoral del 14 de junio de 1961, el arzobispo poblano declara:

Se engañan aquellos que creen que se trata de problemas puramente locales, o de reducidos grupos de personas, o que atañen tan sólo a ciertos aspectos económicos o estudiantiles de la vida local. No es así. Tenemos argumentos para afirmar que muchas de las cosas que están sucediendo en nuestra patria, y últimamente en nuestra ciudad de Puebla, están profundamente ligadas a conjuras internacionales, a todo un plan mundial de destrucción de nuestra civilización cristiana, a un titánico esfuerzo de los poderes del mal para adueñarse de nuestra patria y de todas las naciones.²⁷

El miedo al cambio que experimentaba la burguesía poblana y la situación de los sectores más atrasados de la entidad no sólo era un fenómeno local, sino nacional, presentándose principalmente en las regiones en las que los sectores más conservadores del clero católico tenían una amplia influencia social. Escribía Pablo González Casanova:

En el México actual y en zonas relativamente vastas del país, se advierte una estrecha vinculación del clericalismo tradicional con la guerra fría, del cristianismo político con un anticomunismo que manipula los símbolos primitivos, los temores de la sociedad tradicional, para provocar verdaderos fenómenos de pánico y de agresividad entre la población más ignorante y fanática, sea campesina o de clase media.²⁸

Agregaba que entre dichas expresiones de esa manipulación, se encontraban la explotación de las “fobias de la sociedad tradicional”, las “campañas de rumores, acusaciones, llamados alarmantes, que se hacen circular en el campo, los pueblos y hasta las ciudades”.²⁹ Asimismo, recalca:

El uso de instrumentos religiosos... de profetas y profecías, de apóstoles y santos, de imágenes supersticiosas de lo monstruoso, y conceptos populares de lo demoníaco, vinculados y enfrentados al comunismo como entidad infernal y diabólica, en el sentido tradicional del término; ligados a una acción política cada vez más efectiva, en que los sacerdotes van sustituyendo a los maestros como líderes de las comunidades.³⁰

En Puebla, la manipulación de los símbolos religiosos y *la sustitución de los maestros por los sacerdotes como líderes de las comunidades* condujo a la tragedia de Canoa, en septiembre de 1968, a la que haremos referencia más adelante.

Pero bien, volviendo a las reacciones que suscitó el movimiento universitario de 1961, a tal grado llegaron las cosas que la sociedad poblana se dividió en dos grandes bloques: por un lado, quienes apoyaban al movimiento universitario, por otro, quienes combatían al mismo. Al seno de la universidad tal división cristalizó en el conflicto entre “fúas” y “carolinos”: a los primeros se les denominaba así porque su organización más representativa era el Frente Universitario Anticomunista (FUA), encarnaban a las fuerzas que deseaban que la universidad continuase siendo un bastión de las fuerzas más retardatarias de la entidad. Los segundos representaban a las fuerzas que anhelaban la reforma de la institución. Se les llamó así porque su principal sitio de reunión era el edificio Carolino, que en esa época albergaba a todas las escuelas de la universidad.

En otros términos: los “fúas” y los “carolinos” eran los trasuntos modernos de la pugna histórica entre conservadores y liberales.³¹

Manuel Lara y Parra comenta al respecto:

La sociedad tomó partido, dividiéndose según sus intereses. Las agrupaciones obreras hicieron publicaciones al respecto. Los ferrocarrileros manifestaron por medio de los periódicos que ellos dejarían a los estudiantes en libertad para que dirimieran sus dificultades entre ellos mismos. La Confederación Regional de Obreros y Campesinos hizo también declaraciones en el mismo sentido... Se hicieron publicaciones del FUA que incluían la firma de estudiantes y profesionistas, profesores, denunciando como comunistas a una gran cantidad de personas que nunca tuvieron filiación de esta naturaleza, dañando, por las consecuencias, los intereses profesionales de muchos, y dividiendo a la sociedad poblana en dos grupos irreconciliables... Los estudiantes reformadores hicieron una publi-

cación manifestando que “los estudiantes universitarios respetamos las creencias... *no somos comunistas*”.³²

Ciertamente era absurdo el apelativo de “comunistas” que la derecha endilgó a los universitarios, pues si bien participaban núcleos del PCM—encabezados por personalidades como Luis Rivera Terrazas, Enrique Cabrera Barroso, Zito Vera y José Luis Naval— los mismos eran muy reducidos; lo cual no era de extrañar ya que por esos años tal organización aún vivía en la clandestinidad, debido a la hostilidad abierta del gobierno. En ese sentido, en términos estrictos, el movimiento era una constelación de fuerzas, en la que participaban desde liberales y masones, pasando por corrientes identificadas con el PRI, hasta corrientes de católicos progresistas, y de agrupaciones cristianas no católicas: evangelistas, bautistas, testigos de Jehová, etcétera.

El objetivo común de todas esas fuerzas, núcleos y corrientes universitarias, era, por un lado, la defensa del pensamiento laico, el respeto al Artículo 3° Constitucional, y la exigencia de modernización de la vida académica de la universidad. A este respecto, el ingeniero Luis Rivera Terrazas expresaba: “se trataba de que en la universidad se enseñara ciencia, porque no sucedía. Es difícil determinar lo que se enseñaba, pero ciencia no”. E ilustraba el atraso académico de la institución del siguiente modo:

Había un profesor en el área de ciencias sociales que en 1950 decía a sus alumnos frases como ésta: “jóvenes, cuando la aviación sea una realidad...” Es como si un médico le dijera a sus estudiantes: “Ahora que la penicilina sea una realidad, podremos curar muchas enfermedades.” Había otro profesor que decía que la raza mexicana (¡Imagínense, la raza mexicana!) había sido creada por la fusión de la raza española, que

enarbolaba la virgen de Covadonga, con la raza mexicana, que hacía lo propio con la virgen de Guadalupe, como si ésta última hubiese sido azteca. Se enseñaban barbaridades de ese tipo. En matemáticas o en física había profesores que no sabían qué era peso y qué era masa. Los confundían. Como un médico que confundiera el hígado con el riñón.³³

Los universitarios progresistas demandaban, también, el fin de la intervención del gobierno en la vida de la UAP y el fin del control que ejercían sobre ella las fuerzas más reaccionarias de la entidad, para quienes la institución constituía un verdadero botín, aparte de servirles como atalaya ideológica y política.

Por esos años, el estudiante Enrique Cabrera escribía:

No era necesario conocer a fondo la estructura de la universidad para percatarse del atraso académico, la simulación y la farsa en la enseñanza. Era la universidad un reflejo fiel de lo que acontecía fuera de ella. Una ciudadanía con atraso medieval, lacerada y atemorizada por un cacicazgo cruel y sanguinario, que contaba con la beatífica bendición de un clero altanero y político como en los tiempos de Labastida y Dávalos y Miguel Miramón. A este ambiente hay que sumar la labor paralizante de un prensa encadenada, su persistente trabajo encaminado a hundir la conciencia revolucionaria del pueblo. En especial los diarios García Valseca han causado mucho daño al pueblo en todos sus sectores, desmovilizando, desorientando como un sistema anestésico de las masas.³⁴

El gobernador Fausto M. Ortega, ante las presión de los universitarios, presenta un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la UAP en la que se recogían las principales exigencias de los universitarios democráticos —encabezados, reitero, por “los carolinos”— entre ellas la desaparición del Consejo de

Honor y la libertad de cátedra, mismas que fueron aprobadas por el Congreso local.

Sin embargo, las principales organizaciones del sector privado, como se dice vulgarmente, “pegaron el grito en el cielo”, procediendo a desplegar todo un cúmulo de iniciativas encaminadas a obligar al gobierno a echar atrás las reformas de referencia. Así, en los días 1° y 2 de agosto, los establecimientos comerciales cerraron sus puertas.

El gobernador, frente a tales medidas de presión, no tuvo más remedio que ceder, viéndose ante la necesidad de solicitarle al Congreso que revisara nuevamente la Ley Orgánica. Empero, si bien se abrogaron algunas de las reformas aprobadas unos días atrás, se dejaron indemnes algunos artículos de contenido muy avanzado que permitían que la universidad fuese manejada por los propios universitarios. Sin duda esto constituyó un precedente de gran importancia en la lucha por la autonomía de la UAP.

En los años posteriores la institución se enfrentó a un prolongado periodo de inestabilidad y tensiones, como resultado de los esfuerzos de la derecha poblana por impedir que prosperaran las iniciativas transformadoras del movimiento democrático universitario y, sobre todo, para impedir que se consolidasen los nacientes lazos entre éste y las diversas luchas sociales que se empezaban a extender por todo el estado.

No obstante, gracias a la combatividad de los universitarios, el movimiento obtiene un triunfo fundamental en 1963, cuando el entonces gobernador Antonio Nava Castillo acepta finalmente promover una nueva ley orgánica en la que se superasen las restricciones a la autonomía de la institución. En la elaboración del proyecto respectivo convergieron los juriconsultos más lúcidos de las corrientes universitarias en pugna, lográndose de este modo, como se dice en nuestros tiempos, un “proyecto consensado”.

El primer rector electo bajo este nuevo ordenamiento jurídico fue el doctor Manuel Lara y Parra, quien formaba parte del ala liberal del movimiento de Reforma Universitaria. Era miembro del Partido Revolucionario Institucional y colaboraba en el órgano de esta organización, La República. Durante su rectorado se impulsan varios proyectos relevantes para el desarrollo académico y cultural de la institución, entre los que destacan la creación de las escuelas de Economía, Filosofía y Letras, del Departamento de Música, y de la editorial universitaria. Asimismo, se reorganiza el sistema de bibliotecas, y por primera vez en la historia de la institución se crea un reglamento orientado a normar las relaciones entre la universidad y sus trabajadores.³⁵

La “revuelta” de 1964

Hacia 1964 parecía que las relaciones entre la universidad y el gobierno habían llegado a un cierto grado de normalización. Comenta al respecto Manuel Lara y Parra, el entonces rector de la UAP:

Desde que me hice cargo de la rectoría, las relaciones gobierno-universidad habían sido francamente cordiales, en las que el respeto había sido la norma, logrando con tales principios establecer mutua colaboración en varios planos. Nunca la universidad en esta época había recibido presiones ni ordenamientos del ejecutivo del estado, guardándose la distancia tan deseada por nuestra institución respecto de su autonomía.³⁶

Pero esa situación duró muy poco tiempo, debido a la pretensión de Nava Castillo de recomponer la “pax avilacamachista”, retomando los métodos antidemocráticos que habían caracterizado a este cacicazgo, y tratando de someter nuevamente a la UAP a los designios gubernamentales.

El 25 de agosto de 1964, el gobierno consigue aprobar en la legislatura estatal la Ley sobre producción, introducción, transporte, pasteurización y comercio de la leche, la cual sacrificaba a los pequeños productores lecheros, obligándolos a entregar su producción a una gran planta pasteurizadora manejada por un puñado de empresarios y políticos locales.³⁷ Los pequeños productores manifiestan su descontento ante esa medida, y acuden a la universidad a solicitar su apoyo. Para esto, la institución había logrado un sólido prestigio entre las clases populares por la combatividad mostrada en 1961. Así, los productores y los estudiantes convocaron a un gran mitin de protesta el 13 de octubre en el zócalo, al cual acudieron más de cinco mil personas. Al poco tiempo de haberse iniciado intervino la fuerza pública para reprimir a los manifestantes, aprehendiendo a varios de los mismos, entre ellos Ramón Danzós Palomino y Bruno Martínez, secretarios nacional y estatal, respectivamente, de la Central Campesina Independiente (CCI). También fue aprehendido el dirigente campesino —miembro de dicha organización— Doroteo Fernández de Lara.

La represión prende la mecha de inconformidad de mucha gente, desencadenándose una amplia movilización estudiantil popular que, además de solidarizarse con la lucha de los lecheros, exige la libertad de los dirigentes presos y la destitución del gobernador del estado. Los universitarios acuerdan una huelga general, y en su inmensa mayoría se incorporarán a las tareas de agitación y propaganda. En el transcurso de un mes el malestar popular crece a lo largo y ancho del estado, organizando un sinnúmero de manifestaciones, mítines y huelgas.³⁸

Ante tales acontecimientos en la revista *Política*, dirigida por Manuel Marcué Pardiñas, se comentaba:

En los últimos días de octubre, ya no sólo eran los lecheros inconformes, ni únicamente los estudiantes, quienes luchaban

contra el gobernador de Puebla, Gral. Antonio Nava Castillo: la mayoría de los poblanos se había sumado al movimiento de protesta. Todo hacía suponer que Nava Castillo, privado del apoyo del gobierno federal, sería derrotado por el pueblo, aunque también quedaba la negra perspectiva de una represión brutal contra quienes pedían a gritos la renuncia del gobernador... En principio se trataba de un problema simple. Pero el autoritarismo del general gobernador, la forma brutal con que se reprimió una pacífica manifestación contra una ley arbitraria, la corrupción administrativa y, sobre todo, “el cuartelerismo” del gobierno local, lo convirtieron en un gran conflicto.³⁹

El gobernador del estado, incapaz de resolver el conflicto, se ve obligado a solicitar un permiso ante el congreso local; por lo que se nombra como gobernador interino al ingeniero Aarón Merino Fernández.

De esta forma el movimiento universitario popular logra un triunfo importantísimo, convirtiéndose en un hito decisivo para las luchas que habrá de librar en los próximos años.

La “revuelta de 1964” —como le llama Nora Gatica— constituye sin duda un capítulo fundamental para el fin del cacicazgo avilacamachista.

Como resultado del fuerte movimiento universitario de 1964, las fuerzas liberales y progresistas se fortalecieron de manera notable.

Al arribar al gobierno del estado Aarón Merino Fernández —quien es nombrado gobernador interino en sustitución de Nava Castillo— se propone impulsar una política de conciliación con la universidad, para lo cual adopta diversas iniciativas, entre ellas el respaldo al proyecto de edificación de Ciudad Universitaria, uno de los anhelos más sentidos de la comunidad, ante las limitaciones de espacio físico que enfrentaba la institución, particularmente a partir de los años cincuenta, etapa en que la

universidad comienza a experimentar el fenómeno de la masificación. El viejo edificio Carolino ya no estaba en condiciones de albergar a la población estudiantil, que había pasado en 1956 de dos mil 500 alumnos a diez mil en 1967.⁴⁰ En dicho proyecto el gobernador logró involucrar a la Fundación Mary Street Jenkins, la cual inició las obras el 4 de junio de 1965, en los terrenos del ejido de San Baltazar Campeche, los cuales fueron expropiados por el gobierno del estado, el cual se encargó de pagar la indemnización correspondiente. Las instalaciones de Ciudad Universitaria fueron entregadas a las autoridades universitarias el último día de actividades de Aarón Merino Fernández, el 31 de enero de 1969.⁴¹

Lamentablemente el gobierno, en contrapunto a su política de conciliación con los universitarios, continuó con sus intentos de seguir ejerciendo un control absoluto sobre la institución. El rector Manuel Lara y Parra en todo momento se opuso a ello, pero decidió presentar su renuncia, una vez que los grupos que le habían llevado al principal cargo de la institución le retiraron su apoyo.⁴²

El nuevo rector, José F. Garibay Ávalos (1965-1967), retoma la tradición de prestarse a las maniobras del gobierno enderezadas a ejercer un control absoluto sobre la universidad. Esto lo llevó a declararle la guerra al movimiento democrático, aplicando medidas drásticas contra todos aquellos —empleados, profesores, alumnos— que osasen cuestionar su gestión. En marzo de 1966 varias escuelas —entre ellas Físico Matemáticas, Ciencias Químicas, Economía, y la preparatoria Benito Juárez— solicitan la renuncia del rector, quien en respuesta a tal petición decide cerrarlas, desatando una feroz persecución contra varios de sus maestros y alumnos.

La situación descrita propició que la universidad viviese en un gran clima de inestabilidad política que culminó con la caída del rector Garibay. Ello se debió a la lucha que desarrollaron las

fuerzas democráticas, quienes así consiguieron otro triunfo en sus esfuerzos por lograr que el gobierno respetase la autonomía de la institución, y por darle un nuevo impulso al proceso de reforma universitaria.

A raíz de la caída del rector Garibay, el Consejo Universitario decidió que la universidad fuese dirigida por una Junta Administrativa, con el ánimo de establecer un equilibrio adecuado entre las principales fuerzas que actuaban en la universidad. Integraron dicha instancia el ingeniero Antonio Osorio García, el doctor Rolando Revilla Ibarra, el licenciado Amado Camarillo Sánchez y el licenciado en filosofía Joaquín Sánchez Mc Gregor. Este último era un individuo identificado con el movimiento democrático.

En el contexto mencionado se abre paso a un debate acerca de las formas de gobierno más adecuadas que necesitaba la institución y, del mismo modo, surgen varias propuestas enderezadas a abrirle paso a una nueva ley orgánica, empero estas cuestiones se posponen debido al estallido del movimiento de 1968.

El movimiento de 1968

Habría que subrayar que éste no fue un epifenómeno surgido al calor del movimiento que estalló en la capital del país. Si bien los universitarios poblanos se solidarizaron con las peticiones de los estudiantes del Distrito Federal, aprovecharon tal coyuntura para enarbolar sus propias demandas, tal como lo venían haciendo desde el estallido del movimiento de reforma de 1961. Ciertamente, los universitarios de la UAP retomaron los principales aspectos del pliego petitorio de los estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, entre ellos la desaparición de los artículos 145 y 145 bis, la libertad de los presos políticos y la exigencia de diálogo con las autoridades de la federación, pero, a diferencia de la visión centralista del movimiento de 1968 —que

había tenido su vórtice en la capital del país, y sus secuelas en las diversas entidades federativas— en los hechos los universitarios poblanos, insisto, no hicieron otra cosa que aprovechar dicha coyuntura para continuar enarbolando sus demandas históricas.

En ese sentido se torna preciso abrirle paso a una nueva lectura —o lecturas— del movimiento estudiantil del 68, que permita captar su riqueza y su complejidad a lo largo y ancho del país, porque lo cierto es que, lejos de limitarse al Distrito Federal, también estalló en entidades como Puebla, Sinaloa, Guerrero y en otras entidades federativas.

La solidaridad de los universitarios poblanos al movimiento estudiantil de la ciudad de México no se hizo esperar. Así, el 30 de julio, en protesta por la agresión de las fuerzas policiacas al edificio de la escuela preparatoria de San Ildefonso, decidieron suspender las actividades de la universidad.⁴³

Un mes antes había comenzado en la UAP la lucha por el control del Directorio Estudiantil Poblano, pero la misma se suspendió debido a la agresión que perpetró la corriente de los santillanistas —vinculada al gobierno— contra las fuerzas democráticas, concentradas en el Frente de Reforma Universitaria. Once catedráticos y miembros del Consejo Universitario manifestaron que el único responsable del gangsterismo estudiantil era el gobierno por proporcionar subsidios y prebendas a los miembros del Directorio.⁴⁴

A finales de agosto y principios de septiembre varias escuelas de la UAP acuerdan un paro de diez días de solidaridad con el movimiento estudiantil que estalla en la ciudad de México.

Aparte de tales iniciativas, se creó en la UAP la Sección Puebla del Consejo Nacional de Huelga —el máximo órgano de dirección del movimiento estudiantil de 1968— que según voces autorizadas fue la más importante expresión de dicha instancia en provincia. A cada acto relevante que se realizaba

en la capital del país, esta sección respondía con mítines y marchas en la ciudad de Puebla.⁴⁵

El 19 de septiembre, al enterarse los universitarios poblanos de que las instalaciones de la UNAM habían sido ocupadas por el ejército, desarrollan varios actos de protesta y presionan al H. Consejo Universitario para que emita una declaración pública mediante la cual se condene el hecho de referencia, además exigen al gobierno federal la devolución inmediata de los recintos universitarios y la libertad de los estudiantes encarcelados.⁴⁶

En medio del ambiente de histeria anticomunista que se genera en toda la nación a raíz del movimiento del 68, se produce en Puebla la tragedia de Canoa, el 14 de septiembre, cuando una multitud enardecida lincha a cinco trabajadores de la UAP que se proponían escalar La Malinche. El párroco local, Enrique Meza Pérez, fue el responsable de tal acción, por el hecho de convencer a sus feligreses de que aquéllos eran comunistas que habían ido al pueblo con el afán de apoderarse de la estatua del santo patrón de la comunidad. En el incidente fueron asesinados dos de los jóvenes, Jesús Carrillo Sánchez y Ramón Calvario Gutiérrez; los otros tres —Julián González Báez, Miguel Flores Cruz y Roberto Rojano Aguirre— quedaron heridos de gravedad. También perdieron la vida Lucas García García —quien brindó hospedaje a los muchachos— y su hermano Odilón.⁴⁷

La tragedia conmovió al país entero. En sesión extraordinaria celebrada el 17 de septiembre, el H. Consejo Universitario de la UAP acordó exigirle al gobierno el castigo de los responsables de tal acción bochornosa.⁴⁸ Si bien las autoridades se comprometieron a adoptar las medidas correspondientes para cristalizar tal demanda, en los hechos nunca cumplieron con tal promesa. El único castigo —si se le puede llamar así— que recibió el cura Enrique Pérez Meza fue su traslado a otra parroquia.

El Consejo también acordó otorgar una ayuda económica inmediata a los empleados que sobrevivieron, y a las familias de los que fallecieron, cuestión que se resolvió agregándole cinco pesos a la cuota de inscripción que pagaban los estudiantes, dinero que fue repartido equitativamente. Además, la universidad le pagó puntualmente sus honorarios a los trabajadores sobrevivientes durante el tiempo en que estuvieron hospitalizados.⁴⁹

El 3 de octubre, en protesta contra la masacre del 2 de octubre en Tlaltelolco, los universitarios poblanos realizan dos manifestaciones de protesta en el zócalo de la ciudad de Puebla. A partir del 5 de octubre, el gobierno anuncia la prohibición de toda clase de manifestaciones y actos públicos en todo el estado. Esta medida no arredra a los universitarios poblanos quienes pretenden realizar otra manifestación de apoyo a los universitarios del Distrito Federal para el 10 de octubre, pero el ejército impide tal acto, ocupando el zócalo y bloqueando el acceso al edificio Carolino.

A pesar de tales circunstancias adversas, la sección Puebla del Consejo Nacional de Huelga mantuvo paralizada a la institución hasta el 6 de diciembre.

Ascenso y caída de Rafael Moreno Valle

A la llegada de Rafael Moreno Valle a la gubernatura de Puebla, en febrero de 1969, se profundizan los resquebrajamiento del bloque gobernante en Puebla.

Aquél había participado en el gabinete de Gustavo Díaz Ordaz como titular de la Secretaría de Salud gracias a sus “méritos” como médico personal y como hombre de toda la confianza del presidente. Durante su gestión al frente de dicha dependencia no titubeó un solo instante en seguir al pie de la letra las instrucciones de su superior, tal como lo puso de relieve el papel protagónico que desempeñó en la represión del

movimiento que estalló por parte de los médicos de las instituciones de salud del gobierno en 1967.

Como señalamos en el capítulo I, Moreno Valle es impuesto como “candidato de unidad” del PRI para el gobierno del estado de Puebla, lo cual genera una profunda inconformidad entre los seguidores de Bautista O’Farril. En la UAP, como en otras esferas, había varios círculos de universitarios que simpatizaban con éste, esperando, desde luego, ser beneficiados caso de que arribara al poder. Entre los mismos se encontraba el Grupo 64, en el que participaban personalidades como Martín Carbajal Caro, Nicandro Juárez, Federico López Huerta, Amado Camarillo, Juan José Barrientos y Marco Antonio Rojas Sánchez.

Este grupo, al ver que sus sueños se frustran, considera que la única forma de convertirse en un interlocutor importante frente al poder público es fortaleciendo su presencia al interior de la institución, para lo cual decide aliarse con las principales fuerzas del movimiento democrático universitario, decidiendo —de consuno con éstas— darle un nuevo impulso al proceso de reforma en 1971.

En cuanto arriba al poder, Rafael Moreno Valle comete el mismo error de los gobiernos anteriores: involucrarse con una de las corrientes que actuaban al interior de la UAP. Durante su campaña electoral había adoptado diversos compromisos con algunas de las corrientes del PRI que actuaban en la universidad, pero terminó favoreciendo finalmente a solo una de ellas, encabezada por Raúl Méndez Morales, alias *la Salerosa*. En esto tuvo una participación fundamental su jefe de ayudantes, Manuel Olgúin de la Llave. Como era de esperar, esto generó resentimientos entre los grupos que no habían sido favorecidos, quienes no tardaron en manifestar su descontento estableciendo vínculos con las fuerzas más avanzadas del movimiento democrático universitario.

De este modo los expartidarios del nuevo gobernador, los aliados de Bautista O'Farril y las diversas organizaciones del movimiento democrático universitario deciden unir sus fuerzas con el propósito de resolver los principales problemas que enfrentaba la institución en esa época.

La alianza de tales fuerzas resultó sumamente eficaz.⁵⁰ En febrero de 1971 logran imprimirle un nuevo impulso al proceso de Reforma Universitaria, logrando, entre otras cosas, la desaparición de la Junta Administrativa, desplazando a los funcionarios y autoridades que se oponían al mismo.

Logran, asimismo, sacar adelante algunos de los problemas más difíciles que enfrentaba la universidad al principio de los setenta, como los que surgieron a consecuencia del crecimiento excesivo de la matrícula en varias escuelas, principalmente en la preparatoria Benito Juárez y en la escuela de Medicina, situación que orilló a las autoridades a adoptar una política de selección al ingreso de las mismas. Los estudiantes rechazados recibieron el respaldo de las fuerzas universitarias de referencia quienes —con el ánimo de resolver el problema— le propusieron al H. Consejo Universitario la fundación de una preparatoria popular y la ampliación del cupo en la escuela de Medicina.

Tales propuestas —en particular la primera— fueron asumidas con hostilidad, tanto por el gobierno como por los círculos más reaccionarios de la burguesía poblana, persuadidos de que la masificación de la universidad traería consigo —entre otros inconvenientes— dificultar el control de la misma. Por ello se dieron a la tarea de persuadir a las autoridades universitarias de adoptar una política que limitase el crecimiento de la población estudiantil. Éstas estuvieron de acuerdo con dicha propuesta, pero el movimiento universitario se opuso enérgicamente a la misma, lo cual desembocó en un nuevo conflicto.

Con el afán de sofocar el conflicto mencionado —con el aplauso de los principales organismos del sector privado poblano— el jefe de ayudantes de Moreno Valle, Manuel Olguín de la Llave, se dedicó a corromper y a cooptar a algunos líderes universitarios y a fomentar el vandalismo y el porrismo, principalmente a través del grupo de Raúl Méndez, mejor conocido como *la Salerosa*, y otras personas.

Por su parte los sectores más beligerantes de la burguesía —a la par de las acciones gubernamentales— deciden emprender una feroz campaña de desprestigio contra la universidad a través de organizaciones como el Comité Coordinador de la Ciudadanía Poblana, de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de la Ciudad de Puebla, y del Instituto de Investigaciones Motolinía —fundado en 1966—, desplegando en contrapunto todo un cúmulo de esfuerzos encaminados a generar al interior de la misma una corriente que tuviese como objetivo principal el sembrar la división en la comunidad universitaria. Esta iniciativa encontró eco en las escuelas de Arquitectura, Contaduría, Administración Pública e Ingeniería Civil, en las que surgió el Bloque de Ciudad Universitaria, que habría de ejercer un papel fundamental en la ofensiva anticomunista que desataron en esos años las “fuerzas vivas” de la entidad contra el movimiento universitario.

Así las cosas, durante varias semanas la UAP fue escenario de las acciones vandálicas de los pandilleros patrocinados por Olguín de la Llave, y de las iniciativas violentas impulsadas por el Grupo Náhuatl, el FUA y Juventud Nueva.⁵¹

Después de numerosos enfrentamientos —en uno de los cuales es asesinado el estudiante Marco Antonio Márquez—⁵² finalmente el movimiento democrático universitario logra imponerse a los porros protegidos por el gobierno y a las organizaciones patrocinadas por la derecha.

Como resultado de ese desenlace el H. Consejo Universitario le brinda reconocimiento oficial, en febrero de 1970, a la

preparatoria popular —que venía funcionando desde 1969—, y aprueba la ampliación del cupo en la escuela de Medicina.

Este triunfo del movimiento democrático propicia que se consolide la alianza de los sectores más avanzados del mismo con los ex simpatizantes del gobernador Moreno Valle y con el Grupo 64. En junio de 1971 todas estas fuerzas logran que el H. Consejo Universitario nombre como rector interino de la UAP a Martín Carbajal Caro, miembro del Grupo 64, una vez que presenta su renuncia a dicho cargo Ignacio Flores Rojas (éste fue nombrado rector al decidir el Consejo Universitario desaparecer a la Junta Administrativa).

El ambiente de inestabilidad que surge en el estado a raíz del conflicto universitario, y como consecuencia de las medidas despóticas que adopta el gobierno ante los problemas sociales que estallan en ese periodo, propicia una gran irritación entre no pocos de los sectores de la burguesía poblana que le habían brindado su apoyo pero, ante la ola de conflictos que provocan sus iniciativas, los llevan poco después a darle la espalda, pidiéndole a gritos al presidente Echeverría que “pusiese orden” en la entidad.

Así, por ejemplo, el miércoles 23 de febrero de 1972 se suscita un enfrentamiento entre grupos antagónicos de la UAP en el que resultaron tres lesionados, mismos que fueron internados para su urgente atención en el sanatorio Santa María de la ciudad de Puebla. Al enterarse el grupo contrario de la permanencia en dicho nosocomio de los mencionados lesionados, acudieron a dicho sanatorio a bordo de dos autobuses urbanos, y del camión de la escuela de Medicina de la propia universidad, el viernes 25, a las 19:45 horas; se apostaron a las puertas del sanatorio, y con alarde de fuerza, y portando armas de alto poder, irrumpieron violentamente, buscando a los lesionados, mismos que al oír llegar a los atacantes se refugiaron en la azotea del hospital. El grupo de asalto disparó a las instalaciones

del sanatorio, rompió vidrios y quemó una puerta, impidiendo la entrada y salida de personas del lugar.

Tal incidente generó una vehemente respuesta por parte de la Cámara Nacional de Hospitales, Sanatorios, Maternidades y Clínicas Particulares, delegación Puebla, el 28 de febrero de 1972, en un desplegado dirigido al presidente de la república, en el que se planteaba lo siguiente:

¿Quién nos va a proporcionar las garantías y protección necesarias para que no se repitan actos vandálicos atentatorios contra los sanatorios, como aconteció al Santa María?... ¿A quién vamos a responsabilizar de los ataques a instituciones y personas, por la acción de impunidad de estos grupos beligerantes?... De lo expuesto responsabilizamos ante la historia de nuestra entidad y de la patria al señor gobernador del estado, doctor general Rafael Moreno Valle; al procurador de justicia, licenciado Fernando Montero Ortega, por la anarquía e irresponsabilidad en que vivimos y como funesto legado nos dejarán a su partida.⁵³

Firmaban tal documento el doctor Ángel Zerón, presidente, y el doctor Francisco Ramírez, secretario.

Llegó el momento, pues, en que los principales grupos del sector privado se percataron de que el gobernador —o mejor dicho, su jefe de ayudantes, Olguín de la Llave— lejos de sofocar los conflictos universitarios, los estaba exacerbando.

La violencia se estaba convirtiendo en una espiral interminable: si bien los grupos de golpeadores al servicio del gobierno y de la derecha lograban en determinados momentos amedrentar a los universitarios con sus acciones terroristas, lo cierto es que llegó el momento en que determinados grupos vinculados al movimiento democrático decidieron responder golpe por golpe. Así, el 27 de agosto fue abatido a balazos el estudiante

Fernando Antonio Galindo Flores, hermano de uno de los porros que participaban con el grupo de *la Salerosa*, esto es, Sergio Galindo Flores, alias *el Aguacate*.⁵⁴

Por esos días, el escritor y periodista Manuel Frías Olvera, en un artículo publicado en *El Sol de Puebla*, señalaba que “el primer error de dicho gobernante (Moreno Valle) fue el de prostituir a la representación juvenil dándole dinero en abundancia y canonjías a los líderes estudiantiles en turno para mantenerlos quietos”.⁵⁵

Frías Olvera tenía razón: en efecto el gobierno había cometido el gran error de comprar a determinados grupos de universitarios con el afán de que le sirvieran para controlar a la universidad, pero tal medida a corto plazo resultó funesta... Como reza un conocido refrán bíblico, “la violencia engendra violencia”.

Al arribar Luis Echeverría Álvarez a la presidencia de la república, éste se percató de que Moreno Valle constituía un obstáculo para sus proyectos de gobierno, dada su lealtad incuestionable a Díaz Ordaz. Una vez que la inestabilidad en Puebla llegó a cierto grado de peligro, el presidente de la república aprovecha la situación para provocar la caída de Moreno Valle. Éste permaneció en el cargo durante tres años, dos meses y catorce días.

Echeverría Álvarez impulsa como gobernador interino a Gonzalo Bautista O’Farril, tratando de esta forma de quedar bien con los círculos más importantes de la burguesía poblana que se habían pronunciado por él en la coyuntura electoral de 1969. De esta forma el presidente, como reza el refrán popular, “mató dos pájaros de una pedrada”. Por un lado se deshizo de la presencia molesta de Moreno Valle y, por otra, aprovechó la caída de éste para ganarse la buena voluntad de la burguesía poblana.

Fue el 14 de abril de 1972 cuando la XLV Legislatura Local, en sesión extraordinaria, nombra como gobernador interino al doctor Bautista O’Farril, quien fungía como presidente municipal. En abril de 1973 el Congreso lo nombra gobernador

por el resto del periodo que le faltaba a Moreno Valle, una vez que éste presenta la licencia correspondiente (su primera licencia fue por seis meses. En octubre de 1972 solicitó otra, por el mismo lapso. No fue sino hasta abril de 1973 en que solicita licencia por el resto del periodo constitucional).

Así las cosas, se reanudaron las buenas relaciones entre el gobierno federal y la burguesía poblana, que se había deteriorado notablemente a raíz de la imposición de Moreno Valle. Sin embargo, esa situación no duró mucho tiempo.

El enfrentamiento de la burguesía poblana con el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez

La iniciativa privada poblana no tardó en exteriorizar su rechazo a la política populista del presidente Echeverría, y en particular a su proyecto de “apertura democrática”. Se trataba de paliar cada vez más el desprestigio del régimen, debido principalmente a la brutal represión desatada contra el movimiento estudiantil de 1968 y 1971. El nuevo mandatario comprendió, sin duda, que de continuar la cerrazón del gobierno hacia los movimientos populares, estaba presente la posibilidad de que el sistema político se desplazara hacia una crisis política irreversible. De ahí que tratara, en primer término, de buscar la conciliación con los universitarios, y en general con los sectores populares más agraviados, obreros, campesinos, intelectuales, etcétera.

Una de sus acciones más espectaculares —que por cierto provocó una gran irritación en Díaz Ordaz— como candidato del PRI a la presidencia fue presentarse en la Universidad Nicolaíta para pedirle disculpas a la comunidad universitaria por el atentado de que había sido objeto dos años atrás, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Procedió, además, a incorporar a su gabinete y en las diversas esferas de la burocracia gubernamental a profesionistas muy jóvenes, con el ánimo de demostrarle a las nuevas generaciones su intención inequívoca

de restañar las heridas. No obstante, el proyecto de “apertura democrática” iba, desde luego, mucho más allá de tales acciones: en lo fundamental intentaba renovar la vida política y social del país.

Aunque en un primer momento tal proyecto fue asumido con desconfianza o escepticismo por las fuerzas democráticas del país, poco a poco fue abriéndose paso, incluso entre las principales fuerzas de izquierda. El entonces dirigente nacional del Partido Comunista Mexicano, Arnoldo Martínez Verdugo, observaba:

Todo parece indicar que en el gobierno actual han ido ocupando mayores posiciones los elementos interesados en promover algunas reformas, aunque sean limitadas, que reconocen la conveniencia de la participación más abierta de los diversos sectores en el proceso político del país, y que se agrupan en torno del presidente Echeverría. Este sector percibe la gravedad de la situación actual, y comprende la necesidad de encontrar nuevos caminos y métodos para resolver la crisis política en su favor. Para ello necesita buscar el máximo acuerdo entre los partidos y grupos políticos, manteniendo su hegemonía sobre el proceso. Este reformismo es esencialmente preventivo. Pero bajo la presión de las masas puede, en algunos casos, contribuir a resolver tareas nacionales pendientes, y a que se adopten medidas democráticas internas para impulsar la modernización del aparato productivo y de la modernización estatal... Al parecer el objetivo inmediato del sector del gobierno y del PRI que se agrupa más estrechamente en torno al presidente Echeverría, consiste en la búsqueda de una nueva estabilidad política y en la reconquista de una influencia de masas que se ha vuelto cada día más formal bajo el imperio de la política económica y social de los últimos gobiernos.⁵⁶

Esas palabras describen a la perfección el consenso que iba obteniendo paulatinamente la reforma echeverrista entre las organizaciones de izquierda, y en general entre los diversos movimientos populares.

Un factor que coadyuvó de manera notable al fortalecimiento de dicho proyecto fue el respaldo que le brindaron algunos de los más destacados intelectuales del país, entre ellos Carlos Fuentes y Fernando Benítez, quienes —de consuno con alrededor de 100 conocidos artistas, escritores y académicos— difundieron a nivel nacional la tesis “Echeverría o el fascismo”.

Es de subrayar que la “apertura democrática” encontró fuertes resistencias en determinados ámbitos de las fuerzas democráticas y de izquierda, sobre todo en los bastiones más radicalizados del movimiento universitario, quienes la asumieron como una simple maniobra o treta del gobierno “destinada a ‘mediatizar’ el descontento popular”. Pero lo cierto es que alrededor de año y medio o dos años de haberse formulado tal proyecto, éste fue recibido favorablemente en la mayoría de la entidades federativas, tanto por los grupos gobernantes como por los movimientos opositores.

Sin embargo, encontró una férrea oposición por parte de algunos sectores de la burguesía, convencidos de que la “apertura democrática” constituía un intento inequívoco de “llevar a México al socialismo”. Es el caso, por ejemplo, de los núcleos hegemónicos de la iniciativa privada de Monterrey y de Puebla. Para éstos tal proyecto implicaba, sobre todo, reducir el férreo control político y social que ejercían en sus entidades. Como refiere Will Pansters:

La creciente oposición entre las autoridades poblanas y el estado federal era parte de la lucha entre facciones a nivel nacional. Esto, a su vez, fue resultado de la política de reforma del presidente Echeverría, que tenía como objetivo la restauración de la

legitimidad del PRI, que había sido dañada seriamente en 1968, y el manejo de las persistentes tensiones políticas. Además de importantes cambios en la política económica, un mayor énfasis en la distribución del ingreso y un incremento en la intervención del estado en la economía, el nuevo régimen buscó maneras de catalizar y neutralizar el desasosiego social.⁵⁷

Frente a tal “amenaza”, surge en la entidad poblana una estrecha alianza entre el gobierno de Bautista O’Farril y los núcleos más beligerantes del sector privado con el objeto de frenar la reforma echeverrista, cuyas aristas principales se enfilaban contra aquellos gobiernos que se caracterizaban por su dureza e inflexibilidad en el trato hacia los movimientos sociales —como el de Puebla— debido a que ello constituía un obstáculo para los intentos del régimen de recuperar su prestigio entre la población.

El gobierno de Bautista O’Farril y las fuerzas reaccionarias aglutinadas a su alrededor, lejos de estar dispuestos a seguir los lineamientos reformistas del gobierno federal, endurecieron sus posiciones, tal como lo puso de relieve la brutal represión policiaca hacia el movimiento democrático popular. De esta forma, se genera un rompimiento político entre el bloque en el poder en Puebla con el gobierno echeverrista.

Escribe al respecto Elsa Patiño Tovar:

para 1972 la gubernatura de Puebla se encontraba en manos de la IP [iniciativa privada]. Por lo tanto, la contradicción Estado-sector privado se manifestaba en relación al gobierno federal. No olvidemos que en Puebla seguía gobernando la línea “avilacamachista”; y si Díaz Ordaz le dio todo su apoyo, LEA [Luis Echeverría Álvares] entró en contradicción debido a su línea “populista”... La línea política de LEA se enfrentaba

en esos momentos a una de las burguesías más atrasadas y conservadoras del país.⁵⁸

De ese modo, pues, se rompen las buenas relaciones entre el gobierno federal con el gobierno del estado, creándose una crisis profunda en el bloque gobernante que a la postre sería decisiva para la aniquilación definitiva del cacicazgo avilacamachista, con el que estaba identificado Bautista O'Farril.

El nuevo mandatario poblano, al igual que sus predecesores en el poder, intentó controlar a la UAP, principalmente a través de las corrientes universitarias que habían simpatizado con su candidatura, entre ellas el Grupo 64. Éste, como señalamos en páginas anteriores, había jugado un papel importante en el impulso al proceso de reforma, en 1971, de consuno con las fuerzas más avanzadas del movimiento democrático, empero, una vez que arriba O'Farril al gobierno, pasa entonces a desarrollar una labor de división en las filas del movimiento, en aras de crear condiciones favorables para convertirse en el grupo hegemónico de la institución.

Al percatarse los comités de lucha de la alianza del Grupo 64 con Bautista O'Farril, llegaron a la conclusión de que tenían que enfrentar la siguiente disyuntiva: o la UAP continuaba siendo gobernada por gente cercana al sistema político, lo cual constituía una amenaza para el desarrollo del proceso de Reforma Universitaria, o de plano se decidían de una vez por todas a colocar en la dirección institucional a personas identificadas totalmente con los ideales de dicho proceso.

Los dirigentes más lúcidos del movimiento consideraron que la opción más correcta era la segunda, con todos los riesgos que ello implicara.

La oportunidad se presentó en la sesión del Consejo Universitario del 8 de junio de 1972, cuando el rector provisional Martín Carbajal Caro —ligado al Grupo 64— intentó

convertirse en rector definitivo, con el apoyo del gobernador Bautista O'Farril. Los comités de lucha echaron abajo tal maniobra,⁵⁹ aprovechando la ocasión para desconocer a Carbajal Caro. En sustitución de éste, se pronunciaron por el químico Sergio Flores Suárez, propuesta que fue aceptada por el Consejo Universitario, en la sesión extraordinaria que se efectuó el 10 de junio.⁶⁰

El nuevo rector provisional ya llevaba varios años participando en el proceso de Reforma Universitaria, y era miembro del Partido Comunista Mexicano. Sin embargo, no era solo un miembro de la clase política universitaria, sino era también un destacado académico que había realizado estudios de posgrado en microbiología.

Su llegada a la rectoría encendió la ira de las fuerzas derechistas de Puebla, ya que tal hecho era una señal inequívoca de que arribaba al poder de la institución el movimiento de reforma universitaria.

Escribe Alfonso Vélez Pliego:

la llegada a la rectoría de un militante comunista, cuya trayectoria política lo identificaba plenamente con las aspiraciones, intereses y luchas del movimiento universitario, era algo inusitado no solamente en la universidad poblana sino en el conjunto de las universidades mexicanas.⁶¹

El 22 de junio el H. Consejo Universitario —en el que a esas alturas ya predominaban las fuerzas más avanzadas del movimiento democrático universitario— decidió destituir a los directores de la preparatoria diurna y nocturna Benito Juárez, Antonio Pérez Díaz y Nicandro Juárez Torres, respectivamente —ambos habían participado en las diferentes etapas del proceso de Reforma Universitaria—, designando en su lugar a Pedro Guevara, en la diurna, y a Joel Arriaga Navarro, en la nocturna.

Éste era uno de los principales líderes del movimiento democrático.⁶²

De esta forma, después de varias décadas de intensas luchas, las fuerzas democráticas pasan a encabezar la vida de la institución, abriéndose una nueva etapa en el proceso de Reforma Universitaria y en la historia de la UAP.

Como era de esperar, el arribo de Sergio Flores Suárez a la rectoría de la UAP enardeció los ánimos de la derecha poblana, quien de inmediato se dio a la tarea de reanudar sus ataques contra la institución.

Se fortalecen las fuerzas de izquierda, en particular el Partido Comunista Mexicano

Tantos años de lucha terminaron por fortalecer a las fuerzas de izquierda que actuaban en el movimiento de reforma. Su constancia y combatividad les llevó a ganar el poder en la universidad.

En particular se fortaleció el Partido Comunista Mexicano (PCM). A diferencia de otras agrupaciones de izquierda que también habían participado de manera destacada en el movimiento, tal organización logró consolidarse en la UAP no sólo por su labor persistente y a la capacidad de sacrificio de algunos de sus militantes, sino también por haberle abierto paso a una política inteligente que estaba en correspondencia con la problemática del estado y del país.

El PCM, a nivel nacional, logró en esa etapa eludir el radicalismo que se apoderó de amplios sectores de la izquierda mexicana a raíz de la masacre del 2 de octubre de 1968, hecho que llevó a no pocos de los mismos a desprender la conclusión de que la única forma de exterminar el autoritarismo del régimen era a través de la lucha armada. Fue en ese contexto que surgen diversos movimientos guerrilleros, no pocos de

los cuales encontraron en las universidades mexicanas un semillero de militantes.

Aún cuando, el PCM, tomando en cuenta el estado de ánimo que predominaba entre los universitarios —que era de rechazo total al régimen—, evitó dar la impresión de que se proponía respaldar al gobierno de Echeverría, en los hechos llegó a establecer una política de diálogos y de acuerdos con el mismo.

Adoptó, en ese sentido, una política muy compleja y versátil: mientras que a nivel del discurso rechazaba al gobierno echeverrista, en los hechos decidió aprovecharse del proyecto de “apertura democrática” para abrir algunas brechas que le permitieran ganar presencia en diversas esferas sociales, particularmente entre las universidades públicas, sin tener que enfrentar la represión gubernamental, y evitando al mismo tiempo —reitero— la impresión de que estaba “negociando” con el régimen.

Veamos algunos ejemplos de dicha política ambigua, pero inteligente.

El 29 de septiembre de 1971, el comité central del PCM publicó un desplegado en el que señalaba:

El Partido Comunista no apoya al gobierno de Luis Echeverría Álvarez, no difunde ilusiones en una supuesta “apertura democrática” ni en el diálogo que los gobernantes afirman haber iniciado con las fuerzas discrepantes y con todo el pueblo. El problema político que se decide en este momento en nuestro país no es el del predominio de una corriente progresista sobre otra reaccionaria; alertamos al movimiento revolucionario contra el señuelo de que las contradicciones en la política del gobierno se deben a una pugna de facciones. El Partido Comunista seguirá actuando como fuerza de clase autónoma, con una política global de oposición. El Comité

Central resuelve que todas las acciones tácticas del Partido Comunista se orienten a abrirle paso a la solución democrática y socialista de la crisis que vive el país. Esa solución exige *crear una fuerza revolucionaria autónoma, de alternativa al sistema.*⁶³

Como puede verse, nos encontramos frente a un discurso que en lo sustancial no difería de las posturas adoptadas por la mayoría de las fuerzas de izquierda del país en esa etapa.

En lo que sí el PCM se diferenció de tales fuerzas fue en su comprensión de que el régimen, a raíz de la matanza del 2 de octubre de 1968, ya no tenía nada que hacer en instituciones como las universidades públicas, por lo cual decidió convertirse en la principal fuerza dirigente de las mismas, bajo el argumento de que se tornaba preciso impulsar la reforma universitaria democrática.

Esto lo podemos ver claramente en el manifiesto que publicó la Juventud Comunista de México en septiembre de 1969:

Consideramos que el contenido de las luchas del movimiento estudiantil en el periodo inmediato se concreta en las siguientes cuestiones: 1. Libertad incondicional para todos los presos políticos, y su reintegración a sus centros de trabajo y estudio. 2. Cese de la represión gubernamental y académico-administrativa. Protesta por cada acto represivo concreto. 3. Respeto a los derechos constitucionales del pueblo mexicano y 4. *Reforma democrática de la educación y autonomía universitaria, que enfrenten en el terreno educativo a la política reaccionaria del régimen, oponiéndole soluciones que correspondan a una educación al servicio de la liberación popular.*⁶⁴

Y, en efecto, las células comunistas de las principales universidades públicas del país se dieron a la tarea de impulsar la “reforma democrática de la educación” y a defender la autonomía universitaria, tarea que les permitió a corto plazo acceder a la dirección de algunas universidades públicas, entre ellas la Universidad Autónoma de Puebla.

La mayoría de las otras organizaciones de izquierda se atrincheró en un discurso maximalista, que giraba en torno a la consigna: “Echeverría y la burguesía son la misma porquería”.

En una primera etapa, como indicamos en párrafos anteriores, los comunistas en la UAP establecieron una sólida alianza con los grupos liberales a inicios de los setenta, pero la misma se rompió a raíz de los compromisos de los mismos con el gobierno, como fue el caso del Grupo 64. Éste se desempeñó como una especie de “Kerenski colectivo”: por un lado desempeñó un papel fundamental en el impulso al proceso de reforma universitaria de 1971, pero, justo en los momentos en que el movimiento alcanzaba un notable grado de radicalización, se le ocurre intentar someterlo, haciendo explícita su relación con Bautista O’Farril.

Esa situación —la salida de dicho grupo de la universidad— trajo a la postre consecuencias negativas para el desarrollo democrático de la institución, ya que llegó el momento en que el PCM no tuvo contrapeso alguno que atemperase el tremendo poder que alcanzó en la UAP. Pero lo cierto es que la culpa, en esos momentos, no fue de los comunistas: éstos, a fin de cuentas, no hicieron otra cosa que pulsar con inteligencia el ánimo que imperaba entre la comunidad universitaria.

Años después, en la sucesión rectoral de 1981, la UAP se enfrentó a una gran crisis a causa del excesivo protagonismo del PCM en la vida de la institución. Por fortuna esta vez fueron los mismos universitarios quienes resolvieron el problema, sin la intervención gubernamental.

Pero este asunto desborda los límites del presente trabajo, por lo cual no ahondaremos en él.

¹ Navarro Rojas, Luis, *Conflictos estudiantiles y poder estatal en Puebla (1900-1925)*, Cuadernos del Archivo Histórico Universitario, BUAP-Gobierno del Estado de Puebla, 1999, p. 31.

² *Ibid*, p. 34.

³ *Ibid*, p. 32.

⁴ Lara y Parra, Manuel, *La lucha universitaria en Puebla, 1923-1965*, edición del autor, Puebla, 1988, notas de Jesús Márquez Carrillo, p. 10.

⁵ “La revolución maderista en Puebla y los estudiantes del Colegio del Estado”, en *Tiempo Universitario*, Gaceta Histórica de la BUAP, núm. 11, 10 de junio de 1999.

⁶ Márquez Carrillo, Jesús, nota 11 al libro *La lucha universitaria en Puebla*, *op. cit.*, p. 241.

⁷ Lara y Parra, Manuel, *op. cit.*, p. 9.

⁸ Pansters, Will, *Política y poder en México, formación y ocaso del cacicazgo avilacamachista en Puebla, 1937-1987*, Centro de Estudios Universitarios de la Universidad Autónoma de Puebla, 1992, p. 148.

⁹ Lara y Parra, Manuel, *op. cit.*, p. 14.

¹⁰ “Ingreso de la UAP a la ciencia moderna”, en *Tiempo Universitario*, Gaceta Histórica de la BUAP, núm. 4, 25 de febrero de 1999.

¹¹ Acta de la sesión del H. Consejo Universitario, del 8 de febrero de 1950, en *Tiempo Universitario*, *Ibid*.

¹² Esparza Soriano, Antonio, *Origen, evolución y futuro de la UAP*, Cuadernos del Archivo Histórico Universitario, BUAP-Gobierno del Estado de Puebla, 2000, p. 116.

¹³ *Ibid*, p. 118.

¹⁴ “La Universidad de Puebla en 1948”, en *Tiempo Universitario*, Gaceta Histórica de la BUAP, núm. 3, 13 de febrero de 1998.

¹⁵ Vélez Pliego, Alfonso, “La sucesión rectoral, las lecciones de la historia y las tareas actuales del movimiento universitario democrático”, en *Crítica*, revista de la Universidad Autónoma de Puebla, Año 1, núm. 1, 1978, p. 56.

¹⁶ *Ibid*, p. 57.

¹⁷ Azcué Bilbao, Karmele, “La conquista de la autonomía por los universitarios poblanos”, en *Tiempo Universitario*, Gaceta Histórica de la BUAP, núm. 18, 24 de septiembre de 1998.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Universidad de Puebla*, edición especial, sin fecha. Es muy probable que esta edición se haya publicado pocos días o semanas después de haberse aprobado la nueva ley. Ocupaba el cargo de rector el doctor Rafael Artasánchez Romero (1954-1956).

²⁰ Pansters, Will, *op. cit.*, p. 152.

²¹ El FUA surgió en Puebla en 1954. Según el investigador Édgar González Ruiz, “su fundador fue Ramón Plata Moreno, un ‘iluminado’ que se rodeó de doce apóstoles, quienes lo secundaron en un ambicioso proyecto para apoderarse de los centros de educación superior mediante grupos de choque”. Los apóstoles eran Klaus Feldman (empresario poblano que sigue actuando en el terreno político en varias universidades privadas y ha apoyado especialmente a la UPAEP), Federico Muggenburg (quien ha sido militante del PAN y suele ofrecer pláticas sobre temas políticos a los integrantes de ANCIFEM y hace varios años dirigió el Centro de Estudios Sociales del Sector Privado (CESSP), Antonio Quintana, Luis Felipe Coello, Víctor Manuel Sánchez Steinpreis (director de la escuela de comunicación de la UPAEP), Manuel Díaz Cid (director del Centro de Investigaciones “Motolinía”, que hace investigaciones para los principales organizaciones de la derecha poblana), Fernando Baños Urquijo, Carlos Figueroa Sandoval, Ignacio Rodríguez Carreño, Gastón Pardo Pérez, Augusto Domínguez Guzmán y Luis Pazos (el economista favorito de la derecha mexicana). *Vid.* González Ruiz, Édgar, *La sexualidad prohibida, intolerancia, sexismo y represión*, Plaza Janés, México, 2002, pp. 181,182.

El MURO surgió el 26 de julio de 1961, en Puebla, con el propósito de combatir a los universitarios que hacían propaganda a favor de la Revolución Cubana, y en general para abrirle paso a una corriente anticomunista entre los universitarios. Sus actividades son prolijamente relatadas en el libro de Alfonso Yáñez, *La manipulación de la fe, op. cit.*

²² CNED, Declaración de Morelia, 17 de mayo de 1963. Tomada del libro *El Partido Comunista Mexicano (1963-1973)* de J. Aurelio Cuevas Díaz, Editorial Línea, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma de Zacatecas, México, 1984, pp. 152-157.

²³ Yáñez Delgado, Alfonso, *La manipulación de la fe, op. cit.*

²⁴ Escribe Lorenzo Meyer: “Los proyectos reformistas emprendidos en ese momento, combinados con la retórica radical de algunos voceros del gobierno y del Presidente mismo, llevaron a la gran empresa nacional a abstenerse de hacer grandes inversiones y a retirar del país parte de su inversiones”. *Vid.* “La encrucijada”, en *Historia de México*, CECSA, México, 1976, p. 21.

²⁵ Vélez Pliego, Alfonso, *op. cit.*, p. 59.

²⁶ Gramsci, Antonio, *Escritos políticos (1917-1933)*, Cuadernos de pasado y presente, 54, México, 1977, p. 329.

- ²⁷ Yáñez Delgado, Alfonso, *op. cit.*, pp. 70, 71.
- ²⁸ González Casanova, Pablo, *La democracia en México*, Editorial Era, México, 1985, pp. 61, 62.
- ²⁹ *Ibid.*
- ³⁰ *Ibid.* Las cursivas son nuestras.
- ³¹ Si el lector desea tener mayor información acerca de la historia del proceso de Reforma Universitaria de la UAP, lo remito al libro *La manipulación de la fe*, de Alfonso Yáñez Delgado, *op. cit.*, pp. 66-71.
- ³² Lara y Parra, *op. cit.*, p. 38. Las cursivas son nuestras.
- ³³ Rivera Terrazas, Luis, “Recuento”, entrevista hecha por Florencia Correas Vázquez, Colección Pasajes, Centro de Estudios Universitarios, Puebla, 1989, pp.15,16.
- ³⁴ Cabrera Barroso, Enrique, *Testimonios y documentos*. Citado por Vélez Pliego, Alfonso, en “La sucesión rectoral...”, *op. cit.*, p. 58.
- ³⁵ Lara y Parra, Manuel, *op. cit.*, pp. 112-117.
- ³⁶ *Ibid.*, p. 146.
- ³⁷ Gatica, Nora, “La revuelta popular de 1964 en Puebla”, en *Boletín de investigación del movimiento obrero*, Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla, núm. 8, marzo de 1978, p. 63.
- ³⁸ *Ibid.*, p. 65.
- ³⁹ Revista *Política*, primero de noviembre de 1964.
- ⁴⁰ “Treinta años de Ciudad Universitaria”, en *Tiempo Universitario*, Gaceta Histórica de la BUAP, núm. 13, julio de 1998.
- ⁴¹ *Ibid.*
- ⁴² Márquez Carrillo, Jesús, *Cátedra en vilo*, Centro de Estudios Universitarios de la Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, pp. 71,72.
- ⁴³ Gómez Bonilla, Édgar, “Cronología de movimientos estudiantiles en Puebla y la ciudad de México, 1968”, en *Tiempo Universitario*, Gaceta Histórica de la BUAP, núm. 20, 22 de octubre de 1998.
- ⁴⁴ Márquez Carrillo, Jesús, *Cátedra en vilo*, *op. cit.*, p. 74.
- ⁴⁵ Cuevas Díaz, J. Aurelio, *op. cit.*, p. 95
- ⁴⁶ Gómez Bonilla, Édgar, *op. cit.*
- ⁴⁷ “Canoa: a treinta años de la tragedia (1968-1998)”, en *Tiempo Universitario*, Gaceta Histórica de la BUAP, núm. 14, 30 de julio de 1998.
- ⁴⁸ En dicha sesión el Consejo Universitario acordó también otorgar una ayuda económica inmediata a los deudos de los trabajadores asesinados.
- ⁴⁹ Meaney, Guillermina, *Canoa, el crimen impune*, Cuadernos del Archivo Histórico Universitario, BUAP-Gobierno del Estado de Puebla, 2000, p. 141.
- ⁵⁰ Refiriéndose a tal alianza, el ingeniero Luis Rivera Terrazas señalaba: “A principios de los setenta llegamos a lo que podría llamarse un poder de alianza entre liberales y comunistas. Los primeros estaban encabezados por

el rector interino, el abogado Martín Carbajal Caro, y junto con él estaban el doctor Marco Antonio Rojas, el licenciado Nicandro Juárez, el licenciado José Luis Barrientos. En alianza con ellos derrotamos al grupo de *la Salerosa*, que mantenía estrecha relación con el entonces gobernador Moreno Valle. En 1972 formábamos una fuerza bien estructurada. Por ejemplo, los problemas de la universidad los discutíamos en conjunto, comunistas y liberales intercambiábamos opiniones”. *Vid. Recuento, op. cit.*, p. 27.

⁵¹ Comentando el surgimiento de Juventud Nueva, el columnista Manuel Buendía señalaba, no sin ironía: “La noche del jueves, en Puebla, hizo su aparición Juventud Nueva. ¿Qué es eso? ¿De dónde salieron? ¿Quién los organizó? ¿Para qué?... Juventud Nueva, ¿dónde he oído algo similar? Bien, otra vez a los archivos. Encuentro los ejemplares de una revista que —aquí en México— se fundó en septiembre de 1964. ¿“Juventud Nueva”? A ver, a ver. ¡Ah, aquí hay algo parecido! Centro *Ordine Nuovo*. Un reportaje especial enviado desde Italia. Lo firma Antonio Lombardo, dirigente de ese *Ordine Nuovo*. Un subtítulo dice: ‘las soluciones del fascismo’, y el párrafo comienza así: ‘La Italia moderna ha sido construida totalmente por el Fascismo’... ‘Las estructuras fascistas salvaron a Italia de la gran depresión de 1929’”. Al final del artículo el autor de Red Privada concluía: “Bueno, pues: esta Juventud Nueva ya no resultó tan nueva”. *El Día*, 27 de septiembre de 1971.

⁵² Vélez Pliego, Alfonso, *op. cit.*, p. 75.

⁵³ *El Herald*, 28 de febrero de 1972.

⁵⁴ *El Sol de Puebla*, 28 de agosto de 1972.

⁵⁵ *El Sol de Puebla*, 18 de julio de 1971.

⁵⁶ Martínez Verdugo, Alfonso, Informe al Pleno del Comité Central del PCM de abril de 1972, “Problemas de la táctica del Partido Comunista Mexicano”. Citado por Humberto Sotelo Mendoza en “El movimiento Universitario de 1973”, en *Los movimientos sociales en Puebla*, t. 1, *op. cit.*, pp. 184, 185.

⁵⁷ Pansters, Will, *op. cit.*, p. 140.

⁵⁸ Patiño Tovar, Elsa, “El movimiento empresarial”, en *Los movimientos sociales en Puebla, op. cit.*, t. 1, p. 38.

⁵⁹ Este hecho fue descrito por Luis Rivera Terrazas del siguiente modo: “Carbajal Caro llegó a la rectoría con nuestro consentimiento, pero se fraguó un complot. En él estuvieron Barrientos y el gobernador Bautista O’Farril, creo que también el doctor Marco Antonio Rojas y Nicandro Juárez. Un complot de lo más absurdo y torpe. Martín Carbajal cita a una sesión de Consejo Universitario. Se determinaron los puntos y al final asuntos generales. Yo no pude asistir porque estaba enfermo, pero los demás compañeros asistieron. Me contaron que algo raro estaba pasando. Llegaron los alumnos de la escuela de Medicina con mantas pidiendo que lucháramos para que se entregara el Hospital Civil a la Universidad, cosa que no venía al caso porque todos estábamos de acuerdo en pelear por ello. Nuestros compañeros

vieron eso muy raro, el salón estaba lleno de estudiantes de Medicina con mantas. ¿Para qué si todo el mundo está de acuerdo? No había necesidad. Pero sí tenía un objetivo. Cuando la discusión llegó a los asuntos generales, se levantó el doctor Marco Antonio Rojas y, después de un discurso, propuso que se nombrara, como rector definitivo, a Martín Carbajal Caro. ¡Qué tramposo! ¡Nombrar un rector en asuntos generales! La gente se dio cuenta de la maniobra. ¿A qué habían venido los estudiantes? Engañados, venían a apoyar la propuesta de Marco Antonio Rojas so pretexto de obtener el Hospital Universitario”. *Vid.* Recuento, *op. cit.*, p. 28.

⁶⁰ Acta de la sesión extraordinaria del 10 de junio de 1972 del H. Consejo Universitario de la UAP. Actas del Consejo Universitario de la UAP, 1971/1972.

⁶¹ Vélez Pliego, Alfonso, *op. cit.*, p. 76.

⁶² Acta de la sesión ordinaria del 22 de junio de 1972 del H. Consejo Universitario de la UAP, *op. cit.*

⁶³ *Partido Comunista Mexicano, 1967-1972*, Ediciones de Cultura Popular, México, 1973, p.128.

⁶⁴ *Ibid*, p. 288. Las cursivas son nuestras.

CAPÍTULO III

LA “SANTA ALIANZA” CONTRA LA UAP

Como decíamos, la derecha se propuso declararle la guerra a las nuevas autoridades de la UAP. Con ese objeto promovió la creación de organizaciones estudiantiles *ad hoc* con el propósito de tratar de escindir a la comunidad universitaria, o, en todo caso, de dar la impresión a la opinión pública de que la UAP estaba dividida en dos grandes bloques. Así, surgieron la Federación Estudiantil Universitaria, el Frente Estudiantil Democrático, la Alianza Universitaria, el Bloque de Auténticos Universitarios y el Bloque de Ciudad Universitaria. Todos ellos constituyeron la “corriente estudiantil democrática”, que se propuso crear un sólido bloque opositor a las nuevas autoridades de la UAP. De todos esos membretes, el único que sobrevivirá es el Bloque de Ciudad Universitaria, el cual se dará a la tarea de segregar a varias escuelas para participar en el proyecto de fundación de una nueva universidad.

Era un rumor a voces que tras dichos membretes se encontraban organizaciones derechistas como Juventud Nueva, el FUA y el Grupo Náhuatl. Sus miembros, aparte de desplegar una intensa campaña propagandística contra las autoridades, atacaban escuelas, golpeaban a profesores y estudiantes, y publicaban inserciones en la prensa para desprestigiar al movimiento universitario.

El 17 de junio de 1972, tales agrupaciones publican un desplegado en el que anuncian su decisión de desconocer el nombramiento de Sergio Flores como rector, “porque no lo

eligieron ni los estudiantes ni los maestros ni el Consejo Universitario”.¹ En un principio participan en dicho proyecto representantes de las escuelas de Administración de Empresas, Ingeniería Química, Arquitectura, Derecho y Ciencias Sociales, Medicina, Odontología y Comercio. Pero, poco después, sólo permanecen Arquitectura, Comercio y Administración de Empresas, las cuales posteriormente deciden segregarse de la UAP para crear la UPAEP. Como lo veremos más adelante.

Por su parte el gobernador interino intentó, al inicio de su mandato, no comprometerse públicamente con los grupos derechistas que atacaban a la universidad, aunque había indicios inequívocos de que simpatizaba con los mismos. Y esto se explicaba por no sólo sus raíces políticas —reiteramos: provenía de una familia muy vinculada al cacicazgo avilacamachista— sino también por algunas experiencias. Así, por ejemplo, se desató un rumor que sostenía vínculos con la corriente santillanista que, como indicamos en líneas anteriores, fue uno de los arietes que utilizó el rector Garibay para golpear al movimiento democrático. Asimismo, los universitarios no olvidaban que siendo presidente municipal había intentado meter las manos en un conflicto suscitado en la escuela de Arquitectura en marzo de 1972, reuniéndose en el palacio municipal con uno de los grupos que combatían a las fuerzas democráticas.

Así las cosas, pues, no existían indicios de que habría de actuar de modo distinto a sus predecesores en el poder.

Sin embargo, O’Farril no perdía de vista la experiencia reciente de Moreno Valle, lo cual lo llevó a actuar con mucha cautela, evitando ocultar sus simpatías hacia las organizaciones derechistas que le habían declarado la guerra a la universidad. Además, seguramente, tenía la esperanza de que sus aliados al interior de ésta —principalmente el Grupo 64— tomasen el control de la institución, esperanza que si bien se frustró con el arribo

de Sergio Flores Suárez a la rectoría, no apagó por completo los rescoldos de su confianza en sus aliados universitarios.

Esas fueron, sin duda, las razones que lo llevaron a evitar la confrontación directa con los universitarios al principio de su mandato. Eludió, incluso, el “canto de las sirenas” de los sectores de la iniciativa privada que le exigían “meter en cintura” a la universidad.²

Durante las primeras semanas de su mandato llegó, incluso, a exasperar a no pocos grupos de la burguesía poblana que anhelaban su arribo al gobierno, por el hecho de que no aplicara de inmediato medidas enérgicas contra el movimiento democrático universitario.

Así, por ejemplo, se abstuvo de tomar medidas drásticas contra los grupos de estudiantes que decidieron secuestrar, el 24 de abril, a 50 unidades del transporte público, como protesta por el aumento de 40 centavos a la tarifa del pasaje. Dos días después fueron secuestradas otras 87 unidades, lo cual llevó a la Alianza de Camioneros a exigirle al gobernador su intervención en dicho conflicto, pero éste se limitó a exhortar a los estudiantes, a los permisionarios y a los choferes a proceder a un “diálogo franco y abierto, para que expusieran sus puntos de vista y resolvieran sus diferencias”.³

Al parecer, pues, intentaba mostrarse ante la opinión pública como un gobernante ecuánime y prudente.

Podríamos aseverar que hubo tres etapas en la política del nuevo gobernador respecto a la universidad. En una primera, reiteramos, intenta aparecer como un gobernante neutral respecto a los conflictos que envuelven a la institución. Se esfuerza, incluso, por ganarse la buena voluntad de los universitarios a través de iniciativas como la cesión del Hospital Civil a la UAP. En una segunda, guarda silencio—silencio cómplice—frente a los atropellos que perpetran las organizaciones derechistas contra los mismos y, en una tercera, encabeza la ofensiva

contra el movimiento democrático de la UAP, una vez que se percata de que ya no era posible controlar a la institución a través de los aliados que tenía al interior de la misma.

Esto lo veremos paso a paso.

En junio se redoblan las acciones de los grupos fascistas a que hicimos referencia, quienes propician un ambiente de terror en la universidad, enfilando principalmente sus aristas contra algunos de los personajes más destacados de la Reforma Universitaria, en particular contra el ingeniero Luis Rivera Terrazas, director de la escuela de Ciencias Físico Matemáticas —el 27 de abril de 1972 tales grupos derechistas incendiaron su auto, que se encontraba estacionado frente a su domicilio—, Alfonso Vélez Pliego, director de la preparatoria popular Emiliano Zapata, Jaime Ornelas Delgado, catedrático de la escuela de Economía, y Ernesto Cruz Quintas, jefe del Departamento Escolar.

El 21 de ese mes el rector Sergio Flores Suárez denuncia ante la opinión pública las acciones de tales grupos; y en los principales diarios de Puebla expresa:

Pocas veces, como hoy la Universidad y sus integrantes se han visto objeto de *la ira y el odio de gente menor*; de quienes sin ocultar su ideología y de quienes, sin temer al calificativo de reaccionarias (porque lo son profundamente) se coluden para lanzar una serie de verdades a medias, de injurias, calumnias y mentiras constantemente repetidas para que parezcan verdades, cuyo objetivo no es otro que el de intentar hacer retroceder a la Universidad en el camino de la Reforma Universitaria, por el que ya se ha iniciado y el que nada ni nadie podrá detener porque ella se encuadra en el ascenso de la lucha del pueblo mexicano para conquistar la verdadera democracia... Organizaciones como “Juventud Nueva”, el “Frente Universitario Anticomunista” o el grupo “Náhuatl” representan, no de hoy sino de siempre, a los enemigos naturales y tradicionales de la Universidad. Sólo

ellos no han sido capaces de entender que la Historia no puede frenarse con injurias y calumnias... Si bien hoy en la Universidad se respira y se trabaja en un ambiente de libertad irrestricta de pensamiento y expresión, fuera de nuestra Máxima Casa de Estudios hay quienes todavía la conciben oscurantista y medieval, en donde el pensamiento se condene, los libros se quemem y la hoguera se encienda para quienes disientan. Sin duda la conciben así por el terror pánico que les causa el hecho de que razón y libertad convergen necesariamente... Afortunadamente la “cacería de brujas”, que intentaban emprender, a nadie sorprendió, puesto que esta actitud no forma parte ya de la vida social de nuestro estado. Vivimos, por el contrario, un extraordinario proceso de abolición de la explotación mental y material, y esto proceso es incontenible quienes lo intenten detener están ya derrotados: porque la historia no se detiene.⁴

Como puede verse, el rector no se refiere a la persona del gobernador, sino a los grupos de referencia. Resalta en el documento citado el énfasis en la participación de “gente menor” en las agresiones hacia la UAP, de lo cual podemos desprender que se aludía a grupos y organizaciones que actuaban al margen del gobierno estatal. Incluso, se llega al extremo de sostener que “la cacería de brujas” que emprendían tales grupos “no forman parte ya de la vida social de nuestro estado”.

Pareciera, pues, en síntesis, que las autoridades universitarias tomaban en cuenta la postura conciliatoria de Bautista O’Farril, pensando que la misma era sincera. En ese lapso sin duda éste solapaba las acciones de las organizaciones derechistas, empero, reiteramos, procuraba hacerlo de manera discreta. Pocas semanas después reveló sus vínculos con tales organizaciones y grupos, *no por lo que hizo sino por lo que no hizo*, ya que nunca mostró interés alguno en frenar sus actividades contra la UAP.

El asesinato del arquitecto Joel Arriaga Navarro

En la noche del 20 de julio es asesinado a mansalva el arquitecto Joel Arriaga Navarro, director de la escuela preparatoria nocturna Benito Juárez. Viajaba en su automóvil en compañía de su esposa Judith García, cuando fue interceptado por un grupo de individuos no identificados en el cruce de la 2 oriente y 24 norte, durante un alto de semáforo. Por lo certero de los disparos, los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado dedujeron que los agresores eran pistoleros profesionales.⁵

Al morir Arriaga tenía 35 años. Nació en el Distrito Federal, en donde inició sus estudios de arquitectura, culminándolos en la UAP. Era miembro del PCM, y uno de los líderes más apreciados por la comunidad universitaria. A su regreso del Noveno Festival Mundial por la Paz y la Amistad, celebrado en 1968 en Sofía, Bulgaria, fue detenido y trasladado a la prisión de Lecumberri. Abandonó la prisión en noviembre de 1971, a raíz de las gestiones que emprendió el Consejo Universitario de la UAP ante el presidente Luis Echeverría Álvarez.⁶

El proditorio crimen estremeció al conjunto de la sociedad poblana, en particular a la UAP. Si bien el espectro de la violencia ya llevaba varios meses paseándose en su carro triunfal por las calles de la ciudad y de la universidad, lo cierto es que hasta ese momento no había estado acompañada por la espeluznante silueta de la muerte.

Sí, la violencia ya había provocado derramamiento de sangre, pero sólo en el marco de los enfrentamientos y escaramuzas entre los partidarios y los enemigos de la Reforma Universitaria.

Sí, aunque la violencia ya había mostrado su rostro a través de la vehemente campaña de amenazas, calumnias e injurias desatada por la derecha poblana contra la universidad, hasta entonces no habían emergido las más pavorosas criaturas del huevo de la serpiente de la muerte.

El columnista Alberto Domingo, de la revista *Siempre!*, definía en términos muy crudos —aunque precisos— el ambiente creado por el asesinato de Arriaga Navarro:

No se trata de un hecho aislado de violencia; es la violencia general rebasando ya todos los diques de la indiferencia y la paciencia. El cadáver de Joel Arriaga, símbolo de martirio, es ya una tajante advertencia... Si no se atiende a tiempo el aviso, la sangre crecerá sobre la sangre. Y esto no es alarmismo hueco, sino escueto realismo. Que quienes tienen en su mano, pues, el clarificar los hechos consternantes, no olviden la muerte de Joel. Porque los mexicanos no vamos a olvidarlo.⁷

También Mario Ezcurdía, en su columna “De la política”, en *El Día*, describía con lucidez el ambiente que predominaba aquí en Puebla a raíz del asesinato de Arriaga:

¿Qué pasa en Puebla? La violencia inficiona cada vez más la vida de la ciudad. Ostentadamente se anuncian los actos delictivos, y no se quedan nada más en el ámbito de la palabra amenazante... Nadie, en Puebla, puede desconocer el hecho de que la violencia se hace cada día más intensa. Las paredes de la ciudad anuncian profusamente las amenazas de los grupos que se declaran fascistas sin embozo, en tanto que desde el púlpito y desde algunos comercios ampliamente conocidos se incita a la agresión... Las cosas han llegado ahora a un límite inaceptable. Cabe esperar una acción decidida para retornar la vida de Puebla a su normalidad.⁸

El asesinato de Arriaga, como era de esperar, encendió la indignación de los universitarios. Al día siguiente del crimen, el 21 de julio, se congregaron cientos de ellos en el edificio Carolino para realizar una asamblea, en donde varios oradores

responsabilizaron del hecho a los grupos Náhuatl y Juventud Nueva. Incluso hubo voces que aseguraron que éstos estaban siendo solapados por el clero político y el gobernador Bautista O'Farril.⁹

Por su parte, el rector de la UAP, Sergio Flores Suárez, declaró a los medios de comunicación que el crimen de Arriaga era “la culminación de la cacería de brujas iniciada desde hace varias semanas con pintas en los muros de la ciudad y con volantes en que se trata de desprestigiar a maestros y alumnos”.¹⁰

Tal como veremos más adelante, el asesinato del director de la preparatoria nocturna Benito Juárez estaba muy lejos de ser la “culminación de la cacería de brujas” puesta en marcha por la derecha poblana: en realidad era el inicio.

La noche del 21 de julio se veló el cuerpo de Arriaga en el salón Paraninfo del edificio Carolino. Al día siguiente fue sepultado en el Panteón Jardín. Alrededor de seis mil personas —principalmente universitarios— hicieron acto de presencia en la ceremonia luctuosa, recorriendo a pie los doce kilómetros de distancia, del edificio principal de la UAP del cementerio.

El cortejo fúnebre fue encabezado por el rector Sergio Flores, los 17 directores de las escuelas de la universidad y por los dirigentes de los comités de lucha.

El sepelio se convirtió en un verdadero acto de lucha, en el que participaron varios líderes estudiantiles, obreros y campesinos, quienes elogiaron la trayectoria revolucionaria de Arriaga.¹¹

El gobernador Bautista O'Farril, si bien “censuró con profunda indignación” la muerte de Arriaga, anunciando que había ordenado al procurador del estado y a las policías preventiva y judicial que actuasen con toda celeridad “a fin de activar las investigaciones tendientes a aclarar este crimen, llamando a rendir declaración a todas las partes involucradas en cualquier forma en el asunto”, pasó enseguida a declarar

que “ha habido demasiada tolerancia por parte de las autoridades hacia los grupos terroristas, con el propósito de no tener problemas con los estudiantes”.¹²

¿A qué grupos se refería O’Farril?... ¿A los grupos de derecha que sembraban el terror entre los universitarios?... ¿o a los que encabezaban el movimiento de Reforma Universitaria?

A todas luces se refería a los segundos, tal como se desprende de la segunda parte de la frase: “con el propósito de no tener problemas con los estudiantes”.

Aunque tales palabras no pasaron desapercibidas para las autoridades de la UAP y para las fuerzas que encabezaban el movimiento, aún éstas —al parecer— seguían convencidas de que el gobernador no estaba involucrado con las fuerzas derechistas que combatían a la universidad. En lo fundamental existía la convicción de que los grupos más retrógrados de la derecha poblana actuaban por su propia iniciativa, sin respaldo del gobierno.

No fue sino semanas más tarde que los universitarios se percataron de que el gobernador sí estaba vinculado con tales grupos, no propiamente hablando, por el respaldo explícito a los mismos, sino por su desinterés en frenar sus actividades e incursiones. Pero sobre esto volveremos después.

Mientras tanto, ante la ola de indignación que estalló en el estado por el crimen de Arriaga, Bautista O’Farril no tuvo más remedio que dar la impresión de que estaba dispuesto a ir al fondo del asunto del crimen. Así, el 26 de julio, a solicitud del gobernador, llegó a Puebla una comisión nombrada por el presidente Luis Echeverría Álvarez con la misión de colaborar “a alto nivel con las autoridades policiacas del estado, para esclarecer el homicidio del arquitecto Arriaga Navarro”. Tal instancia estaba encabezada por el primer subprocurador general de la república, licenciado David Franco Rodríguez;¹³ quien expresó: “por instrucciones del señor presidente de la república nos disponemos a trabajar noche y día si

es preciso, hasta lograr esclarecer el asesinato del maestro Joel Arriaga”.¹⁴

Y, en efecto, la comisión, además de intercambiar impresiones con las autoridades gubernamentales y las autoridades universitarias, se entrevistó con algunos de los líderes y representantes de las organizaciones sospechosas de estar involucradas en el crimen.¹⁵ Sin embargo, en los hechos nunca dio a conocer los resultados de sus investigaciones, quedando su misión como un verdadero “parto de los montes”.

En sesión efectuada el 27 de julio, el Consejo Universitario aprobó una pensión vitalicia para la señora Judith García, viuda de Arriaga, así también se acordó la publicación de un desplegado en el que se exigía el esclarecimiento del crimen del arquitecto Arriaga Navarro. Además se aprobó que el Centro de Cálculo que el gobierno federal estaba construyéndole a la UAP llevara su nombre.¹⁶ Los comités de lucha, y en general las fuerzas protagónicas del movimiento universitario, no se conformaron sin embargo con las promesas de los gobiernos estatal y federal en el sentido de que llegarían a fondo en el esclarecimiento del crimen de Arriaga, por lo cual se dieron a la tarea de promover varias movilizaciones enderezadas a presionar a las autoridades para que cumplieren con su palabra. Así, el 26 de julio organizaron una manifestación que congregó a no menos de ocho mil personas, entre universitarios, obreros, campesinos, empleados y padres de familia. Hicieron acto de presencia organizaciones como el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM), el Movimiento Sindical Ferrocarrilero, el sindicato de Volkswagen, la Unión de Defensa Inquilinaria, presidida por el ingeniero Octavio Medina, la Central Campesina Independiente (CCI), diversas logias masónicas —entre ellas “Emancipadores de Puebla” y “América Latina”—, y otras organizaciones sociales.

Al término de la manifestación las fuerzas que participaron en la misma se trasladaron al edificio Carolino con el objeto de realizar una asamblea, en la que acordaron crear un gran frente que aglutinase a las principales organizaciones democráticas de Puebla, para poder así enfrentar la embestida de la derecha poblana contra la UAP y el movimiento democrático. Tal organización recibió el nombre de Frente Obrero, Campesino, Estudiantil, Popular (FOCEP),¹⁷ el cual habría de desempeñar un papel de gran relevancia en la defensa de la universidad, y en la lucha que libraban las clases populares por abrirle paso a un gobierno respetuoso de las libertades políticas.

Gracias a la intensa labor desarrollada por el FOCEP en esa etapa —sobre todo a través de grandes movilizaciones populares— la exigencia del esclarecimiento del crimen de Arriaga se convirtió durante buena parte de 1972 en un hecho que ocupó los titulares de los medios informativos de la entidad, quienes seguían paso a paso el desarrollo de las investigaciones. Aunque éstas —como señalamos en líneas anteriores— no arrojaron resultado alguno, el simple hecho de que se mantuviera vivo el reclamo de referencia contribuyó de manera decisiva a que tanto la comunidad universitaria como las clases populares de Puebla comenzasen a intuir que no era precisamente “gente menor” la involucrada en el asesinato de Arriaga: la falta de voluntad política del gobierno por aclarar este hecho les hizo sospechar que estaban involucrados los altos mandos del gobierno, comenzando por el mismo gobernador Bautista O’Farril, por más que éste guardara silencio y negase de manera contundente su participación.

Así también el FOCEP permitió que se pudieran articular de manera eficaz los requerimientos del movimiento universitario con las demandas más urgentes de los sectores sociales marginales. Recuérdense, por ejemplo, la marcha del 29 de agosto, organizada principalmente por el FOCEP, en la que participan

universitarios, taxistas, comerciantes, trabajadores electricistas (STERM) y campesinos (CCI). Aparte de exigir el esclarecimiento del asesinato de Arriaga, dieron a conocer sus demandas particulares. Así, los trabajadores del STERM informaron que acudirían a la ciudad de México a solicitar la invalidez del contrato colectivo del STERM firmado por Francisco Pérez Ríos, a quien acusaron de defraudarlos. Los dirigentes de la CCI informaron que se encontraban en pie lucha exigiendo cambios en la Ley Agraria, y la desaparición de los latifundios existentes en la entidad,¹⁸ demanda que también enarbolaba una fracción de la Liga de Comunidades Agrarias, que dirigía María de los Ángeles Flores de Beristain.

El 26 de septiembre tuvo lugar una gran manifestación de colonos y estudiantes para protestar contra el aumento en el pago del servicio del agua. En dicho evento se exigió también el esclarecimiento del crimen de Joel Arriaga.¹⁹

Se articulaban, pues, las demandas de los universitarios con las de los sectores populares en lucha, cuestión que alarmó a la burguesía poblana, ya que en ese encuentro, en esa convergencia, advirtieron fermentos peligrosos para sus intereses. Como lo veremos más tarde.

Pese al rumor de la participación del gobernador en el apoyo a los grupos que acosaban a la UAP,²⁰ las autoridades de la institución decidieron mantener por un tiempo más su trato respetuoso hacia Bautista O'Farril. En no poca medida esto se debió a los esfuerzos que éste desplegaba por evitar que la ira de los universitarios sobrepasase los límites. De ahí que decidiese hacerles algunas concesiones importantes, como su compromiso de contribuir a la solución de los problemas financieros de la institución, y su intervención personal para la cesión del Hospital Civil a la UAP, demanda que desde hace varias décadas enarbolaban los universitarios poblanos, particularmente a partir del estallido del movimiento de reforma

en 1961. Fue el 10 de octubre de 1972 cuando el congreso local autorizó al gobierno del estado la transferencia del Hospital Civil de Puebla a la UAP, mediante contrato de cesión de derechos.²¹

A partir de entonces dicho centro hospitalario pasó a formar parte del patrimonio de la institución, convirtiéndose en hospital-escuela, que aparte de contribuir a la superación profesional de los estudiantes y profesores de la escuela de Medicina, se convirtió también en una institución al servicio de las clases más necesitadas de Puebla.

Pese a la discreción que guardaban las autoridades universitarias respecto al comportamiento del gobernador, los comités de lucha y el FOCEP se dieron a la tarea de exigir públicamente el cese del director de la policía estatal, Joaquín Vázquez Huerta, por su incapacidad o desinterés por aclarar el crimen de Joel Arriaga Navarro, y en general por su complicidad con las organizaciones derechistas que atacaban a la UAP.

A ese respecto el periodista Manuel Sánchez Pontón comentaba:

Al coronel —hoy general— Vázquez Huerta no lo trajeron como jefe policiaco por sus aptitudes como policía, pues nunca lo había sido. Lo trajo Moreno Valle —cuyos instintos sanguinarios son bien conocidos ya de la opinión pública del país— porque era, y es, un represionista (*sic*) y un “pacificador” fracasado. En los 14 años en que fue jefe del sector militar de Xicotepec, el número de asesinatos diarios no sólo no bajó, sino que se triplicó. Si el gobierno desea sinceramente que el asesinato del arquitecto Arriaga se aclare, debe demostrarlo y remover a Vázquez Huerta. En la policía no se necesitan represionistas (*sic*) sino (¡oh, verdad de Perogrullo!) policías.²²

Sin embargo, Vázquez Huerta no era la única autoridad policiaca que mostraba desinterés por aclarar el asesinato de Arriaga, tampoco el nuevo jefe de la policía judicial del estado, Felipe Flores Narro —quien entró en sustitución de Enrique Rivera Cuervo, el 17 de abril de 1972— daba señales de querer resolver ese problema, actitud que no cambió un ápice a lo largo de su permanencia en dicho cargo.

Pese a los golpes de la derecha, se fortalece la unidad entre los universitarios, y se avanza en la Reforma Universitaria

En 1972 —como anotamos en líneas anteriores— culmina un ciclo del movimiento de Reforma Universitaria que estalla en la UAP en 1961: arriban a la dirección de la universidad las fuerzas que habían encabezado dicho movimiento, después de sufrir toda clase de persecuciones, hostilidad y represión.

En septiembre de ese año la comunidad universitaria participa en el proceso para elegir al rector de la institución para el periodo 1972-1975, resultando electo el químico Sergio Flores Suárez, quien hasta entonces desempeñaba tal cargo en carácter de rector interino. Era la primera vez en la historia de la universidad que el principal representante de la misma no era impuesto por las autoridades estatales, ora de manera directa, ora de manera indirecta, a través de instancias tales como el desaparecido Consejo de Honor. Aunque fue el Consejo Universitario quien tomó tal decisión, sus 34 integrantes la adoptaron con base en la consulta que se llevó a cabo en todas las escuelas y unidades administrativas.

En la toma de posesión del químico Sergio Flores Suárez —que se llevó a cabo el 19 de septiembre de 1972— el estudiante Miguel Ángel Burgos, en representación de los comités de lucha, pronunció un vigoroso y emotivo discurso, en el que subrayaba que el arribo de Sergio Flores a la rectoría era un hecho indisoluble de la larga cadena de luchas que

había tenido que librar el movimiento democrático universitario, en alianza con las clases populares. Y, además, precisaba

A diferencia de otros actos similares que se llevaron a cabo en el pasado, hablan las voces de los oprimidos, de los explotados, de los parias y de los estudiantes revolucionarios... Pero no sólo adentro (de la universidad) hemos encauzado nuestros esfuerzos. También hemos marchado junto al pueblo en sus luchas, en su alegría y en sus lágrimas, porque ellos y nosotros, que somos los mismos, hemos pagado cuota de sangre. Están presentes aquí los Mártires de Tlatelolco y del 10 de junio. Están presentes Marco Aurelio Aparicio, Leonardo Cerón, Marco Antonio Márquez Martínez, Eduardo Romano Soriano y nuestro inolvidable compañero Joel Arriaga Navarro; también están presentes aquí los presos políticos que hoy abarrotan las cárceles del país; por todo esto hoy es diferente a otras ocasiones... Por todas esas luchas, por todos los caídos y los privados de la libertad, nuestra responsabilidad es más grande. Venimos hoy no solamente a apoyar y depositar nuestra confianza en una persona determinada sino a expresar nuestra decisión de seguir luchando y difundir nuestras concepciones y nuestro programa... *No es una persona lo que hoy se confirma en su puesto, sino toda una corriente la que se consolida en un proceso de transformación, proceso que se apoyó en el ascenso de la lucha de las masas trabajadoras por sus propios problemas en particular y contra la explotación en general; es evidente que sin la alianza, aunque incipiente, con los trabajadores, este momento no sería posible; nunca antes habían fundido tan concientemente sus intereses los estudiantes y el pueblo.*²³

Por su parte, el químico Sergio Flores Suárez pronunció un discurso que provocó un gran impacto, no sólo en el interior de la UAP, sino en el conjunto de la sociedad poblana, lo cual no

es de extrañar, ya que dio a entender claramente que los universitarios estaban dispuestos a continuar impulsando el proceso de reforma a pesar de las hostilidades y agresiones de las fuerzas que se oponían al mismo, subrayando que dicha tarea no se limitaba a la transformación de la universidad sino guardaba, además, una estrecha relación con las luchas que libraban los sectores más avanzados del pueblo mexicano por abrirle paso a una sociedad más justa y democrática. Asimismo puntualizaba:

La UAP tiene hoy un amplio campo de acción y un enorme deber, deber que ha de cumplir con la certeza de ser copartícipe en la creación de una sociedad más justa, más humana y solidaria. El proceso de Reforma Universitaria ha perseguido siempre el objetivo de incorporar nuestra institución a las grandes tareas históricas de nuestro pueblo. Ya desde 1961, muchos universitarios se abocaron a constituir una universidad que estuviera acorde con el desarrollo económico, político y social del país. Pero no sólo eso: además consideraron, como es hoy sentir general, que de la universidad habrían de surgir las iniciativas de transformación social que ya se vislumbran para México.²⁴

Enseguida rindió homenaje a la memoria de los universitarios que habían perdido la vida en ese proceso:

Nuestra admiración y respeto por todos aquellos que gestaron lo que hoy es una realidad: la nueva Universidad Autónoma de Puebla. De entre esos jóvenes ocupa un lugar destacado el arquitecto Joel Arriaga Navarro, asesinado por las balas criminales y las mentes de aquellos a los que el cambio asusta... Recordamos, también, a los estudiantes Aparicio, Márquez Cerón y Romano. Todos ellos están presentes estarán en el advenimiento de la sociedad con la que soñaron y por la que

tanto han luchado. Gracias a ellos, a su lucha desinteresada, la Reforma Universitaria es hoy una realidad, que avanza a pesar de las acechanzas de sus enemigos.²⁵

Luego hizo un recuento de los logros alcanzados por la universidad en esos años, destacando la inminente incorporación del Hospital Civil al patrimonio institucional, la creación del Centro de Cálculo Joel Arriaga Navarro, los avances notables en el campo de la investigación, de la extensión y de la difusión de la cultura, y el notable incremento de bibliotecas y laboratorios. Aunque no ocultó su satisfacción por dichos logros, subrayó que la universidad estaba aún muy lejos de estar en condiciones de contribuir a la solución de los grandes problemas del estado y del país:

Por mucho tiempo la Universidad Autónoma de Puebla quedó rezagada en proceso de desarrollo tecnológico y económico de la nación y de nuestra región en particular. Esto se debió básicamente a la concepción liberal que se tenía acerca de las carreras universitarias en las que la práctica individual constituía la esencia de ellas. Ante esto tenemos la preocupación fundamental de crear nuevas carreras profesionales, básicamente interdisciplinarias, acordes con la situación actual del estado y del futuro que le depara la industrialización. Así, se piensa en carreras como Ingeniero Industrial, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Electricista y otras en este mismo sentido. Pero si la industrialización es fundamental no podemos olvidar el papel determinante que juega el desarrollo agropecuario, para lo cual nos disponemos a crear carreras, todas ellas, encaminadas a ampliar las perspectivas de los universitarios.²⁶

Finalmente reivindicó la autonomía universitaria, enviando un mensaje inequívoco a los enemigos de la UAP:

La autonomía significa para nosotros el respeto absoluto del Gobierno Federal y Estatal para que los problemas de la Universidad sean resueltos por los universitarios mismos. Hemos sido, y lo seguiremos siendo, celosos defensores de la autonomía universitaria, porque estamos convencidos que sólo ella asegura que la Universidad pueda elaborar sus propios planes y programas de estudio, que la Universidad pueda darse el gobierno administrativo y estudiantil que ella considere conveniente; en fin, sólo esa autonomía asegura el absoluto respeto a toda forma de conocer, desarrollar y expresar el pensamiento científico... Por ello *cuando la autonomía peligra, se encuentran en peligro todas las libertades democráticas del país. De esta manera, la autonomía universitaria no sólo compete a los universitarios sino a todo el pueblo.*²⁷

Más allá del impacto coyuntural que provocó dicho discurso, los pronunciamientos contenidos en el mismo habrían de prefigurar el programa de Reforma Universitaria que en 1975 cristalizó durante la gestión del ingeniero Luis Rivera Terrazas. Ciertamente es que ya desde el movimiento de 1961 los universitarios habían delineado los aspectos esenciales de dicha reforma, pero no menos verdad es que se encontraban dispersos o atomizados en diversos documentos y materiales. El discurso de Sergio Flores Suárez tuvo el mérito de darles unidad y cohesión y, sobre todo, el carácter de un programa asumido por el conjunto de la comunidad universitaria.

Se inicia, pues, una nueva etapa en la vida de la UAP, en la que al fin comienzan a cristalizar los postulados de la Reforma Universitaria, esto es, la modernización académica, la creación de estructuras de gobierno que permitiesen la participación de

los universitarios en las principales decisiones que afectasen el destino de la institución, y fundamentalmente la transformación de la UAP en una universidad abierta a los signos de los tiempos.

No obstante, aún con las tensiones y vicisitudes que siguió enfrentando la institución en ese periodo, la llegada del químico Sergio Flores Suárez trajo consigo un cúmulo de avances y transformaciones para la vida académica, cultural y científica de la UAP. Así, aparte de la ya mencionada incorporación del Hospital Civil al patrimonio de la institución, y de la creación del Centro de Cálculo Joel Arriaga Navarro; se abrieron nuevas carreras, entre ellas electrónica, matemáticas, veterinaria y zootecnia y computación. Surgieron nuevas preparatorias, y se incrementaron de manera notable los laboratorios y las bibliotecas.

A partir de la llegada del químico Sergio Flores a la rectoría de la UAP, la Reforma Universitaria deja de ser solamente una bandera de determinados grupos, y se convierte en un ideal que abrazan la mayoría de los universitarios. En esta nueva etapa no desaparecen los enfrentamientos y pugnas internas entre los partidarios de la Reforma Universitaria y los enemigos de la misma —y menos las hostilidades hacia la universidad por parte de la derecha poblana— pero ello no impide que el movimiento de reforma se convierta en hegemónico. Esto se traduce en una gran cohesión entre los principales grupos y fuerzas reformistas, quienes deponen sus diferencias para enarbolar un programa o proyecto común. Amplios sectores de estudiantes, profesores y trabajadores pasan a incorporarse a las organizaciones políticas de izquierda que actuaban en la UAP, entre ellas el Partido Comunista Mexicano (PCM), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT).

Lamentablemente, en esa etapa surge también toda una cauda de grupos de vándalos y golpeadores que, amparándose en el movimiento, perpetraban toda clase de tropelías dentro y

fuera de la universidad. Así, con frecuencia asaltaban comercios y camiones repartidores, a cuyos conductores les quitaban el dinero o los productos que llevaban.

Las acciones arbitrarias de dichos grupos provocaban también, con frecuencia, que se exacerbara gratuitamente el odio de la derecha hacia la universidad, acicateándola para que redoblara sus ataques contra la misma. Esto sucedió, por ejemplo, en la ocasión en que un núcleo de “porros de izquierda” atacó salvajemente a un grupo de jóvenes que repartían propaganda religiosa en las cercanías del edificio Carolino, hecho que causó una gran conmoción e irritación en la sociedad poblana, principalmente entre los sectores católicos.²⁸

Reitero: no eran las fuerzas dirigentes del movimiento las que organizaban ese tipo de acciones, pero las mismas eran culpables en la medida en que no adoptaban medidas enérgicas para detener a los grupos de referencia.

La histeria anticomunista que se apoderó de la derecha poblana en esa coyuntura se alimentó, además, de los movimientos sociales que estallaron por esos días. Aparte de las acciones que impulsaban destacamentos avanzados como el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM) y de las movilizaciones campesinas que estallaron a lo largo y ancho del estado, surgieron en Puebla estallidos de protesta ante las alzas en los precios de la luz, del agua y del transporte, aparte de otros movimientos protagonizados por colonos y trabajadores ambulantes. Lejos de entender la burguesía poblana que tales expresiones de malestar eran un resultado de las medidas gubernamentales —y en general de los problemas económicos que enfrentaba el país en esa etapa— las interpretaron como una señal inequívoca de que los comunistas se aprestaban a desencadenar una ola de iniciativas orientadas a hacerse del poder en el estado. Cualquier expresión de protesta popular era interpretada en este sentido.

Ironizando sobre esa situación, el rector Sergio Flores Suárez y los catedráticos y líderes universitarios Luis Rivera Terrazas, Alfonso Vélez Pliego, Jaime Ornelas Delgado y Guillermo Cabrera Candia publicaron un desplegado a nivel nacional dirigido a Bautista O'Farril, que llevaba el siguiente encabezado: “¿Quién sigue ahora, señor gobernador?” Y planteaban lo siguiente:

No se requiere de una gran sagacidad para comprender que la Universidad Autónoma de Puebla está siendo víctima de una nueva embestida, de una agresión cuidadosamente planeada y sistemáticamente llevada a cabo, que asciende paulatinamente hasta llegar a la “justificación” del uso de la fuerza... de la ley. Sin embargo, nada de lo que está ocurriendo nos es extraño. Son las mismas tácticas de siempre. La provocación, la calumnia, las amenazas veladas y abiertas, la manipulación criminal del sentimiento religioso de nuestro pueblo, las declaraciones de las asociaciones políticas y civiles de la entidad en contra de la universidad... Pero a más de ello, hoy aparece un elemento nuevo y que sorprende a todo el que conoce en forma elemental los problemas existentes en el estado. Ahora se tiene un “chivo expiatorio”, sobre el cual se pueden hacer todas las culpas de todos y cada uno de los problemas existentes desde hace años atrás y de todos los que aparecen nuevos...²⁹

Ciertamente se daba la impresión de que la derecha ya había encontrado un “chivo expiatorio”, para descargar su ira por los problemas que se suscitaban en la entidad.

Lo que la derecha poblana no entendía —o no quería entender— era que la universidad como tal no era la causante de los conflictos sociales que surgían en esa etapa. Éstos estallaban —como señalamos en el capítulo II— debido a la crisis económica que surgió en esa etapa y a las medidas

antipopulares que adoptó el gobierno para enfrentarla. La universidad se limitaba simplemente al papel de catalizador.

A diez días de que Gonzalo Bautista O'Farril tomara nuevamente posesión como gobernador interino por otros seis meses, estalló un conflicto que enardeció los ánimos de la derecha. Nos referimos al secuestro de doce unidades del transporte público de la línea Apizaco-Tlaxcala- Huamantla por parte de un contingente estudiantil que realizó tal acción como medida de solidaridad hacia un grupo de trabajadores despedidos injustamente por dicha línea. Las unidades secuestradas fueron colocadas en las inmediaciones del edificio Carolino, donde eran vigiladas por algunos miembros de los comités de lucha. En la madrugada del 12 de octubre un grupo de individuos no identificados intentó rescatar a los camiones por la fuerza, portando armas de fuego, presentándose una zacapela en que resultó herido el estudiante de ciencias químicas José Luis García Villegas. Los comités de lucha responsabilizaron de tal provocación a los permisionarios de la línea citada y al gobernador de Tlaxcala, Luciano Huerta Sánchez.³⁰

Tal hecho, si bien fue de suma gravedad, fue magnificado por la derecha. En realidad se aprovechó de ese incidente para redoblar sus presiones al gobierno para que aplicase mano dura contra los universitarios, para poner fin de una vez por todas al “caos” y “anarquía que imperaba en la entidad”.

Arrecia la embestida derechista contra el movimiento democrático universitario

Desde luego las organizaciones derechistas no esperaban la “bendición” del gobierno para continuar con sus incursiones contra la universidad. En la misma noche del día en que el Consejo Universitario nombraba a Sergio Flores como rector, fueron atacados con petardos los domicilios de los catedráticos Alfonso Vélez Pliego y Jaime Ornelas Delgado.³¹ Unos días

después el mismo rector denunciaba ante los medios informativos el haber recibido amenazas de muerte, vía telefónica y vía volantes.³²

Los grupos derechistas también llenaron las bardas de la ciudad con pintas injuriosas a las autoridades de la universidad, y en las que se amenazaba a los principales dirigentes del movimiento.

Frente a ese ambiente de provocación, el rector y los comités de lucha de la UAP publicaron el 5 de octubre de 1972 un desplegado a nivel nacional en el que, después de hacer referencia a las acciones emprendidas en esos días por los enemigos del movimiento democrático, señalaban:

La situación descrita es muy semejante a la que precedió al asesinato del arquitecto Joel Arriaga... En aquella ocasión, a través de documentos públicos y constantes visitas al actual gobernador del Estado por parte del H. Consejo Universitario, se hizo del conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, tanto la campaña de violencia como el peligro que ella entrañaba. Sin embargo, el asesinato de Joel Arriaga demuestra que las demandas referidas no fueron atendidas por las autoridades competentes, y que la eliminación física fue una coronación lógica del tipo de campaña que denunciábamos... Hoy la campaña se repite y la posibilidad de que continúen los asesinatos ante la impunidad de que gozan los autores materiales, es un peligro inminente... Este problema de la Universidad tiene su base en los conflictos sociales que se presentan actualmente en el estado y que dolosamente se atribuye a la acción universitaria. Si la campaña que culminó en el asesinato de Joel Arriaga tuvo como antecedente inmediato el conflicto social que generó la política gubernamental de alza de pasajes, la represión a la marcha campesina y la actitud estatal ante la insurgencia obrera, hoy las respuestas

del poder gubernamental a las luchas campesinas, obreras y de otros sectores de la población son la causa de fondo que genera esta campaña, que de nuevo tiende al asesinato.³³

Como puede observarse aún a esas alturas las autoridades universitarias y los comités de lucha se resistían a involucrar abiertamente al gobernador Bautista O'Farril. Nada más se hace alusión a la “política gubernamental” pero no se menciona el nombre de éste. No obstante, pese a la prudencia del rector y de los comités de lucha, inesperadamente el gobernador Bautista O'Farril abandona la fingida postura de neutralidad hacia el movimiento democrático universitario, y se convierte en el principal adalid contra el mismo.

Así, minutos después de haber rendido su protesta como gobernador interino por otros seis meses, el 14 de octubre de 1972, O'Farril declaró, en tono amenazante, que de ahí en adelante “habría mano dura contra los problemas universitarios”. Y advirtió:

Puebla se ha convertido en un escenario de la guerrilla urbana... Es inconcebible que un grupo de 8 ó 9 gentes escudadas en la autonomía universitaria pongan en jaque a Puebla, creando un clima de inseguridad y desorden. Es necesario acabar con los actos vandálicos y el clima de intranquilidad que prevalece en Puebla... Inclusive utilizaremos la fuerza pública las veces que sea necesario, hasta lograr restablecer al orden.³⁴

Sin duda a esas alturas —una vez que fue confirmado en el cargo— O'Farril sintió que ya había llegado el momento de anunciarle a sus conciudadanos su disposición de retomar y revivir los métodos y prácticas del cacicazgo avilacamachista, entre los que sobresalía el aniquilamiento de los adversarios. El

asesinato del arquitecto Arriaga, sin duda, se erigía como un escorzo de dicha disposición.

Ya todo mundo estaba enterado de los crímenes perpetrados por Maximino Ávila Camacho, el fundador de dicho enclave caciquil, pero no sucedía lo mismo en el caso de Gonzalo Bautista Castillo —padre de Bautista O'Farril— quien durante su gestión como gobernador (1941-1944), se distinguió también por su crueldad hacia sus enemigos. Durante su gestión fueron asesinados Leobardo Coca (fundador de la Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos), Filomeno Escamilla, Miguel López y Francisco Domínguez, opositores a la candidatura del general Manuel Ávila Camacho a la presidencia de la República.³⁵

No descartamos la posibilidad de que Bautista O'Farril invocase la presencia de estos personajes a la hora de formular sus declaraciones amenazantes contra el movimiento democrático universitario, las cuales recibieron el aplauso de los sectores más recalcitrantes de la burguesía poblana, quienes se aprestaron a visitar al gobernador para felicitarle por sus enérgicas declaraciones contra la UAP y para “brindarle su apoyo”, en la tarde del 15 de octubre, en un acto efectuado frente al palacio de gobierno.³⁶

El intempestivo viraje del gobernador tomó por sorpresa, no sólo a las autoridades universitarias y a las principales fuerzas del movimiento, sino incluso a la prensa local. Comentando este hecho, el periodista Manuel Sánchez Pontón escribía:

El brusco cambio de actitud del gobernador Gonzalo Bautista O'Farril en sus relaciones con la Universidad Autónoma de Puebla ha causado enorme sorpresa y ha dividido —por razones obvias— a la opinión pública. Quienes están felices ahora son ciertos grupos patronales.³⁷

Sánchez Pontón se refería a los grupos empresariales que manejaban los hilos de las principales organizaciones cúpula del sector empresarial poblano, quienes se unieron como un solo hombre en defensa de la sacrosanta civilización occidental y cristiana. Pero, aparte de dichas organizaciones, la derecha impulsa la formación de varios organismos al interior de la sociedad civil, con el objeto de golpear de manera más eficaz a la UAP y al movimiento democrático. Entre los cuales tenemos a la Federación de Barrios y Colonias, apadrinada por el arzobispo Octaviano Márquez y Toriz. Su presidente era Trinidad Espejel, un hombre al que lo distinguían su fervor religioso y su anticomunismo militante.

Tales organizaciones cumplen de manera eficaz con su función de propagar la histeria anticomunista. Véase, por ejemplo, el desplegado que publican el 15 de octubre de 1972, dirigido al presidente de la república Luis Echeverría Álvarez, y al gobernador Gonzalo Bautista O'Farril, en el que señalaban:

Ante la anarquía comunista imperante en el Estado de Puebla, que amenaza conducir a todo el país (*sic*) a una gravísima situación de violencia e impunidad incontrolable, pues coincide con movimientos sediciosos en diferentes lugares de la República.³⁸

Y en tono amenazante, exigían las siguientes demandas:

1. Que a la mayor brevedad y con firmeza y decisión se sirva usted disponer y ordenar la INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA y de usar los medios que nos otorga la CONSTITUCIÓN, para enjuiciar y encarcelar a TODOS los que dentro o fuera del llamado edificio Carolino (que no es la Universidad sino una verdadera CHECA BOLCHEVIQUE-TRIBUNAL SANGRIENTO) (*sic*), están en diversas formas transgrediendo

LA LEY con secuestros, tráfico de droga, prostitución organizada (*sic*), ataques a las vías de comunicación, perturbación del orden público, pornografía, pandillerismo y portación y acopio de armas de fuego.³⁹

Y culminaban con el siguiente llamado:

Sepa usted Señor Gobernador, que no sólo exigimos esta imperiosa actuación que ya es impostergable, sino que lo respaldamos viril (*sic*) y enérgicamente en todo aquello que permita devolver a los diversos sectores de la población, la paz y tranquilidad necesarias para seguir luchando por un México más grande, más justo y siempre libre, y por una Universidad que recupere el prestigio y la dignidad que urgentemente reclama y merece.⁴⁰

Firman tal documento las siguientes organizaciones: Federación de Barrios y Colonias, A.C.; Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles; Club de Empresarios de Puebla, A.C.; Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla; Centro Bancario de Puebla, A.C.; Centro Patronal de Puebla; Colegio de Contadores Públicos; Asociación de Hoteles y Restaurantes de Puebla, A.C.; Cámara Nacional de Comercio de Puebla; Asociación de Charros de Puebla; Cámara Nacional de la Industria de la Transformación; Cámara Nacional de Hospitales y Sanatorios de Puebla; Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del Municipio de Puebla; Cámara de la Industria de la Construcción (Sección Puebla); Cámara Textil de los Estados de Puebla y Tlaxcala; Cámara de la Propiedad Urbana; Asociación de Sanatorios y Clínicas Particulares del Estado de Puebla; Unión Ganadera Regional; Federación de Transporte del Estado de Puebla; Cámara Nacional del Comercio en Pequeño del Estado de Puebla; Unión Estatal de Padres de Familia; Cámara

Harinero de la Zona de Puebla; Unión de Propietarios de Autotransportes Puebla-Cholula; Cámara de la Industria Maderera de Puebla; Colegio de Notarios de Puebla; Alianza de Camioneros de Puebla; Sociedad Mutualista de Dependientes; Colegio de Arquitectos; Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Puebla, A.C.; Asociación de Clubes de Servicio.

Todas esas organizaciones forman una “santa alianza” con el objeto de frenar el proceso de reforma de la UAP, y para impedir el desarrollo del movimiento popular que gira alrededor de éste. A la “cruzada” que emprenden tales organizaciones se unen las principales centrales obreras de Puebla —CTM, FROC-CROC, CROM— las cuales publican un desplegado el 18 de octubre en el que le exigen al gobernador “reprimir toda clase de infiltraciones de supuestos guerrilleros (*sic*) en los centros de estudio, impidiendo el uso de las drogas (*sic*), y castigando a los propagadores de ese desquiciamiento moral, físico e intelectual”.⁴¹

La escalada de la derecha poblana y el endurecimiento de la política gubernamental lleva a los comités de lucha y al FOCEP a desplegar un conjunto de movilizaciones encaminadas a frenar los ataques contra la universidad y el movimiento gubernamental. Así, el 17 de octubre organizan una gran manifestación en la que, aparte de exigir castigo para los autores intelectuales y materiales de Joel Arriaga Navarro, exigieron detener la escalada de provocación contra la UAP y el respeto a la autonomía de la misma.⁴²

Mientras tanto el gobierno estatal, lejos de contener la embestida de la derecha, se convierte en su principal protagonista. El 18 de octubre las “fuerzas vivas”, encabezadas por el gobernador, organizan en el zócalo un impresionante acto multitudinario —al que acudieron alrededor de 100 mil personas— durante el cual Bautista O’Farril giró instrucciones al procurador Raymundo Zamudio Muñoz, tendientes a la

aprehensión del químico Sergio Flores Suárez, rector de la UAP, del ingeniero Luis Rivera Terrazas, director de la escuela de Física, del profesor Enrique Cabrera Barroso, jefe del Departamento de Extensión Universitaria y Servicio Social; del licenciado Alfonso Vélez Pliego, director de la escuela preparatoria popular, y de otros dirigentes universitarios. Advirtió, además, que de ahí en adelante se encarcelaría a los agitadores que tenían en vilo a la universidad, así también, que se descontaría del subsidio de la universidad la cantidad necesaria para indemnizar “a las negociaciones (*sic*) y a los particulares que en lo futuro sufran perjuicios en sus intereses por causas atribuidas a los pandilleros y falsos universitarios”.⁴³

En contrapunto con los ataques desde fuera, la UAP comenzó en esos meses a sufrir el embate de grupos internos vinculados con organizaciones como Juventud Nueva, el FUA, el grupo Náhuatl y otras. En un comunicado firmado por jóvenes que se dijeron representantes de cinco escuelas localizadas en Ciudad Universitaria, afirmaron que el lunes entrarían en huelga para obtener los siguientes señalamientos:

- a) desaparición de los comités de lucha de la universidad; b) desconocimiento de las autoridades universitarias; c) derogación de la Ley Orgánica; d) depuración “de elementos infiltrados en la escuela de Derecho”, y la exigencia de que los presupuestos y expedientes escolares sean manejados por cada una de las 17 escuelas universitarias.⁴⁴

La solidaridad nacional hacia la UAP y el deslinde del gobierno federal respecto a la postura de Bautista O'Farril

Frente a la embestida de la derecha, ahora respaldada por el gobernador, los comités de lucha y las autoridades universitarias procedieron a solicitar el apoyo de todas las universidades y de las fuerzas democráticas del país, para frenar lo que llamaron

“una gran conspiración fascista a escala nacional e internacional que se inicia en Puebla”.⁴⁵

Ciertamente la universidad poblana no era la única institución de educación superior del país que era objeto de agresiones por parte de las fuerzas reaccionarias; en esa etapa varias universidades —en particular aquellas que abordaban proyectos de reforma similares al de la UAP, entre ellas las universidades de Nuevo León, Guerrero y Sinaloa— eran blanco de la ira de tales fuerzas, quienes las veían como una “atalaya” de la conjura comunista que se cernía sobre el país, la cual, según esto, había comenzado a partir del arribo de Luis Echeverría Álvarez a la presidencia de la república.

Como indicamos en el capítulo II, los sectores más recalcitrantes de la burguesía mexicana comenzaron a establecer vínculos con el objeto de enfrentar el “proyecto socializante” de Echeverría. Entre tales sectores destacaron la burguesía poblana y la regiomontana. De ahí que los universitarios poblanos no exagerasen al sostener que había indicios de “una gran conspiración fascista” a nivel nacional.

El entonces rector de la UNAM, Pablo González Casanova, hizo eco de ese grito de alerta pronunciando una enérgica declaración que estremeció a la opinión pública de toda la nación, en la que denunciaba a los grupos oligárquicos que estaban agrediendo a las universidades:

Se está gestando un plan de agresión contra el país entero, auspiciado por los grupos oligárquicos de Puebla y de Nuevo León... La agresión a las universidades de México en el fondo sólo busca definir para el país una política ultrarreaccionaria... Este nuevo ciclo de agresión contra la universidad se está cerrando como siempre: los auspiciadores y autores intelectuales de la agresión, los que han promovido y financiado a los agentes provocadores, los que han pagado drogas y armas,

los que han auspiciado la lenidad de una política petardista, de vandalismo y de hechos consumados... hoy señalan con el dedo a la Universidad como el enemigo del pueblo, y colocan a las autoridades universitarias en el banquillo de los acusados, acusándolas de ser los agresores y destructores de sus propias casas de estudio, y piden que se acabe con la lenidad mediante una política “enérgica” que aplique el “derecho” contra la Universidad y el pueblo. Frente a esta situación, los universitarios no podemos menos que levantar nuestra protesta más enérgica, declarando que ningún grupo o autoridad engañará a nadie al invocar hoy una ley que pretenden se aplique contra los inocentes, contra las universidades y el pueblo.⁴⁶

Como puede verse, González Casanova ponía el dedo en la llaga: en efecto, la agresión a las universidades no era un hecho aislado, sino expresión inequívoca de un proyecto de agresión contra el país entero (fomentado por los grupos oligárquicos que intentaban frenar a toda costa las reformas echeverristas).

Ciertamente, además, los grupos oligárquicos que denunciaban a gritos el “caos”, el “desorden” e “inmoralidad” que supuestamente privaban en las universidades, eran los mismos que fomentaban el terror y el vandalismo en el interior de las mismas, con el claro propósito de generar coartadas que le permitiesen a las autoridades aplicar “todo el peso de la ley” contra los “agitadores” y “guerrilleros” que se habían apoderado de las instituciones de educación superior.

No obstante, el rector de la UNAM no se limitaba a la simple denuncia; señalaba, también —de manera sumamente lúcida— las medidas e iniciativas que se requería impulsar en el país para aplastar de una vez por todas el huevo de la serpiente de la violencia:

Aparte de denunciar estos hechos los universitarios debemos ratificar claramente cuáles son los requisitos nacionales para que la vida universitaria continúe en México... *Si no se dan crecientes subsidios a las universidades que les permitan realizar sus funciones, si no se generan empleos para profesionales, mediante reformas profundas, verdaderamente revolucionarias, a la propiedad y al gasto público y social, es inexorable la crisis de la Universidad mexicana, y ninguna política de los profesores, los estudiantes y las autoridades universitarias podrá impedirlo.*⁴⁷

Mediante tales propuestas González Casanova no sólo desmontaba el mecanismo autoritario de los grupos oligárquicos que atentaban contra las universidades, sino ponía de relieve también las limitaciones e inconsecuencias del proyecto de “apertura democrática” del presidente Echeverría, proyecto que si bien buscaba normalizar las relaciones entre el gobierno federal y las universidades, no proponía iniciativas tendientes a superar a fondo los problemas ancestrales de las mismas, entre los que sobresalían los subsidios insuficientes que les otorgaba la federación. Echeverría, más que resolver a fondo esos problemas económicos de las universidades, deseaba utilizarlas para fortalecer su imagen de hombre progresista. En una entrevista el ingeniero Luis Rivera Terrazas describía esta situación de manera muy gráfica:

Echeverría nos empezó a hacer el amor... En esa época yo iba a Los Pinos cada quince días o cada mes, para hablar horas enteras con el señor presidente... Pero, en el fondo, ¿adónde quería llegar? A que le invitásemos a venir un día a la universidad, para hacer ahí un gran discurso, para presentarse como un hombre de izquierda, por un gran progresista, apoyado por la universidad más de izquierda, más revolucionaria del país. Pero jamás lo invitamos...⁴⁸

Pero, volviendo a la declaración de González Casanova, su audaz declaración, como era de esperar, causó una gran conmoción a nivel nacional, contribuyendo de manera decisiva a crear un muro de contención contra la escalada represiva que sufrían las universidades, y a generar además una mayor conciencia entre las autoridades federales acerca de la problemática de fondo que enfrentaban estas últimas.

Unos pocos días después del audaz pronunciamiento del rector de la UNAM, la derecha mexicana se encargó de confirmar que González Casanova no andaba lejos de la verdad. El 9 de noviembre apareció en los principales diarios del país un desplegado que llevaba la firma de una tal Guardia Unificadora Iberoamericana (GUIA), en el que se aseguraba que se había puesto en marcha en México una “ruta de la anarquía y violencia”, que tenía su sede en las universidades de Puebla, Sinaloa y Monterrey.

Después de enumerar los hechos que al parecer de GUIA confirmaban la existencia de dicha “ruta”, señalaban lo siguiente:

En Puebla, el rector Sergio Flores Suárez es manejado por Luis Rivera Terrazas y Ángel Martínez Verdugo, hermano del secretario general del Partido Comunista Mexicano, Arnoldo Martínez Verdugo. Estas personas tienen a sus órdenes a nueve egresados de la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, que dirigen al Frente Obrero Campesino Estudiantil Popular (FOCEP)... En Sinaloa la Universidad es manejada a través del destacado jefe del P.C., Arturo Campos Román, quien funge como secretario general de esa Casa de Estudios y que tiene a Liberato Terán Olguín como jefe de las brigadas de agitación y choque... En Monterrey, el poder tras el trono es el doctor Salvador Capistrán, quien maneja al rector Héctor Ulises Leal, y se apoya en el ex diácono jesuita Juan Sandoval Trujillo, funcionario de la Universidad Autónoma de Nuevo

Léon, y controlador de un grupo de jesuitas entre los que destacan Francisco Ramos, Javier de Obeso y Hermann Von Bertrab, quienes no tienen sede en diócesis, pero andan a “salto de mata” agitando estudiantes. Esta no es la infiltración marxista en las universidades. Es el resultado de esa infiltración; se han quitado las caretas y están cosechando lo que sembraron durante años⁴⁹

Y proponían, entre otras, las siguientes disposiciones:

1. Exigimos se tomen eficaces medidas en contra de los agitadores y anarquistas al servicio del imperialismo soviético que pretenden sumir a México en el desastre con la apertura del “Segundo Frente”... y, 2. Pedimos que se considere y califique de “traidores a la patria” a los agentes del imperialismo soviético que, infiltrados en los medios de difusión escriben a favor de la subversión, el terrorismo y la anarquía. BASTA DE JUGAR CON LA SANGRE DE CAMPESINOS Y ESTUDIANTES.⁵⁰

Este desplegado, seguros estamos, figurará entre los documentos más representativos del pensamiento de la derecha mexicana, una vez que los historiadores se aboquen a la tarea de examinar el desarrollo de dicha expresión política en el México de nuestros días. Sus planteamientos básicos retoman al pie de la letra las tesis esenciales del pensamiento fascista, entre ellos una obsesión por el “complot internacional” (urdido, desde luego, en la URSS, por lo cual se exige castigo a los “agentes del imperialismo soviético que escriben a favor de la subversión”).

Escribe Umberto Eco, no sin lucidez:

En la raíz de la psicología Ur-Fascista está la obsesión por el complot internacional. Los secuaces deben sentirse asediados. La manera más fácil para hacer que asome un complot es

apelando a la xenofobia. Ahora bien, el complot debe surgir también del interior.⁵¹

Pero, si algo podía desprenderse de dicho documento es que, más que existir “una ruta de la anarquía y la violencia”, creada por los comunistas, en realidad se ponía de relieve que había un proyecto de la derecha mexicana enderezado a extirpar cualquier expresión de tolerancia y de disenso hacia las fuerzas democráticas y de izquierda.

En el marco de la XIV Asamblea de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), celebrada en Tepic, Nayarit, del 23 al 27 de octubre, el secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Ahúja, declaró: “El Gobierno Federal no empleará nunca la limitación de recursos públicos como instrumento de presión política contra las universidades, o como pretexto para propiciar la intromisión de fuerzas políticas o económicas en el seno de las comunidades educativas”.⁵² Y agregó:

La autonomía universitaria se sustenta en la capacidad de las casas de estudio para cumplir plenamente los fines para los que fueron creadas. El gobierno del señor presidente Luis Echeverría no ha puesto en cuestión tal capacidad; antes bien, la ha respetado invariablemente y ha procurado su fortalecimiento... *Los centros de enseñanza superior son instituciones del más alto valor para la vida de la República... Impedir que cumplan con sus funciones, es no solamente violar la autonomía universitaria, sino atacar a la propia sociedad.*⁵³

Tales palabras fueron una advertencia inequívoca para todos aquellos gobiernos y fuerzas que estaban empeñadas en

exterminar los movimientos democratizadores que habían estallado en las diversas universidades públicas del país.

El mensaje de referencia tuvo, desde luego, como uno de sus principales destinatarios al gobierno de Bautista O'Farril. Aunque ya en ocasiones anteriores la federación le había enviado a éste señales en el sentido de que no estaba de acuerdo con sus procedimientos, era, sin embargo, la primera vez que enviaba un mensaje tan explícito.

No obstante, ni el gobernador de Puebla ni sus aliados de la derecha hicieron caso omiso de tal advertencia, tal como lo puso de relieve el hecho de que continuaran sus incursiones contra la universidad y el movimiento democrático popular.

Aparte de los ataques provenientes de las organizaciones cúpula del sector empresarial y de los organismos creados por la derecha —como la Federación de Barrios y Colonias— los grupos más recalcitrantes de la burguesía poblana redoblaron sus esfuerzos por dividir a la comunidad universitaria de la UAP, principalmente a través del Bloque de Ciudad Universitaria, organismo vinculado al FUA, al Grupo Náhuatl y Juventud Nueva. Sin duda se pretendía hacer creer a la opinión pública que la universidad estaba escindida en dos corrientes, para justificar la intromisión del gobierno en la vida de la universidad.

Esa estrategia tampoco funcionó, porque los universitarios —a excepción de grupos reducidos— no cayeron en la trampa. Se trataba, por lo demás, de una estrategia a nivel nacional.

El 26 de octubre el Consejo Universitario de la UNAM publicó a nivel nacional un desplegado de gran relevancia, en el que aparte de ahondar y profundizar en las declaraciones del rector González Casanova, agregaba elementos novedosos en la crítica hacia los grupos que pretendían desestabilizar al país, dándose a la tarea de atentar contra las universidades públicas.

Entre los puntos más destacados del documento, aparecen los siguientes:

El ataque contra las universidades en México es parte de las agresiones que, fomentadas por el imperialismo y por los grupos reaccionarios de nuestros países, sufren desde hace tiempo las universidades en América Latina. El imperialismo pretende frenar el desarrollo científico y tecnológico para afianzar los vínculos de nuestra dependencia; los grupos económicos y políticos reaccionarios, los latifundistas, los que se benefician con la concentración de la riqueza, los aliados del capital extranjero, los interesados en mantener un régimen de privilegios y de explotación, o en alcanzar posiciones de poder, pretenden igualmente agredir a las universidades, centros por excelencia de la crítica social, de la discusión libre de las alternativas de nuestro desarrollo y de la lucha por el progreso democrático y por el mencionado avance científico y tecnológico. La educación superior en México, y en especial la autonomía de las universidades, viven hoy el recrudecimiento del ataque de esos grupos, cuyo propósito es liquidar las libertades que en ellas se ejercen y hacer imposible la práctica de la democracia y la superación académica. Tales agresiones, denunciadas con insistencia por las autoridades universitarias, por estudiantes, profesores y empleados, han consistido sobre todo en actos de violencia de agentes provocadores, para alterar el orden y presentar a las universidades ante la opinión pública como instituciones cuyos miembros cometen actos delictivos y alteran la paz social [como sucedía en Puebla. HS]. Estas agresiones han sido generadas desde el exterior de las universidades y no se trata de pugnas internas o entre estudiantes, como se procura hacer creer a la opinión pública... Integrantes de los sectores privado y público de varias entidades federativas, principalmente Puebla, Nuevo León y Sinaloa, en declaraciones calumniosas, manifestaciones, concentraciones y campañas de todo tipo, han tratado de enfrentar al pueblo, manipulando a empleados, obreros

y campesinos, contra las universidades, de que se restrinjan los subsidios, de que se introduzcan reformas autoritarias en su orden interno y de que se limite el ingreso de la población estudiantil. Pretenden falazmente que las instituciones privadas sustituyan a las autónomas y oficiales; cerrar las puertas de la educación superior a sectores del pueblo poco favorecidos; eliminar la función crítica de las universidades, mantener la dependencia nacional y frenar las posibilidades de efectiva democracia... Frente a estos ataques y falacias, la Universidad sostiene que la función crítica, las libertades que se ejercen en nuestras instituciones y las oportunidades de cultura para un número creciente de mexicanos, contribuyen a la solución de los problemas sociales, a los cambios estructurales y al desarrollo independiente del país, como lo muestra la participación de los universitarios en esa tarea.⁵⁴

Y, finalmente, expresaban:

Para cumplir sus tareas, las universidades deben gozar de la autonomía y de las libertades garantizadas por el orden legal de la República. Autonomía no significa fuero ni extraterritorialidad. Autonomía es el derecho que otorga la ley a la Universidad para designar a sus autoridades, establecer sus planes de trabajo, distribuir sus recursos económicos y organizarse sobre la base del respeto a la libertad de cátedra, de investigación y de difusión de la cultura... La defensa de la autonomía y de la libertad de crítica y de pensamiento, constituyen una responsabilidad no sólo de los universitarios, sino de la comunidad nacional... La Universidad exige una vez más el respeto irrestricto a la autonomía universitaria que se proclama y garantiza en el orden legal, y la no intervención del Gobierno Federal y de los gobiernos de los estados, así como de la fuerza pública, en forma abierta o disfrazada, en las universidades.⁵⁵

Como puede verse, en tal documento se desmonta perfectamente el mecanismo favorito de la derecha mexicana utilizado para reprimir a las universidades: se generan conflictos a su interior, para después gritar a todo pulmón: “¡Ved las universidades que están educando a nuestros hijos!”

Aunque las expresiones de tal documento hacían referencia a la problemática que enfrentaban la mayoría de las instituciones públicas de educación superior del país, sus aristas iban enfiladas principalmente a los gobiernos de Puebla, Guerrero, Sinaloa y Nuevo León.

Tal documento —aparte de las declaraciones de González Casanova, de la postura adoptada por ANUIES en Tepic— le brindó una importante cobertura a la UAP y a las otras instituciones afectadas por la derecha.

Sin duda, tales expresiones de solidaridad, si bien no frenaron los ataques hacia la UAP, sí contribuyeron de manera decisiva a elevar la moral de los universitarios poblanos y de sus aliados, impulsándolos a redoblar sus acciones orientadas a frenar la embestida derechista.

Así, los comités de lucha y el FOCEP convocan a una gran manifestación para el 27 de octubre, que por cierto provocó una gran histeria entre las fuerzas derechistas, quienes, con el ánimo de boicotear tal evento, repartieron propaganda amarillista como la siguiente:

PADRES DE FAMILIA

¡Se prepara un crimen con tu hijo!
La manifestación que pretenden realizar
hoy viernes tiene el único objeto de crear
mártires para fortalecer un movimiento
QUE NO HA TENIDO EL APOYO DEL PUEBLO.
Han preparado disparar desde el
anonimato contra su propia gente y

y achacar estos crímenes a una represión.
Padre de familia: tu hogar puede enlutarse
Tus hijos pueden ser las víctimas
de esta criminal maquinación.
¡Cuídalos!⁵⁶

Pero el acto no pudo llevarse a cabo debido a la intervención de la fuerza pública y del ejército. El Carolino fue acordonado con tanques militares. El pretexto que enarbó el gobierno para prohibir dicho acto fue que se “temía que sucedieran hechos violentos”.⁵⁷

A ese acto intentaron sumarse grandes contingentes del magisterio poblano agrupado en la sección 23 del SNTE, pero no pudieron hacerlo debido a la intervención de la fuerza pública.⁵⁸

Sin duda, el nuevo escenario nacional creado a raíz de tales expresiones de solidaridad propició que se acercaran al movimiento universitario nuevos sectores sociales, provocando, así el temor del gobierno de que se fortaleciera el movimiento democrático.

A tal grado había crecido la influencia del FOCEP que el periodista Manuel Sánchez Pontón comentaba lo siguiente:

El FOCEP... tiene ahora una fuerza incontrastable en el Estado de Puebla. Es mucho más fuerte que el PRI, cuyo desprestigio es aquí mucho mayor que en otras partes del país... No pecamos de exagerados si decimos que el FOCEP cuenta ya con cien mil miembros, sólo en la ciudad de Puebla... En el FOCEP están el movimiento revolucionario del magisterio; los rieleros (*sic*) del movimiento sindical ferrocarrilero; sindicatos como el de Volkswagen, Xonaca Textil y otros; cuarenta mil colonos miembros de la Federación de Colonias y Barrios; los locatarios de los mercados; la federación revolucionaria de inquilinos; los padres de estudiantes universitarios; los estudiantes; los

campesinos que han invadido los latifundios de Manzanilla y Santa Inés; la Central Campesina Independiente; los empleados de todas clases... El FOCEP es ya una fuerza incontrastable en Puebla y esto quedó demostrado el viernes 27 del actual, cuando el Ejército tuvo que impedir la celebración de una gigantesca manifestación de apoyo a la universidad... El FOCEP es el azote de los reaccionarios.⁵⁹

Tal vez Sánchez Pontón exageraba en cuanto a la cantidad de simpatizantes del FOCEP, pero lo que sí era un hecho innegable es que su fuerza había crecido a un grado tal que el gobierno comenzó a temerle, tal como lo puso de relieve la prohibición de la marcha que convocó para el 27 de octubre.

El 7 de noviembre un grupo de alrededor de 20 individuos —encabezados por los estudiantes de arquitectura Luis Paredes Moctezuma, Ángel Morales Piloni y Jaime Auriolles Gamboa— atacó con armas de alto poder las instalaciones de la escuela preparatoria nocturna Benito Juárez.⁶⁰

En respuesta a dicha acción, el 9 de noviembre el Consejo Universitario acordó la expulsión definitiva de los estudiantes mencionados. También en dicha sesión se acordó suspender de sus funciones al arquitecto Guillermo Casados Guzmán, director de la escuela de Arquitectura, por su negligencia en atender los problemas más urgentes de la escuela, y por su complicidad en las agresiones de los grupos derechistas que atacaban a la misma. Sin embargo, se acordó citarlo en una sesión posterior con el propósito de darle oportunidad de que se defendiese de dichas acusaciones.⁶¹

Esa medida provocó que arriera la ira de las organizaciones derechistas que se encontraban tras los expulsados, quienes procedieron de inmediato a desencadenar una ola de ataques contra las autoridades universitarias y el movimiento democrático. Así, el 9 de noviembre aquéllas agredieron a

varios integrantes del comité coordinador de la escuela de Arquitectura.⁶² Entre las organizaciones de referencia se encontraban el Bloque de Ciudad Universitaria y la Federación Estudiantil Universitaria, que se parapetaron principalmente en la escuela de Arquitectura para desencadenar sus acciones.

Durante buena parte del mes de octubre tales organizaciones se dieron a la tarea de publicar varios desplegados en los que solicitaban el desconocimiento de las autoridades de la institución y la desaparición de los comités de lucha. Tales demandas fueron rechazadas por la mayoría de los estudiantes, y lo hicieron saber también a través de desplegados a la opinión pública.⁶³

Con el objeto de brindarle cobertura a los grupos derechistas que actuaban en la universidad, surge a mediados de noviembre una fantasmagórica Sociedad de Padres de Familia de Estudiantes Universitarios, presidida por Rodolfo Paz Torres como presidente, y por Alfonso Molina, como secretario, que se da a la tarea de propagar que los estudiantes y autoridades expulsados de Arquitectura eran “víctimas de la represión comunista”.⁶⁴

En la noche del 14 de noviembre Ángel Morales Piloni y Teodoro Alonso Ruiz —dos de los expulsados de la escuela de Arquitectura— resultaron heridos en una balacera atribuida a “pandilleros de la UAP”. También recibieron lesiones menores el estudiante de arquitectura Jorge Rosete González.⁶⁵

Nunca se supo con certeza la autoría de tal agresión, empero no descartamos la posibilidad de que se haya tratado de uno de tantos enfrentamientos entre miembros de los bandos en pugna de la escuela de Arquitectura, solo que en esa ocasión le tocó llevar la peor parte al bando derechista.

Lo cierto es que tal acontecimiento fue aprovechado por la derecha para desencadenar un verdadero escándalo, que le permitió justificar su reofensiva contra la UAP.

Así, al día siguiente del suceso mencionado, el Bloque de Ciudad Universitaria publicó en los principales diarios de la entidad un desplegado tremendamente sensacionalista que llevaba como título “Otra vez actúa el tribunal de la checa rusa en Puebla”, y en el que se señalaba lo siguiente:

La única y verdadera autoridad en Puebla, el TRIBUNAL SANGRIENTO DE LA CHECARUSA-COMUNISTA (*sic*) que preside el criminal Luis Rivera Terrazas juzgó antier y condenó a muerte (*sic*) a dos jóvenes de Arquitectura, líderes anticomunistas, por el gravísimo delito de oponerse al aplastamiento rojo (*sic*) de la Universidad... La sentencia se ejerció en frío; anoche mismo fueron balaceados a mansalva, librándose milagrosamente de morir ya que pudieron escapar de sus manos a pesar de estar gravemente heridos... Nuestros compañeros heridos son alumnos del Bloque de Ciudad Universitaria y queremos decir al PUEBLO: si nuestra sangre es el precio para salvar a Puebla del comunismo ¡ESTAMOS DISPUESTOS A PAGARLO! Porque no hay sangre mártir más limpia que la del JOVEN Y VERDADERO UNIVERSITARIO. Nuestra lucha la llevaremos adelante hasta sus últimas consecuencias; no nos importa el precio.⁶⁶

Aprovechando el escándalo citado, el 16 de noviembre se celebra un encuentro de varios representantes de la iniciativa privada, en la que acuerdan solicitarle al gobierno la desaparición de la Ley Orgánica de la UAP y la supresión del subsidio a la misma, advirtiendo que “podrían llegar a una suspensión de pagos de impuestos a nivel federal, estatal y local”, caso de que sus demandas no fueran atendidas.⁶⁷

Aparte de exponerles tales demandas al gobierno estatal, acordaron también enviar telegramas al presidente Echeverría para darle a conocer sus resoluciones. Uno de los presentes,

por cierto, expresó que esto no funcionaría porque el secretario de Educación había dicho que el subsidio era intocable, y “ya sabemos, esto en el fondo lo dijo Echeverría”.⁶⁸ Tal personaje se refería a las declaraciones expresadas por el secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Ahúja, en Tepic, Nayarit, que provocaron una gran irritación en todos los círculos derechistas del país, sobre todo en los de Puebla.

Tal encuentro se llevó a cabo en el edificio del Centro Patronal, e hicieron acto de presencia destacadas personalidades de la derecha poblana, entre ellos Eduardo García Suárez, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación, Gerardo Pellico, Francisco Bernat Solsona, Abelardo Sánchez, Francisco Sánchez Díaz de Rivero, Ricardo Villa Escalera y Trinidad Espejel, presidente de la Federación de Barrios y Colonias. Éste anunció que su organización estaba preparando una gran manifestación para el día 24 de ese mes, con el objeto de “frenar a los comunistas que se habían apoderado de la universidad”. Y advirtió: “de ser preciso tomaremos la universidad a sangre y fuego, si es necesario; sabemos que muchos de nuestros compañeros caerán, pero no importa si es por un México mejor”.⁶⁹

En ese mismo evento —a petición de Eduardo García Suárez— se acordó la creación de un Comité Coordinador Permanente de la Ciudadanía Poblana (CCPCP), integrado por representantes de todos los sectores, “para resolver los problemas de la universidad”.

Tal organismo quedó constituido de la manera siguiente: presidente, Gerardo Pellico Agüeros, presidente del Centro Patronal de Puebla, vicepresidente, Francisco Bernat Solsona, presidente del Club de Empresarios de Puebla, secretario, ingeniero Ricardo Villa Escalera, presidente de la Asociación de Empresarios Textiles de Puebla y Tlaxcala, tesorero, señor Abelardo Sánchez G., presidente de la Junta de Mejoras de

Puebla, y por otros doce prohombres de Puebla, entre ellos el ingeniero Eduardo García Suárez, el arquitecto Javier Torres Leyva, y el ingeniero Francisco Sánchez Díaz de Rivera.

Al día siguiente, 17 de noviembre, apareció un desplegado de la nueva organización en la que se anunciaba que la misma se proponía los siguientes objetivos:

- a) Declarar un lucha permanente contra el comunismo y la subversión; b) Pugnar por la derogación de la Ley Orgánica de la UAP, “por considerarla un instrumento de la represión comunista”(sic); c) Desconocimiento de las autoridades universitarias por ser los directivos y cómplices (sic) de los asesinatos, torturas, prostitución (sic) y drogas que imperan en el edificio Carolino; d) Desaparición de los comités de lucha y de la preparatoria popular; e) entrega de archivos a cada escuela de Ciudad Universitaria.⁷⁰

Así también, en dicho documento se decía: “Aplaudimos la actitud viril y enérgica de la Federación de Barrios y Colonias; exigimos al procurador general de justicia que defina y cumpla las órdenes que el señor gobernador le dio en la manifestación anticomunista celebrada el 18 de octubre.”

Se acordó, además, exigirle a los gobiernos estatal y federal la retención del subsidio a la UAP, “ya que las autoridades universitarias no son legítimas”, y terminaba advirtiendo: “A partir del 25 de noviembre del presente, si los comunistas continúan usurpando la UAP se suspenderá el pago de impuestos tanto municipal, como estatal y federal”.⁷¹

Manuel Buendía, a quien no pasó desapercibido que la postura del CCPCP encerraba una amenaza hacia el gobierno federal, comentó tal iniciativa en los términos siguientes:

La falange poblana decidió formular un nuevo reto a la ley constitucional y al gobierno de la Federación, incluyendo un ultimátum que vence el 24 del presente. Si para entonces no ha sido derogada la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Puebla, y si la propia universidad no es entregada a las fuerzas de la falange, ésta decretará una suspensión total de impuestos y lanzará sus brigadas de choque a ocupar los edificios universitarios, acción en la que “moriremos juntos”... Aclara la falange que apoya incondicionalmente al gobernador del Estado, doctor Gonzalo Bautista O'Farril... La insolencia y la provocación no tiene, pues, otro destinatario que el presidente Luis Echeverría.⁷²

Frente al redoblamiento de la embestida derechista, los comités de lucha se dieron a la tarea de convocar a una jornada nacional de apoyo a la UAP y a las otras universidades agredidas. El FOCEP, por su parte, frente al anuncio de la Federación de Barrios y Colonias de realizar una marcha para el 24 de noviembre —que tenía como objetivo, como lo anunció su presidente Trinidad Espejel, en la reunión arriba mencionada, apoderarse del edificio Carolino “para expulsar a los comunistas”— anunció que procedería a organizar una gran movilización para el 22 de noviembre. Sin duda, mediante esta iniciativa el FOCEP pretendía realizar una demostración de fuerza, encaminada a desalentar los planes golpistas de la Federación de Barrios y Colonias, y de las otras organizaciones de la derecha, el Comité Coordinador Permanente de la Ciudadanía Poblana y el Bloque de Estudiantes de Ciudad Universitaria.

En la tarde del 18 de noviembre los directivos del Consejo Coordinador Permanente de la Ciudadanía Poblana, de la Federación de Barrios y Colonias, de la Sociedad de Padres de Familia de la UAP, y representantes de las escuelas sostuvieron una reunión con el gobernador del estado para exponerle las

demandas que habían acordado en la reunión celebrada en el Centro Patronal. Bautista O'Farril no se comprometió con ninguna de las propuestas, lo cual llevó al estudiante Luis Paredes Moctezuma a exclamar: “Si ya actuamos en plan realista de derecho, también estamos dispuestos al plan de la fuerza. Le exigimos que se haga uso de la fuerza. Nosotros ya lo hicimos; ahora exigimos que usted lo haga”.⁷³

Pero Bautista O'Farril se esforzó por no comprometerse —por lo menos públicamente— con las demandas de dichos grupos. Sin duda el gobernador, al adoptar esta postura, tenía presentes las advertencias veladas de la Federación —formuladas por Bravo Ahúja en Tepic— en el sentido de que no se toleraría la violación a la autonomía universitaria por los grupos derechistas.

El único acuerdo que emanó de dicha reunión fue el compromiso de las organizaciones presentes de suspender el acto programado para el día 24, a condición de que el FOCEP también suspendiese el suyo. O'Farril aceptó tal propuesta informando, a través del procurador Raymundo Zamudio, que el gobierno prohibirían tanto el acto convocado por la Federación de Barrios y Colonias como el anunciado por el FOCEP.⁷⁴

Sin duda, en el ánimo del gobernador pesó también el malestar que experimentaban la mayoría de los sindicatos de la entidad frente a las provocaciones del sector privado, los cuales, pese a no involucrarse en la defensa de la UAP, estaban muy lejos de mirar con simpatías el tono agresivo de la derecha poblana hacia los gobiernos estatal y federal. Este malestar salió a relucir en el acto conmemorativo del 62 aniversario de la Revolución, en donde alrededor de quince mil trabajadores participaron en el acto, enarbolando consignas hostiles a las organizaciones derechistas. Concluida la demostración, el dirigente froquista, Manuel Cholula Tlalolini, expresó que su central no participaría: “en ningún evento organizado por la

iniciativa privada, pues nosotros no estamos en contra de la Universidad”. También criticó a los grupos de vándalos, que actuando al amparo del movimiento de reforma, perpetraban actos en contra de los choferes de los camiones que repartían refrescos y los choferes de las líneas urbanas.⁷⁵

Mientras tanto, proseguían las hostilidades hacia el movimiento democrático. Entre el 17 y el 19 de noviembre fueron detenidos los estudiantes Miguel Calderón, Arturo Loyola, Ángel Valerdi, Víctor Marín Dorado, Raúl Ortiz, y Alfonso Reyes Vázquez. Según el diario *La Opinión*, hacia el 24 de noviembre había entre 115 y 120 órdenes de aprehensión giradas por diversos jueces penales en contra autoridades, maestros y estudiantes.⁷⁶

En aras de paliar la embestida contra el movimiento, los comités de lucha organizaron una Jornada de Solidaridad hacia la UAP, del 23 de noviembre al primero de diciembre, en la que participaron diversos contingentes populares y connotados intelectuales, periodistas y escritores. Se destacó la presencia del poeta y colaborador de la revista *Siempre!*, Renato Leduc, quien al ser entrevistado declaró: “Sabía de la gravedad que existe en el estado y de lucha heroica —y esa es la palabra, heroica— que están sosteniendo los integrantes de la comunidad universitaria en defensa de su institución”. Y agregó que él sólo se podía explicar los graves ataques que se cometen en contra de la UAP al hecho de que el gobierno actual sea heredero del nefasto Maximino Ávila Camacho.⁷⁷

El 26 de noviembre, el jefe del Departamento de Extensión y Servicio Social, Enrique Cabrera Barroso, denunció en un desplegado público —dirigido al presidente de la república y al gobernador del estado— que el sábado 25 se había perpetrado un grave atentado contra las brigadas de servicio social que atendían la zona noroeste del estado, prestando servicio médico en diversas poblaciones de la Sierra. Cabrera Barroso

responsabilizaba al procurador Zamudio de haber sido el autor de dicho acto.⁷⁸

Días después también fueron agredidos por la policía judicial del estado varios estudiantes de ingeniería civil que prestaban su servicio social.

Frente a esos hechos, en conferencia de prensa a la que acudieron algunos de los principales medios informativos del país, el rector Sergio Flores Suárez acusó al gobierno del estado de

suprimir las garantías individuales constitucionales, de perseguir a maestros y estudiantes, de impedir a punta de ametralladora que los alumnos hagan servicio social, y de estimular actos subversivos de la extrema derecha que pueden inclusive servir a intereses ajenos al país y de mantener un clima de terror.⁷⁹

Aunque ya en ocasiones anteriores las autoridades de la UAP habían denunciado la alianza del gobierno con las organizaciones más extremistas de la derecha poblana por lo general, reiteramos, se referían de manera cuidadosa —como señalamos en párrafos anteriores— a la persona del gobernador, pero en esta ocasión Flores Suárez habló directo, sin resquemor alguno. Sin duda a esas alturas ya estaba plenamente convencido de la complicidad de Bautista O'Farril con la derecha poblana.

Frente a las acusaciones del rector, el gobernador respondió: “desde que el Partido Comunista se posesionó de la UAP la comunidad estudiantil efectivamente vive en una constante zozobra, pero no como producto de mi actitud”. Y agregó:

Distintos grupos estudiantiles, de verdaderos estudiantes, han acudido a mí solicitando ayuda y me han explicado que la universidad está en manos de un grupo comunista que impide la universalidad de corrientes ideológicas dentro de la propia comunidad universitaria.⁸⁰

El asesinato de Enrique Cabrera Barroso

En ese contexto, en la noche del 20 de diciembre fue asesinado frente a las puertas de su domicilio el dirigente universitario Enrique Cabrera Barroso, jefe del Departamento de Extensión y Servicio Social, quien había destacado en el movimiento de reforma de la UAP desde los años sesenta.

La entidad se llenó de estupor. No se apagaba aún el clamor popular de exigencia del esclarecimiento del crimen de Arriaga cuando de nuevo Puebla se manchaba con la sangre de un líder universitario.

Aunque la violencia contra la universidad se había convertido en el “pan nuestro de cada día” la sociedad poblana estaba muy lejos de haberse acostumbrado a la misma. Una cosa eran las escaramuzas y los ataques contra autoridades, estudiantes y maestros, pero cosa muy diferente era el asesinato de un ser humano.

Un hermano del finado declaró que fueron tres sujetos quienes dispararon por la espalda contra Enrique. El cadáver de éste presentaba 19 impactos de bala de calibres .380, 38 super y 9 mm Luger W.W.⁸¹

Los universitarios esta vez no titubearon en acusar al gobierno del estado como responsable del crimen. Así lo expresó el rector Sergio Flores Suárez en la conferencia de prensa que se llevó a cabo al día siguiente, agregando que ese hecho corroboraba las denuncias que había formulado en días pasados, en particular en el desplegado del 28 de noviembre, en donde acusaba a las autoridades de suprimir las garantías individuales y de fomentar los actos terroristas de la extrema derecha.⁸²

El líder campesino Ramón Danzós Palomino, dirigente del cci, retomó la acusación del rector, declarando: “para nosotros el gobierno es el directo responsable. Son los frutos del discurso que el gobernador Gonzalo Bautista O’Farril pronunció el 18 de octubre, dejando las puertas de la cárcel abiertas para los revolu-

cionarios, olvidando decir que también las tumbas estaban abiertas”.⁸³ Esto declaró en el sepelio de Cabrera, en el panteón Francés, al que acudieron alrededor de tres mil personas, entre universitarios, campesinos y diversos sectores sociales.

La reacción de las autoridades policiacas no varió sustancialmente en relación al crimen de Arriaga: al inicio realizaron un gran despliegue para intentar dar con los asesinos de Cabrera, después anunciaron que ya tenían algunas pistas de los mismos pero, como se esperaba, pocas semanas después volvieron a su mutismo de costumbre.⁸⁴

Lo que sí varió fue la actitud de Gonzalo Bautista O’Farril, quien lejos de guardar la circunspección mostrada al principio de su mandato, esta vez no titubeó en sostener que el homicidio de Cabrera “pudo partir de una purga (*sic*) ordenada por quienes dirigen actualmente a la universidad”.

Y lanzó otras dos hipótesis:

La agresión pudo partir de algunos de los muchos grupos universitarios que están en contra de la política sectaria (*sic*) de las actuales autoridades de la UAP, o de alguno de los terratenientes que se sintieron afectados por las invasiones de sus tierras que Enrique Cabrera propició y dirigió a través de la fracción comunista (*sic*) de la CCI.⁸⁵

Aunque se trataba según esto de “tres hipótesis” —según palabras del mismo gobernador— tras las mismas subyacía en realidad la misma conclusión: Cabrera fue asesinado como parte del “complot” urdido por los comunistas para apoderarse de la universidad, cuyo siguiente paso sería apoderarse del estado de Puebla y luego del país.

En esta ocasión, asimismo, el gobernador poblano y sus aliados de la derecha evidenciaron —tan vez sin proponérselo— no sólo sus vínculos y relaciones, sino incluso la similitud de sus

“interpretaciones” sobre lo que acontecía en la universidad, entre las que destacaba, reitero, la tesis del “complot” o de la “conjura” comunista.

Así, en el desplegado que publicó el Bloque de Estudiantes Universitarios —otro membrete de la derecha— el 23 de diciembre, se señalaba:

Es evidente el distanciamiento que existió a últimas fechas entre Enrique Cabrera y las actuales autoridades universitarias encabezadas por Rivera Terrazas y Sergio Flores... A Cabrera se le imputó falta de disciplina (*sic*) por su carácter impetuoso y agresivo, que lo hacía poco dominable (*sic*) de quienes lo consideraban su subordinado...

Enseguida se mencionaba que Cabrera se convirtió en un obstáculo para las ambiciones de poder de Flores y de Terrazas ya que amenazaba convertir a su padre, el doctor Guillermo Cabrera Candia, en un fuerte prospecto para la rectoría, ¡razón por la cual fue víctima de otra “purga” más de los comunistas! El documento finalizaba con las siguientes palabras: “¡¡Alerta compañeros universitarios... Nuestra *alma mater* sigue siendo el campo experimental de la escalada del terror y del crimen (comunista)!”⁸⁶

He ahí un ejemplo arquetípico de la mentalidad paranoica de los fascistas, proclive a atribuir a sus adversarios las acciones que tiene en mente, y sobre todo, marcadamente proclive a intuir “conjuras” en todo momento y en todas partes.

En su libro *Masa y Poder* —tal vez la obra más compleja en lo que concierne al análisis del pensamiento autoritario y fascista— Elías Canetti observa:

Quizá sea útil referirse al significado que tienen los complots para el paranoico. Las *conspiraciones* o *conjuraciones* están

para él a la orden del día, es casi imposible no toparse con él con algo que no se le parezca, aunque sea remotamente. El *paranoico se siente cercado*. Su enemigo principal nunca se conformará con atacarlo solo. Siempre procurará azuzar contra él una muta [por “muta” Canetti designa a “un grupo de hombres excitados que nada desean con mayor vehemencia que ser más”] odiosa y echársele encima en el momento preciso. Los miembros de la muta, permanecen al comienzo ocultos, pueden estar en cualquier parte. Fingen ser inofensivos e inocentes, como si no supieran qué acechan. Pero la penetrante fuerza mental del paranoico logra desenmascararlos. *Dondequiera que meta la mano extrae un conjurado*. Siempre, aunque no ladre, la muta está presente; su disposición es inalterable. Una vez conquistados por el enemigo, siguen siendo lo que son, sus perros fielmente devotos. Puede tratarlos como quiera. Los mantiene sujetos a la trailla de su maldad aún a gran distancia. Los dirige como le da la gana, y de preferencia elige a aquellos que acosan desde todos lados simultáneamente y con gran superioridad al afectado.⁸⁷

El 3 de enero de 1973 Cuauhtémoc Cárdenas publicó un artículo en la revista *Siempre!*, en el que señalaba:

Con profunda pena e indignación queremos llamar la atención de los mejicanos conscientes sobre los hechos de violencia que se vienen sucediendo en distintas partes de la República, particularmente en Puebla, donde el más reciente de estos hechos ha sido el cobarde asesinato de Enrique Cabrera, jefe de los Servicios Sociales de la Universidad Autónoma de Puebla. Podemos discrepar o coincidir con las posiciones asumidas por Enrique Cabrera a lo largo de su actuación política. Tenemos derecho a ello. Pero no podemos admitir que un luchador más, que un mexicano más, cualquiera que sea su

actitud política y cualquiera que sea nuestra adhesión u oposición al respecto, que un ciudadano que actúa con apego a la ley, caiga como ha caído Enrique Cabrera. La aplicación estricta de la ley, el castigo de todos los culpables, cualquiera que sea su jerarquía y por mínima que pudiera parecer su participación en los delitos cometidos, es lo único que puede impedir que la violencia aumente y que el país retroceda y se vea envuelto en situaciones graves, tanto en lo que hace a la construcción de una sociedad democrática, como a la protección y defensa de la soberanía nacional.⁸⁸

Por su parte Alberto Domingo —quien se distinguió por su solidaridad hacia la UAP en esos años aciagos—, escribió:

Ya nadie, en Puebla, tiene la vida segura. Bajo un sórdido manto de impunidad, cien, mil asesinos andan sueltos, emboscados en las esquinas, rastreando nuevas víctimas por las calles de la ciudad entera, acosando las calles de “los enemigos”. Es cosa cotidiana que el teléfono suene y la amenaza de muerte se vomite entre insolencias delirantes. Llamadas anónimas que también piden a los jefes de familia, las amas de casa, “reunirse para decidir acciones en defensa de los hijos contra el peligro comunista”. No menos de doce atentados —balaceras contra los vehículos o las casas de los universitarios prominentes— se han sucedido desde el asesinato del doctor Joel Arriaga, sin que una sola investigación policíaca haya logrado la menor pista, la menor huella de los culpables. La policía poblana sale con frecuencia a las calles céntricas de la ciudad en despliegues masivos para contener “posibles manifestaciones estudiantiles u obreras”... Los crímenes se han seguido, creciendo en brutalidad, sin la menor ruptura por intervención de autoridad prudente. Puebla es el imperio de los matarifes... En Puebla todas las garantías dejaron de existir ya. Es la pistola asesina la única

que hace ley. Es la fuerza bruta la única que campea. Es el asalto, es el linchamiento, es el garrote, es la emboscada nocturna, es la horda fanática, lo único que en Puebla hace política, defiende economías explotadoras, desaloja a la razón, trata de pulverizar a la Universidad como bastión del pensamiento libre, hunde a la ciudadanía en la desazón y el miedo, aniquila toda posibilidad de gobierno imparcial, de vida limpia, de acción justa, de labor fecunda. Toda Puebla huele a pólvora, está manchada de sangre. Bajo un manto de impunidad, entre la impotencia sistemática de las autoridades, Puebla ha vuelto a la edad de piedra. ¿Hasta cuándo durará la tiniebla, el primitivismo cavernícola, el cainismo asqueroso torvamente orgulloso de sus inexplicables e inadmisibles fueros?⁸⁹

Sin embargo, no sólo arreciaba la ofensiva contra la UAP, sino contra la mayoría de las universidades en que tenían lugar procesos de reforma similares. En ese sentido Heberto Castillo escribía:

Los problemas de nuestras universidades crecen a la vista de todos... la extrema derecha sigue en lucha contra las universidades. Apenas el 29 de enero, 40 hombres armados con pistolas y metralletas tomaron el Hospital de la Universidad Autónoma de Nuevo León, expulsaron a trabajadores y estudiantes del mismo, amordazaron a tres trabajadores por algunos horas y dieron “posesión” de la dirección del Hospital al doctor Marco Antonio Ugartechea... En Puebla se desarrollan también nuevas agresiones contra los universitarios. Mientras los asesinatos de los maestros Arriaga y Cabrera no se esclarecen, el gobernador Bautista, recientemente confirmado, se colude con el grupo financiero de Puebla y el clero más oscurantista del estado: la prensa informa que desde patrullas policiacas se ametralla a las escuelas. El

estudiante Josafat Tenorio muere de un balazo en la frente y la tensión crece... Está claro, evidente, que los grupos conservadores más radicales y más poderosos económicamente se alían con el sector gubernamental más reaccionario para destruir a las universidades que aspiran a ejercer el ideal universitario: cuestionar permanentemente el sistema que vivimos para encontrar las mejores soluciones —de raíz— a los problemas económicos, políticos, sociales y culturales de nuestro tiempo. Y está visto que esos grupos, para realizar su empeño, se enfrentan abiertamente al gobierno federal. Pretenden que el gobierno del centro se ponga incondicionalmente de su lado. Quieren impedir a toda costa el surgimiento de fuerzas populares organizadas. Y organizar con la represión gubernamental a que los jóvenes tomen el camino de la violencia.⁹⁰

El 3 de enero de 1973, durante su visita a Puebla, el presidente del PAN, José Ángel Conchello, formuló una declaración sumamente audaz: “en tanto no se desmientan los hechos palpables, pienso que las autoridades del estado no son ajenas ni al origen y al desenvolvimiento de los asesinatos políticos de los catedráticos Joel Arriaga y Enrique Cabrera”. Y agregó también en conferencia de prensa: “Para volver al orden en Puebla es necesario regresar al cumplimiento estricto de la Constitución... Tal parece que aquí se ha implementado ‘la ley de la selva’, o que se vive en plena barbarie”.⁹¹

Tal declaración tuvo el efecto de una bomba de tiempo: Conchello retomaba al pie de la letra las acusaciones de las autoridades universitarias contra Bautista O’Farril.

Si bien otras connotadas personalidades habían hablado en términos similares —Leduc, Alberto Domingo, Carlos Monsiváis— no era lo mismo que lo hiciese un hombre como Conchello, a quien no distinguía precisamente su ideario izquier-

dista; por el contrario, era un hombre de derecha, pero un hombre al que indignaban la barbarie de la derecha poblana.

A la vez, por tratarse de un líder de un partido nacional, sus declaraciones tuvieron mucho más impacto, dado que circularon a nivel nacional. Por supuesto sus palabras no fueron del agrado de la derecha mexicana, y menos de la derecha poblana.

Conciente de la gravedad de las declaraciones de Conchello —y en aras de paliar su tremendo impacto— el gobierno de Bautista O'Farril, a través de la Asociación de Abogados de Puebla, presentó una demanda formal “por el delito de calumnia” contra Conchello ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En contrapunto a esa iniciativa el gobierno —sin duda, con el propósito de paliar el impacto de las declaraciones de Conchello— intentó desviar la atención de la opinión pública anunciando el 8 de enero que “ya había dos sospechosos de ser los presuntos autores del asesinato del profesor universitario Enrique Cabrera Barroso”. Según esto, se trataba de dos delincuentes del estado de Guerrero que se dedicaban ¡a asaltar bancos!⁹²

Lejos de causar la expectación que se esperaba, la opinión pública asumió tal noticia como una verdadera “vacilada”, si es que no como “un parto de los montes”.

Mientras tanto proseguían los ataques de los grupos derechistas contra la UAP. Así, el 17 de enero un grupo de alrededor de quince pandilleros se presentó en las instalaciones de la preparatoria diurna Benito Juárez, dándose a la tarea de amagar con armas de alto poder a los estudiantes y profesores que se hallaban presentes. Ese mismo día, por la tarde, otro grupo atacó a la escuela de Administración de Empresas, resultando lesionados cuatro estudiantes.⁹³

El 24 de enero un nutrido contingente de “fuas” atacó a la escuela de Derecho, resultó muerto el estudiante de esta escuela Josaphat Tenorio Pacheco, de 26 años. Fue asesinado de un balazo en la frente. Entre los atacantes fueron identificados Jesús Rivera Torija, Jorge Cuautle Méndez, Jesús Márquez de Ita, Teófilo Bernal Saldaña, Ricardo Loranca Senties, *la Gringa*, Cuauhtémoc Huerta Morales y Jesús Percino Escalante, quienes eran capitaneados por Rubén del Castillo Hernández, Ángel Morales Piloni y Luis Paredes Moctezuma.⁹⁴ Estos dos últimos, reiteramos, habían sido expulsados de la escuela de Arquitectura por el H. Consejo Universitario, por sus vínculos con el FUA, y en general por sus actividades terroristas.

Días después las autoridades judiciales, mediante un boletín de prensa, informaron de la captura de Jesús Rivera Torija, a quien señalaron como presunto responsable del asesinato de Josaphat Tenorio Pacheco.⁹⁵

También fueron consignados once de los agresores, pero cuatro de ellos salieron en libertad gracias a la “benignidad” —como señaló *La Opinión*—del juez tercero de distrito de defensa social, licenciado Guillermo Fernández de Lara, quien se limitó a acusarlos del delito de “lesiones”, lo cual les permitió librar la condena judicial. Esos cuatro fueron Francisco Carrillo Estrada, Jorge Jiménez Zárate, Luis Miguel López y Luis Eduardo Paredes Moctezuma. Pero sólo el primero de ellos pisó la cárcel, ya que los otros tres fingieron encontrarse heridos por lo cual fueron internados en un sanatorio.⁹⁶

Y como “recompensa” a la benevolencia del mencionado juez fue premiado con una notaría pública, pocos años después.

Sin duda lograron librar la acción de la justicia gracias a las organizaciones patronales que apoyaban al FUA y en general, a la derecha poblana y al gobernador Bautista O’Farril.

El 31 de enero el FOCEP realizó una asamblea popular al interior del edificio Carolino para manifestar su solidaridad hacia la UAP. Acudieron campesinos de Xonacatepec, La Resurrección, Tecamachalco, trabajadores ferrocarrileros y electricistas, representantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM (STEUNAM), y de los comités de lucha de esta institución.⁹⁷ En dicho evento, aparte de reiterarse la exigencia de castigo a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de Joel Arriaga, de Enrique Cabrera Barroso y de Josaphat Tenorio Pacheco, se acordó demandarle al gobierno una indemnización de un millón de pesos para las familias de los universitarios asesinados.⁹⁸

Al día siguiente del encuentro de referencia la sociedad poblana se estremeció con la noticia del asesinato del policía David Morales Flores, cuyo cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del edificio Carolino, en la calle 6 sur, casi esquina con la 5 oriente. El cadáver presentaba diversas lesiones, por lo cual se supo que había sido torturado salvajemente. Según no pocos diarios locales, la acción se llevó a cabo en las catacumbas del edificio Carolino.

El gobernador acusó a “las brigadas de choque” de los comités de lucha de ser los autores del crimen.⁹⁹ Éstos, a la vez, acusaron al gobierno.

¿Qué fue lo que sucedió en realidad? De la lectura minuciosa de las diversas versiones que se presentaron en los medios informativos, tenemos la impresión de que las cosas sucedieron así: es muy probable que el policía David Morales Flores —que por cierto estaba inscrito en el Departamento de Idiomas de la UAP— realizara labores de espionaje al interior del movimiento, desde luego por instrucciones de sus superiores. Sin duda los comités de lucha ya estaban al tanto de sus actividades, por lo cual seguían de cerca sus pasos. Como parte de su labor, hizo acto de presencia en el acto político del 31 de

marzo, donde fue detenido —junto con otro policía— por algunos miembros de los comités de lucha o por gente allegada a éstos, quienes seguramente intentaron sacarle información, extralimitándose en esta tarea.

Como señalamos en líneas anteriores, en varios comités de lucha se habían infiltrado universitarios sin escrúpulos o antisociales que, amparándose en la bandera de la Reforma Universitaria, solían perpetrar actos delictivos —como el asalto a camiones repartidores o a negocios— que le generaban enemigos gratuitos a la institución y al mismo movimiento. En éste, además —como suele suceder en todos los movimientos sociales de relevancia— habían logrado incrustarse agentes vinculados a las diversas entidades gubernamentales, quienes a veces no sólo se limitaban a la tarea de enviarle “reportes” a sus superiores, sino también en ocasiones llegaban al extremo de actuar como “activistas”, aprovechando esta máscara para promover iniciativas irresponsables que dañaban al movimiento.

No descartamos, pues, la posibilidad de que haya sido ese tipo de gente la que asesinó al policía David Morales Flores.

Comentando ese incidente, el conocido sociólogo y periodista Gastón García Cantú señaló: “En Puebla ha brotado la criminalidad juvenil: un policía fue torturado y muerto. Este acto no tiene precedente en nuestra casa de estudios. Demuestra que la violencia se va adueñando de las universidades”.¹⁰⁰

Los principales dirigentes de los comités de lucha, en lugar de deslindarse de tal acción, o de condenarla enérgicamente, cometieron el error de no denunciar ante las autoridades correspondientes a los autores del crimen de referencia, arguyendo que el asesinato de David Morales Flores no era sino un “acto maquiavélico” del gobierno enderezado a volcar a la opinión pública en contra de los universitarios, tal como se expuso en un desplegado público.¹⁰¹

Tal vez a los líderes universitarios les cayó por sorpresa tal hecho, de modo que no tuvieron más remedio que recurrir al pretexto de marras, que por cierto se presentó de la manera más burda e inane que se pueda concebir. En el desplegado de referencia se llegaba al extremo de sostener que “la reacción” había eliminado a David Morales Flores “porque ya representaba un estorbo para el mismo gobierno pues es sabido que fungía como chofer particular de Joaquín Vázquez Huerta, y conocía muchas monstruosidades del antiguo jefe de la policía y mostraba cierto interés en denunciarlas”.

Se trató, pues, de argumentos absurdos. Cierto es que a esas alturas en Puebla nadie ponía en duda la perversidad de las autoridades o de los grupos policiacos, pero cosa muy distinta era pretender justificar lo injustificable; esto es, ¿cómo podía justificarse el asesinato de un modesto policía que no hacía otra cosa que seguir instrucciones de sus superiores?

Reitero, no podemos aseverar que el crimen fue perpetrado por los dirigentes más serios de los comités de lucha —esto, por lo demás, nunca se comprobó— pero éstos cometieron el error de no actuar enérgicamente frente a los verdaderos culpables. En ese sentido, tal hecho manchó la limpieza y nobleza de miras del movimiento universitario.

Desde luego, no podemos perder de vista —y decimos esto sin el ánimo de justificar el hecho que comentamos— que la feroz ofensiva contra la universidad condujo a una fuerte radicalización en diversos grupos del movimiento universitario, principalmente entre aquellos a quienes no distinguía precisamente una visión compleja de las contradicciones políticas y sociales. Estos grupos pensaron que había llegado la hora de “responder golpe por golpe” a las acciones represivas del gobierno, por lo cual desprendieron la conclusión de que se tornaba preciso enfrentarse a los elementos policiacos, perdiendo de vista que éstos —a diferencia de los mandos

superiores— a fin de cuentas no eran sino personas comunes y corrientes que se ganaban la vida trabajando en esa actividad.

Por esos años algunos sectores de la izquierda más atrasada del país estaban persuadidos de que los soldados y los policías eran “perros guardianes” de la burguesía, por lo cual asesinaban a algunos de ellos en cuanto se les presentaba la oportunidad. Esto sucedió, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en donde el principal grupo que dirigía el movimiento en esa institución, los llamados “enfermos”, perpetraron varios atentados contra policías indefensos que caminaban por las calles o viajaban en las unidades del transporte urbano.

En la UAP, afortunadamente, ese tipo de desviaciones no lograron prosperar debido a que los sectores más lúcidos del movimiento las combatieron denodadamente. Alfonso Vélez Pliego anota al respecto:

El auge del guerrillerismo y del ultraizquierdismo en algunos sectores del movimiento estudiantil nacional, aunado a las características de violencia extrema del proceso poblano, generan las condiciones para que algunos núcleos estudiantiles radicalizados pretendan conducir al movimiento a posiciones “enfermizas”, tal como había sucedido en Nuevo León, Sinaloa y Guerrero.

Y agrega que esta desviación “fue comprendida y combatida oportunamente por las fuerzas que poseían una mayor experiencia y una visión más justa del proceso de Reforma Universitaria y de las tareas de orientación que debería realizar en esta nueva fase de su desarrollo”.¹⁰²

Sin duda, en el combate a ese tipo de excesos y desviaciones jugó un papel fundamental el ingeniero Luis Rivera Terrazas, hombre al que no sólo distinguía una visión política

justa de la realidad nacional y estatal, sino también un carácter enérgico que no admitía ninguna clase de infatuaciones, máxime cuando las mismas ponían en peligro al movimiento democrático universitario.

A lo único que condujo tal asunto fue que tanto el gobierno como la derecha encontraron un magnífico pretexto para seguir acosando a la UAP.

El 13 de marzo, otro incidente dramático enlutó a la UAP: el prestigiado doctor Carlos Tello, jefe de enseñanza del Hospital Universitario, fue asesinado de una balazo en la frente por el pasante de medicina Antonio Ernesto Martínez Solís, quien se desempeñaba como interno en dicho nosocomio. Éste, según las versiones que presentaron personas que lo conocían, era un individuo desequilibrado, con características de paranoico.¹⁰³ El móvil del asesinato fue la indignación que le produjo el haber sido suspendido temporalmente de sus actividades en el hospital por su falta de responsabilidad.

Las autoridades universitarias aclararon de inmediato que Martínez Solís —al parecer originario de Chiapas— no sostenía nexo alguno con las corrientes políticas que actuaban al interior de la universidad, empero el crimen fue aprovechado por la derecha para exacerbar su campaña contra la misma, presentándolo como una expresión inequívoca “de la violencia que hay en la UAP”, tal como lo expresó el doctor Ángel Zerón Rojas, presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Particulares del Estado de Puebla.¹⁰⁴

Tal acusación carecía de fundamento alguno: el doctor Carlos Tello era un hombre sumamente apreciado por todos los universitarios por su calidad humana y por su profesionalismo. Su muerte llenó de consternación a los integrantes de la escuela de Medicina y del Hospital Universitario, en donde prestaba sus servicios.

La compañía orquestada por la derecha al calor de tal incidente se enfrió una vez que se difundió la noticia de que Ernesto Martínez Solís era exalumno del colegio Benavente, o sea una de las instituciones favoritas de dicha expresión política.¹⁰⁵

Quienes no cesaron de exigir el esclarecimiento de su asesinato fueron los universitarios de la UAP, en particular la comunidad de la escuela de Medicina.

Como siempre, las autoridades estatales se comprometieron a desplegar todos los esfuerzos posibles por aprehender al criminal, mas con el paso de los días y las semanas arrumbaron este asunto en el cajón de los asesinatos pendientes.

En los meses de febrero y marzo, los principales grupos patronales de Puebla informaron de su interés por crear una nueva universidad, iniciativa que anunciaron con bombos y platillos el 20 de marzo, después de un encuentro de los principales organismos de la iniciativa privada en las oficinas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.¹⁰⁶ Los promotores del proyecto de referencia —entre quienes se encontraba Eduardo García Suárez, destacado militante del FUA y uno de los fundadores del Comité Coordinador Permanente de la Ciudadanía Poblana— señalaron que “contaban con el apoyo del gobierno y de diversos sectores de la iniciativa privada”.

Entre las razones que se esgrimieron para la creación de la nueva universidad destacó el argumento de que “en la UAP no había suficiente cupo para los alumnos egresados de las escuelas particulares”.¹⁰⁷

Obviamente, en realidad tras dicha iniciativa subyacía el interés de los núcleos hegemónicos de la burguesía poblana por contar con una institución educativa de nivel superior que les permitiese formar a sus cuadros ideológicos y profesionales, una vez que llegaron a la conclusión de que la UAP ya nunca más sería

un bastión de los grupos dominantes de Puebla. Tal como escribieron J. Louvier, Manuel Díaz Cid y J. A. Arrubarena —líderes de la derecha poblana que tuvieron una participación destacada en la fundación del proyecto de referencia—:

A la nueva universidad había que concebirla integralmente, buscando eliminar todos sus vicios y errores que han provocado la instrumentalización y postración doctrinal de la institución universitaria, de la cual la experiencia de la UAP era muestra tangible. Había que dejar que los muertos enterraran a los muertos y asumir el reto de construir una verdadera universidad (*sic*) retomando desde sus raíces el espíritu universitario.¹⁰⁸

Dicho proyecto cristalizó el 7 de mayo de 1973, al fundarse la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), en el casco del exrancho La Noria.

La matanza del Primero de Mayo y la caída de Bautista O'Farril

El Primero de Mayo de 1973 de nuevo corrió la sangre por las calles de Puebla.

Aprovechando el acto conmemorativo del Día del Trabajo, diversos grupos estudiantiles decidieron presentarse en el desfile para repartir propaganda entre los obreros, en la que se les explicaba la situación que enfrentaba la UAP, y la postura de los comités de lucha. La policía detuvo a seis estudiantes que integraban una de esas brigadas, los cuales fueron encarcelados. Sus compañeros acudieron a informar de tal hecho a los comités de lucha, que se disponían —de consuno con otras organizaciones (el FOCEP, la Federación de Inquilinos, la Central Campesina Independiente y otras organizaciones sociales)— a efectuar un festival político-cultural en la Plaza de la Democracia. Aprovechando que ya se encontraban bastantes personas en este sitio,

los comités decidieron realizar un mitin para exigir la libertad de los estudiantes detenidos. Mientras se efectuaba el acto los ocupantes de una patrulla policiaca que circulaba por la calle Maximino Ávila Camacho dispararon sus armas contra el edificio de la universidad y contra las personas que se encontraban en el mitin, lo cual propició que varios estudiantes interceptaran al vehículo, dándose a la tarea de incendiarlo. Acto seguido, llegaron varios refuerzos de la policía quienes se pusieron a disparar contra los asistentes al mitin, muchos de los cuales se fueron a refugiar al edificio Carolino, en donde, desde las azoteas, respondieron a la agresión. Minutos después diversas unidades policiacas rodearon al edificio, al tiempo que varios francotiradores apostados en las azoteas de los edificios vecinos disparaban a los universitarios con armas de alto poder. Durante el peritaje que realizó la comisión nombrada para esclarecer los hechos, los técnicos en balística declararon que los proyectiles encontrados en la azotea del edificio Carolino eran de calibre 30 M1 y 30,06. Los impactos en los bordes de la azotea y en el suelo revelaron la utilización de balas expansivas durante la agresión.¹⁰⁹

Perdieron la vida los estudiantes Ignacio Enrique González Romano, Víctor Manuel Medina Cuevas, Alfonso Calderón Moreno y Norberto Sánchez Lara.

El gobernador acusó como responsable de los hechos a los comités de lucha de la UAP y a “los agitadores del Partido Comunista Mexicano” quienes, “infiltrados entre los estudiantes, intentan cambiar las estructuras políticas y sociales del país mediante actos violentos”. Y añadió: “Desde que asumí la gubernatura del estado, me he preocupado por tener un cuerpo policiaco de acuerdo a las necesidades actuales (*sic*), para lo cual se han utilizado tres millones de pesos para comprar armamento y vehículos, con el fin de que esta corporación esté preparada para mantener la paz pública”. Y, en tono amenazante, agregó: “La policía tiene órdenes permanentes de actuar con

energía para controlar actos vandálicos, así como para disparar en caso de intento de secuestro a cualquiera de sus miembros”.¹¹⁰

Al día siguiente de la masacre el ingeniero Octavio Medina, presidente de la Sociedad de Padres de Estudiantes Universitarios del Estado de Puebla, demandó la desaparición de poderes en el estado, exigiendo en particular la renuncia del gobernador Gonzalo Bautista O’Farril, “causante de este artero ataque contra los estudiantes indefensos”.¹¹¹

El H. Consejo Universitario, en sesión celebrada el 4 de mayo, acordó declarar a Bautista O’Farril “hijo indigno de la institución”—como señalamos al inicio, éste fue rector de nuestra universidad en los años de 1953-1954—, y solicitar públicamente su destitución.¹¹²

La mayoría de las universidades públicas del país se solidarizaron de inmediato con la Universidad Autónoma de Puebla, acordando realizar el 8 de mayo un paro nacional. Tal iniciativa recibió el apoyo no sólo de las organizaciones estudiantiles, sino incluso de las propias autoridades. En tal iniciativa participaron la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, las universidades de Morelos, de Sinaloa y de Guerrero. Acordaron sumarse a la misma también el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, el Movimiento Revolucionario del Magisterio, los comités de lucha de los Colegios de Ciencias y Humanidades, y decenas de organizaciones sociales más, quienes dieron a conocer su postura en un desplegado nacional el 3 de mayo.¹¹³

En ese mismo día, se efectuó en Puebla una impresionante manifestación de duelo popular por la muerte de los jóvenes asesinados. Alrededor de 20 mil personas formaron el cortejo fúnebre que acompañó a aquéllos al Panteón Francés.¹¹⁴

Frente a la masacre el gobierno federal reaccionó inicialmente con timidez, limitándose a nombrar una comisión que investigase los hechos, la cual estuvo integrada por el licenciado

Manuel Rosales Miranda, segundo subprocurador general de la república, y por Baraquel Ortiz Legaria, jefe de la policía judicial federal.¹¹⁵

Como era de preverse, la iniciativa de marras fue recibida con escepticismo, no sólo en Puebla sino en todo el país, dado la incapacidad que habían demostrado ese tipo de instancias en ocasiones anteriores, como en el caso del asesinato de Joel Arriaga.

El escritor Fernando Curiel, refiriéndose a tal iniciativa, comentaba en tono burlón:

Nuestros años setenta serán memorables, entre otras cosas, por la irrupción, asentamiento y eficacia de un nuevo género político: la investigación. Género cuyo fundamento narrativo se hospeda en la rotunda crítica del desenlace. Después de la presentación y del nudo, la Nada.¹¹⁶

Finalmente, como resultado de las manifestaciones estatales y nacionales de repudio a la masacre, el 8 de mayo el gobernador Bautista O'Farril es obligado a renunciar por el gobierno federal. Gobernó —o, mejor dicho, “desgobernó”— a Puebla durante un año y 24 días. Fue reemplazado por Guillermo Morales Blumenkron, quien ocupaba el cargo de senador. Sin duda su designación se debió a las relaciones cordiales que sostenía con el presidente Echeverría, quien durante su campaña electoral lo comisionó como representante suyo en los medios radiofónicos.¹¹⁷

Los principales círculos de la burguesía, como era de preverse, reaccionaron con indignación. A través del Consejo Coordinador Permanente de la Ciudadanía Poblana llamaron a organizar un cierre total de comercios, industrias y suspensión del transporte urbano —para el 10 de mayo— con el objeto de protestar por el “golpe que las autoridades federales dieron a la

democracia haciendo renunciar al gobernador interino y otorgando presencia e intervención a los grupos minoritarios manejados por el PCM”. En el desplegado público en que se anunció tal iniciativa, se declaró:

Es intolerable que la libertad y la soberanía de los estados se siga violando impunemente, ya que es una garantía por la que se luchó el siglo pasado y conquistó la Revolución Mexicana. Es inaceptable que se dé más importancia a la autonomía de un plantel que a la soberanía de un Estado. Que se acepten presiones de grupos minoritarios y se sofoque el sentir de las mayorías; que la opinión de los traidores a México prevalezca sobre quienes lo aman y defienden. Llamamos a la conciencia nacional para que se considere que los crímenes cometidos en Puebla a lo largo de 12 años, han tenido como finalidad destruir las instituciones y el principio de autoridad.¹¹⁸

Tales reacciones fueron inútiles: pues la correlación de fuerzas ya no les favorecía a tales sectores, quienes se vieron ante la necesidad de replegarse.

De esta forma, el movimiento universitario popular logró un triunfo que no sólo habría de cambiar la faz de la Universidad Autónoma de Puebla sino de la entidad en su conjunto.

Un factor que coadyuvó a desactivar la movilización programada para el 10 de mayo fue el anuncio —externado por el entonces jefe del Departamento de Prensa de la UAP, Alfonso Yáñez Delgado— de que una nueva víctima se agregaba a la lista de los cuatro jóvenes asesinados: se trataba de un joven al que también habían alcanzado los disparos de la balacera del Primero de Mayo, hallado en la esquina del antiguo edificio de la central de autobuses ADO.

Al parecer el muchacho era albañil, pero las autoridades universitarias y los comités de lucha decidieron presentarlo como

estudiante de la UAP, ¿por qué razones? Por un lado, con el propósito de obligar al gobierno a cederle una pensión a la familia de éste, y, por otro, con el objeto de desactivar el paro empresarial del 10 de mayo.

La estratagema —urdida por el citado Yáñez Delgado y por el rector Sergio Flores Suárez— resultó muy ingeniosa, ya que en efecto la noticia de que no eran cuatro sino cinco los estudiantes asesinados ejerció, como se esperaba, un gran impacto en la sociedad poblana, contribuyendo a que fracasara el paro empresarial.

Al programar tal evento para el 10 de mayo, sin duda la derecha poblana pretendía asestar un golpe político espectacular apoyándose en la relevancia simbólica de este día. Pero, como dice el refrán popular, “el tiro le salió por la culata”, gracias a la estratagema de referencia, en la que desempeñó un papel fundamental la madre del joven, cuyo dolor opacó totalmente la beligerancia de las organizaciones que promovían el cierre de comercios y de empresas.

Semanas después, esta mujer —de extracción sumamente humilde, por cierto— recibió por parte del gobierno de Morales Blumenkron la cantidad de 25 mil pesos por concepto de indemnización, cantidad que también recibieron las familias de las primeras cuatro víctimas de la matanza del Primero de Mayo.

¹ *Novedades de Puebla*, 17 de junio de 1972. De aquí en adelante le llamaremos sólo *Novedades*.

² Según el periodista Manuel Sánchez Pontón, a pocos días de haber sido nombrado gobernador interino Bautista O’Farril sostuvo un encuentro —que se llevó a cabo en el restaurante El Merendero el 28 de abril de 1972— con lo más granado de las “fuerzas vivas” en el que éstas le exigieron la adopción de medidas drásticas contra la universidad. En dicho evento, al que acudieron los principales líderes del sector privado, entre ellos Rodolfo Budib Name, Francisco Bernat Solsona y Gerardo Pellico Agüeros, el discurso principal corrió a cargo de Eligio Sánchez Larios, quien expresó: “La juventud engañada puede

hundirnos en la anarquía... Deber del gobierno es mantener y garantizar la paz, el orden y la seguridad a que la sociedad tiene derecho... Las medidas que en el cumplimiento de esta alta misión debe usted emplear —continuó Larios, refiriéndose obviamente a la necesidad de adoptar medidas drásticas contra la universidad— tienen por anticipado el aplauso, la aprobación y el apoyo de la comunidad poblana, que en este caso lo ratifica a usted solemnemente”. Vid. *La Opinión*, diario de la mañana, 17 de octubre de 1972 (de aquí en adelante le denominaremos a este diario simplemente *La Opinión*). Lo que se desprende de esa nota es que el gobernador en esos momentos decidió no comprometerse con tales grupos, no tanto por el hecho de que discrepase con los mismos, sino por considerar que aún no estaban dadas las condiciones para enfrentarse contra los universitarios.

³ *El Sol de Puebla*, 29 de abril de 1972.

⁴ *Novedades*, 21 de junio de 1972. Las cursivas son nuestras.

⁵ *El Sol de Puebla*, 22 de julio de 1972.

⁶ Yáñez Delgado, Alfonso, *UAP: reforma y violencia*, UAP, 1988, p. 41.

⁷ Revista *Siempre!*, núm. 998, 9 de agosto de 1972, pp. 18,19.

⁸ *El Día*, 22 de julio de 1972.

⁹ Yáñez Delgado, Alfonso, *op. cit.*, p. 40.

¹⁰ *El Día*, 22 de julio de 1972.

¹¹ *El Heraldo*, 23 de julio de 1972.

¹² *El Día*, 22 de julio de 1972.

¹³ *El Sol de Puebla*, 26 de julio de 1972.

¹⁴ *La Voz de Puebla*, 26 de julio de 1972.

¹⁵ El primero de agosto de 1972 comparecieron ante la Comisión el presidente, el secretario y el tesorero de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material, respectivamente, Abelardo Sánchez Gutiérrez, Eligio Sánchez Larios y José Abaroa (*El Heraldo*, 2 de agosto de 1972). El 3 de agosto compareció Manuel Díaz Cid, presidente del Instituto de Investigaciones “Motolinía”, y uno de los promotores del FUA (*Novedades*, 4 de agosto de 1972). El 10 de agosto compareció el líder de Juventud Nueva, Enrique Solana Sentíes (*El Heraldo*, 11 de agosto de 1972).

¹⁶ Yáñez Delgado, Alfonso, *op. cit.*, p. 62.

¹⁷ *Atisbos*, 28 de julio de 1972.

¹⁸ *El Sol de Puebla*, 30 de agosto de 1972.

¹⁹ *El Heraldo*, 27 de septiembre de 1972.

²⁰ Tal rumor fue descrito de forma muy plástica por los dirigentes del Frente Estudiantil Socialista, Irineo Sánchez y Alfredo Guevara, quienes, comentando el ambiente que imperaba en Puebla durante los días que precedieron al asesinato de Joel Arriaga Navarro, señalaban: “Si tomamos en cuenta que las pintas y pegas sobre las amenazas de muerte se hicieron en una extensión de

más de doce kilómetros sobre las avenidas Defensores de la República, bulevar San Francisco y en las principales calles de la ciudad, se deducirá que esto requirió una gran movilización que tuvo que ser observada por la policía... Ahora bien, o se les protegía abiertamente (a los autores materiales del crimen) por órdenes de algunos funcionarios estatales o bien elementos policíacos participaban en dichas actividades, pues según testimonios recogidos por nosotros, las personas que hacían las pegas y pintas no tenían la apariencia de estudiantes..." Y agregaban, no sin ironía: "Si no se aclara el crimen, ya se aclaró". Citado por Yáñez Delgado, Alfonso, *op. cit.*, p. 65.

²¹ *El Sol de Puebla*, 11 de octubre de 1972.

²² *La Opinión*, 26 de julio de 1972.

²³ *Revista de la Universidad Autónoma de Puebla*, vol. I., núms. 2, 3 y 4. Puebla, marzo de 1973. Las cursivas son nuestras.

²⁴ *La Opinión*, 21 de septiembre de 1972.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.* Las cursivas son nuestras.

²⁸ Se trataba de un grupo de jóvenes del Comité Juvenil Mariano. *La Voz de Puebla*, 13 de octubre de 1972.

²⁹ *Excélsior*, 17 de octubre de 1972.

³⁰ *El Sol de Puebla*, 13 de octubre de 1972.

³¹ *La Opinión*, 21 de septiembre de 1972.

³² *El Heraldo*, 30 de septiembre de 1972.

³³ *Excélsior*, 5 de octubre de 1972.

³⁴ *El Heraldo*, 15 de octubre de 1972.

³⁵ Peral, Miguel Ángel, *Diccionario de Historia del Estado de Puebla*, Editorial Peral, México, 1971, pp. 117, 118, 155.

³⁶ *El Sol de Puebla*, 15 de octubre de 1972.

³⁷ *La Opinión*, 17 de octubre de 1972.

³⁸ *El Sol de Puebla*, 15 de octubre de 1972.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *El Sol de Puebla*, 18 de octubre de 1972.

⁴² *La Opinión*, 18 de octubre de 1972.

⁴³ *El Heraldo*, 19 de octubre de 1972.

⁴⁴ Yáñez Delgado, Alfonso, *UAP: reforma y violencia*, *op. cit.*, pp. 109, 110.

⁴⁵ *La Opinión*, 17 de octubre de 1972.

⁴⁶ *El Heraldo*, 19 de octubre de 1972.

⁴⁷ *Ibid.* Las cursivas son nuestras.

⁴⁸ Citado por Pansters, Will, *op. cit.*, p. 302.

⁴⁹ *Excélsior*, 9 de noviembre de 1972. Las cursivas son nuestras.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Eco, Umberto, “El fascismo eterno”, en *Cinco escritos morales*, Lumen, España, 1997, pp. 52, 53.

⁵² *Excélsior*, 25 de octubre de 1972.

⁵³ *Ibid.* Las cursivas son nuestras.

⁵⁴ *Excélsior*, 27 de octubre de 1972.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *El Sol de Puebla*, 27 de octubre de 1972.

⁵⁷ *Novedades*, 28 de octubre de 1972.

⁵⁸ *El Heraldo*, 29 de octubre de 1972.

⁵⁹ *La Opinión*, 31 de octubre de 1972.

⁶⁰ *El Heraldo*, 8 de noviembre de 1972.

⁶¹ Acta de la sesión del Consejo Universitario del 9 de noviembre de 1972. *La Opinión*, 9 de noviembre de 1972.

⁶² *La Opinión*, 11 de noviembre de 1972.

⁶³ Véase, por ejemplo, el desplegado del comité coordinador de la escuela de Arquitectura, en el que se impugnan las posturas del Bloque de Ciudad Universitaria y de la Federación Estudiantil Universitaria. *El Heraldo*, 5 de noviembre de 1972.

⁶⁴ *El Heraldo*, 13 de noviembre de 1972.

⁶⁵ *El Sol de Puebla*, 15 de noviembre de 1972.

⁶⁶ *Novedades*, 15 de noviembre de 1972.

⁶⁷ *Novedades*, 17 de noviembre de 1972.

⁶⁸ Yáñez Delgado, Alfonso, *UAP: reforma y violencia*, *op. cit.*, p. 122.

⁶⁹ *El Heraldo*, 17 de noviembre de 1972.

⁷⁰ *La Opinión*, 17 de noviembre de 1972.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Buendía, Manuel, *Pensamiento y acción de la derecha poblana*, Cuadernos del Archivo Histórico Universitario, BUAP-Gobierno del Estado de Puebla, Puebla, 2000, p. 71.

⁷³ Yáñez Delgado, Alfonso, *UAP: reforma y violencia*, *op. cit.*, p. 128.

⁷⁴ *Novedades*, 18 de noviembre de 1972.

⁷⁵ Yáñez Delgado, Alfonso, *UAP: reforma y violencia*, *op. cit.*, p. 130.

⁷⁶ *La Opinión*, 24 de noviembre de 1972.

⁷⁷ *La Opinión*, 1° de diciembre de 1972.

⁷⁸ *La Opinión*, 26 de noviembre de 1972.

⁷⁹ *Excélsior*, 28 de noviembre de 1972.

⁸⁰ Vélez Pliego, Alfonso, *op. cit.*, p. 79.

⁸¹ *El Heraldo*, 22 de diciembre de 1972.

⁸² *Excélsior*, 22 de diciembre de 1972.

⁸³ Yáñez Delgado, Alfonso, *UAP: reforma y violencia*, *op. cit.*, p. 140.

⁸⁴ Así, el 22 de diciembre, el jefe de la policía judicial del estado, Felipe Flores Narro, expresó “estar optimista” por el curso que estaban tomando las investigaciones. (Yañez Delgado, Alfonso, *Ibid*, p. 141) Después, las autoridades reiteraron hasta el cansancio que se haría justicia, y, finalmente, esperaron que el hecho se enfriara entre la opinión pública.

⁸⁵ *El Heraldo*, 23 de diciembre de 1972.

⁸⁶ *Ibid*.

⁸⁷ Canetti, Elías, *Masa y poder*, Muchnik Editores, España, 1977, p. 436. Las cursivas son nuestras.

⁸⁸ Cárdenas, Cuauhtémoc, “El asesinato de Cabrera”, en *Siempre!*, 3 de enero de 1973, reproducido en *Tiempo Universitario*, Año 3, núm. 20, 7 de diciembre de 2000.

⁸⁹ Revista *Siempre!*, núm. 1019, 3 de enero de 1973, p. 25.

⁹⁰ Revista *Siempre!*, núm. 1025, 14 de febrero de 1973, pp. 30, 31.

⁹¹ *El Heraldo*, 4 de enero de 1973.

⁹² *La Opinión*, 9 de enero de 1973.

⁹³ *El Sol de Puebla*, 18 de enero de 1973.

⁹⁴ *La Opinión*, 25 de enero de 1973.

⁹⁵ *El Sol de Puebla*, 31 de enero de 1973.

⁹⁶ *La Opinión*, 2 de febrero de 1973.

⁹⁷ *La Opinión*, 1 de febrero de 1973.

⁹⁸ *El Sol de Puebla*, 1 de febrero de 1973.

⁹⁹ *La Opinión*, 2 de febrero de 1973.

¹⁰⁰ García Cantú, Gastón, *Universidad y antiuniversidad*, Cuadernos de Joaquín Mortiz, México, 1973, p. 10.

¹⁰¹ *La Opinión*, 3 de febrero de 1973.

¹⁰² Vélez Pliego, Alfonso, *op. cit.*, p. 81.

¹⁰³ *La Opinión*, 14 de marzo de 1973.

¹⁰⁴ *La Voz de Puebla*, 16 de marzo de 1973.

¹⁰⁵ *La Opinión*, 17 de marzo de 1973.

¹⁰⁶ *El Heraldo*, 22 de marzo de 1973.

¹⁰⁷ *La Opinión*, 21 de marzo de 1973.

¹⁰⁸ Louvier, J; Manuel, Díaz Cid y J.A., Arrubarena, *Autonomía universitaria, Génesis de la UPAEP*, Instituto de Investigaciones Humanísticas de la UPAEP, Puebla, 1991, p. 83.

¹⁰⁹ Garmendia, Arturo (comp.), *Los sucesos del Primero de Mayo en Puebla*, sel. y pról. de... UAP, 1974, pp. 19, 20.

¹¹⁰ *Novedades*, 3 de mayo de 1973.

¹¹¹ *Excélsior*, 2 de mayo de 1973.

¹¹² *El Día*, 7 de mayo de 1973.

¹¹³ *Excélsior*, 3 de mayo de 1973.

¹¹⁴ *La Opinión*, 4 de mayo de 1973.

¹¹⁵ *Novedades*, 5 de mayo de 1973.

¹¹⁶ “La matanza del Primero de Mayo”, en *Siempre!*, La Cultura en México, núm. 1039, 23 de mayo de 1973.

¹¹⁷ Guillermo Morales Blumenkron era concesionario radiofónico y locutor en la XEQ Radio. De su familia han surgido varios miembros importantes de las élites políticas de Puebla, e incluso del país. Así, por ejemplo, su hermano Daniel sostuvo una relación muy estrecha con Maximino Ávila Camacho, asesorando a éste en su campaña electoral en su calidad de experto en medios radiofónicos. Fue uno de los fundadores del diario *El Herald*, antecesor de *El Herald de México en Puebla*. Concepción Morales Blumenkron, hermana de los anteriores, fue madre de Fernando Solana Morales y de Luis Javier Solana Morales. El primero ha ocupado varios cargos importantes a nivel nacional, entre ellos director del Banco Nacional de México y titular de la Secretaría de Educación Pública. El segundo fue director de Comunicación Social en el gobierno de López Portillo. Al arribar su tío Guillermo a la gubernatura de Puebla, fungió como enlace entre el gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Puebla.

¹¹⁸ *El Sol de Puebla*, 10 de mayo de 1973.

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES PRELIMINARES

El movimiento democrático universitario le abre paso a la modernización de la universidad y al respeto a la autonomía de la institución

El movimiento universitario, como señalamos en líneas anteriores, se propuso desde su génesis la transformación de la UAP en una institución a la altura de los signos de los tiempos. Esto implicó una doble tarea, enfrentada en un solo proceso: por un lado, erradicar el control y la influencia que ejercían las fuerzas reaccionarias sobre la universidad, y, por otro, impulsar iniciativas tendientes a la modernización de la misma.

Difícilmente el movimiento universitario hubiese podido hacer frente a ese reto con sus propias fuerzas y con sus propios recursos; necesitaba indefectiblemente el respaldo del movimiento popular.

Como lo dijo el estudiante Miguel Ángel Burgos en su discurso pronunciado en la toma de posesión del químico Sergio Flores Suárez como rector provisional de la UAP: de no haber sido por el respaldo de toda una constelación de capas y sectores populares, el movimiento universitario hubiese sido aplastado de manera inmisericorde.¹

Si bien desde la década de los sesenta —en particular en 1964, cuando estalla el movimiento de los lecheros— se había presentado una sólida alianza entre el movimiento de reforma con los sectores populares, en el movimiento de 1972-1973 la misma se consolida de manera insospechable. A nivel nacional, en ninguna entidad federativa —salvo, tal vez, San Luis Potosí,

en el movimiento navista— no se presentó una unidad tan estrecha entre las clases populares y los universitarios.

Ni la burguesía poblana ni los diversos grupos de la burocracia gubernamental se propusieron el objetivo de modernizar la universidad. Fueron los universitarios —reitero, en alianza con las clases populares— quienes se propusieron tal objetivo. Gracias a los movimientos librados por éstos, por fin la Universidad Autónoma de Puebla dejó de ser un botín de las clases dominantes y un espacio controlado por los gobernantes en turno, quienes solían sostener vínculos con determinadas fuerzas o corrientes al interior de la universidad, con el objeto de asegurar el control de la misma. Esta situación fue uno de los factores que sobredeterminaron no pocas de las principales tensiones que vivió la UAP en la época que comentamos. La institución solía convertirse en una caja de resonancia de los conflictos que se desarrollaban al interior del bloque en el poder, principalmente al interior del PRI. Si bien no pocas corrientes de este partido que actuaban en los movimientos que estallaron en la universidad en los sesenta y los setenta estaban constituidas por universitarios idealistas, convencidos de la necesidad de reformar la institución, no menos cierto es que también había núcleos que no perseguían otro objetivo que el de utilizar a la universidad como trampolín político, ora con el fin de arrancarle determinadas prebendas o canonjías a los gobernadores, ora con el propósito de constituirse en una fuerza al interior de la institución que estuviese en condiciones, tarde o temprano, de arribar al poder político. Sería cuestión nada más de revisar la nómina de funcionarios gubernamentales de la década de los sesenta y los setenta para percatarnos de la situación de referencia: decenas de ellos ascendieron a la pirámide del poder gracias a sus “méritos” como dirigentes o funcionarios de la universidad.

Aunque la problemática a que aludimos se remonta a los tiempos de la institución como Colegio del Estado, se agudizó en las décadas de los sesenta y los setenta, debido a la intromisión descarada de las autoridades en la vida interna de la universidad, sobre todo a través del respaldo y sostenimiento de grupos y corrientes vinculados directamente con el gobierno. Esto solía traducirse en conflictos al interior de la UAP. Si un grupo determinado no veía satisfechas sus expectativas, se las ingeniaba para descargar sus resentimientos, y ¿qué mejor forma de hacerlo que generando conflictos o integrándose a los torbellinos que sacudían a la universidad en esa época?

La mayoría de los movimientos universitarios que estallaron en las décadas de los sesenta y los setenta en la UAP fueron en no poca medida un resultado del fenómeno a que hacemos alusión. Ciertamente: la causa fundamental de dichos movimientos hundía sus raíces en fenómenos sociales más complejos, como el atraso en que se encontraba la universidad, y los métodos despóticos del cacicazgo avilacamachista, empero “la chispa” que los encendía generalmente era producto de las pugnas provocadas por la intromisión del gobierno en la vida interna de la universidad, que, aunadas a las fricciones que se presentaban al interior del partido en el poder, terminaban por echarle leña a la hoguera de las tensiones que vivía la institución.

Gracias al movimiento democrático popular se crean en Puebla condiciones para el respeto a las libertades políticas

En lo fundamental el movimiento democrático-popular de 1972-1973 estuvo constituido por sectores y capas sociales comúnmente denominados “marginales”, a excepción de los universitarios, provenientes sobre todo de las clases medias.

A diferencia de los movimientos que le precedieron —el de 1961, el de 1964, y el de 1968— el movimiento democrático popular de 1972-1973 no enderezó sus aristas en determinadas

reivindicaciones económicas y sociales, sino las concentró principalmente en la defensa de las libertades políticas y en la lucha contra un gobierno que se caracterizaba por el trato policiaco hacia los problemas sociales.

Si bien es cierto que en esa etapa la universidad desempeña un papel de catalizador del malestar popular, no menos verdad es que los focos de irradiación de tal malestar eran múltiples, ya que brotan desde todos aquellos poros de la sociedad civil afectados por la crisis económica, el autoritarismo e intolerancia del gobierno y de la derecha poblana: numerosos contingentes de colonos, obreros despedidos, campesinos sin tierra y grandes grupos urbanos que no encuentran acomodo en el mercado de trabajo, como los vendedores ambulantes.

En otros términos, el movimiento estalla no porque lo hayan provocado la agitación estudiantil o las turbulencias que cimbraban a la universidad, sino porque se produce una intempestiva imbricación de diversos y abigarrados focos de tensión social. “Las luchas de los trabajadores por sus propios problemas en particular” que mencionaba el estudiante Burgos eran los hilos que conformaban la urdimbre del movimiento de masas. Sin embargo, estrictamente hablando, éste no estuvo constituido por trabajadores —si por esto entendemos a la clase obrera— sino más bien por colonos, campesinos, ambulantes, y otros sectores urbanos. El movimiento obrero, salvo excepciones, no participó. Por el contrario, las centrales oficialistas respaldaron las acciones represivas de Bautista O’Farril.

Cierto es que a medida que se desarrollaba el movimiento, se incorporaban algunos núcleos y contingentes de la clase obrera —como en los casos de los trabajadores de la Tendencia Democrática del SUTERM y del Sindicato Independiente de Volkswagen— empero nunca deja de ser marginal su participación.

En el I Congreso Regional del PCM en Puebla y Tlaxcala se señalaba: “El movimiento democrático... se ha nutrido principalmente de campesinos y de capas medias y pobres de la ciudad, así como de universitarios, estudiantes principalmente. El proletariado ha tenido una presencia mínima”.²

En un documento intitulado “Relación entre la UAP y el movimiento popular” —elaborado por el seccional universitario del PCM— se indicaba:

El movimiento popular vinculado al movimiento universitario es constituido principalmente por: colonos, obreros despedidos, ambulantes, campesinos, etc., que ante la desesperanza por lograr un pedazo de tierra asumían una franca posición de rebeldía ante las organizaciones oficiales, problemas de gente accidentada que reclamaba indemnización, etc... Mientras tanto, el movimiento obrero y campesino “organizado”, de filiación oficialista, se mantenía al margen de cualquier vinculación con el movimiento universitario, sin que esto quiera decir negar (*sic*) que algunas organizaciones de obreros en circunstancias muy especiales hayan recurrido al apoyo del movimiento popular nucleado en torno a las organizaciones de universitarios; sin embargo, esto fue raquítico y en la mayoría de las ocasiones sin ningún compromiso por parte de las organizaciones obreras para con el movimiento popular y sus reivindicaciones. Un ejemplo ilustrativo de esto es la lucha desarrollada por los trabajadores de Volkswagen por independizarse de la CTM y formar un sindicato independiente, objetivo en el cual se llamó a la participación del movimiento universitario, pero una vez logrado se rompió la vinculación con el movimiento y sólo se mantuvieron algunas relaciones de tipo personal, que nada significaban para el movimiento que se estaba gestando.³

No obstante, aun con el estilo descuidado de este documento, sus redactores decían la verdad: ciertamente el movimiento popular que surgió al calor del movimiento de Reforma Universitaria estuvo constituido por clases marginales. No participaron los “sectores ilustrados de la burguesía” o determinados núcleos de la burocracia gubernamental, sino grupos que según la idea marxista “no poseen una visión de la totalidad social”: la clase obrera, llamada a encabezar el cambio social debido a su mayor grado de visión política, por el lugar que ocupa en el proceso de producción.

En lo fundamental, pues, el movimiento democrático-popular de 1972 está constituido por sectores y capas sociales comúnmente denominados “marginales”, a excepción de los universitarios, provenientes sobre todo de las clases medias y medias bajas. Los ambulantes se integran con sus propias demandas, lo mismo los campesinos, los colonos y los desplazados de la ciudad. Como decía Burgos, cada contingente enarbolaba “sus propios problemas en particular”. Los campesinos que se incorporaban al movimiento no lo hacían solo contra “la explotación en general”, sino también por su necesidad expresa de lograr un pedazo de tierra. Los colonos, los ambulantes y los otros grupos urbanos, lo hacían enarbolando sus propias reivindicaciones. Los reducidos contingentes de trabajadores industriales, del mismo modo, tenían presentes también sus propios problemas “particulares”.

Pero, el hecho de que el movimiento popular estuviese constituido por numerosos contingentes sociales con sus propios problemas “en particular”, de ningún modo significa que aquél fuese una simple suma o conjunción abigarrada de diversos grupos sociales en lucha. No, independientemente de sus diversos problemas específicos, existían en realidad objetivos comunes que articulaban y cohesionaban a los diversos contingentes, entre ellos —si duda el principal— *la importancia*

de quebrar y doblegar la alianza del gobierno estatal con las fuerzas más retardatarias de la entidad, de modo tal que los más diversos sectores y capas de la sociedad civil estuviesen en posibilidades de gestionar sus problemas específicos sin tropezar con la represión policíaca.

En otros términos: el movimiento popular no era solo un movimiento económico-reivindicativo, sino también un movimiento político. Si bien se nutría de múltiples problemas sociales, sus aristas iban enderezadas contra una superestructura política que asfixiaba a la sociedad civil, contra una sociedad política autoritaria y despótica.

El movimiento universitario, reiteramos, no fue sino el catalizador del malestar social que imperaba en Puebla en esos años.

Como indicamos en líneas anteriores, es el mismo gobernador Bautista O'Farril quien encabeza la ofensiva contra la UAP y contra el movimiento popular. Esto no era casual ya que en esa época —y en general durante el periodo del cacicazgo avilacamachista— el gobierno del estado era un aparato al servicio de la burguesía poblana, en particular de sus círculos más beligerantes.⁴ Por ello la caída de O'Farril representó para éstos algo más que una derrota: constituyó un golpe implacable porque se les escapaba, nada más y nada menos, que el control del aparato estatal.

En efecto, durante ese lapso el gobierno del estado se había convertido abiertamente en el eje articulador de la ofensiva reaccionaria, desplegando al respecto —sin titubeo alguno— todo el peso del factor coerción. En esos momentos no nos encontramos ante un estado “por encima de las clases”, ante un “estado desprendido del complejo de intereses de la sociedad civil”, ante un estado constituido en la “salvaguardia del interés general”, y por ende distante de las pugnas y enfrentamientos entre las clases. Por el contrario, nos encontramos

ante un estado que no sólo “toma partido” por una de esas clases, que no sólo desempeña un papel decisivo en la arremetida reaccionaria contra el movimiento democrático popular, sino que además encabeza a todas aquellas corrientes y fracciones de la clase dominante dispuestas a golpear de manera contundente a las fuerzas progresistas.⁵ En ese sentido, pues, en esa fase no hay lugar para dudas: el aparato estatal es una “máquina utilizada por la clase en el poder para sojuzgar férreamente a las clases subalternas”. En consecuencia, en esa etapa no está presente una de las características principales —no discutiremos por el momento hasta qué punto ello es “real” o “formal”— del régimen político mexicano: El Estado nacional, o sea, el Estado que procura confundirse con la nación y no con uno o algunos de los grupos de la clase dominante, el Estado que busca desempeñar un papel de “tutelaje”, el Estado que se yergue desde el Olimpo de su “autonomía” con el objeto de “equilibrar”, “neutralizar” o “armonizar” los enfrentamientos y pugnas entre las clases. Más que un triunfo contra alguna o algunas de las fracciones más reaccionarias de la burguesía poblana, el movimiento democrático-popular se propone arrancarle a las mismas el control directo del aparato estatal con el objeto de que el gobierno del estado se vea obligado a actuar como un gobierno representativo, no identificado de manera directa y unilateral con alguna o algunas de las capas o grupos de las clases dominantes. Es decir, orilla al gobierno estatal a asumir una auténtica autonomía relativa respecto a la sociedad civil, impeliéndole a introducir métodos y mecanismos más “civilizados” en su relación con los ciudadanos, a poner más énfasis en el sector consenso y a valorar en su debida dimensión la importancia del factor “hegemonía”, en detrimento del factor “dictadura”.

En síntesis, el movimiento democrático popular se fija la meta de obligar al gobierno del estado a asumir su función de

instancia representativa de toda la población, y no de tal o cual sector social. Es el movimiento democrático-popular, además, el que obliga al gobierno estatal a asumir una de sus funciones más relevantes: el de ser la “salvaguardia” del derecho inalienable de todos los ciudadanos a pensar libremente, derecho que acompaña la génesis del estado moderno. Es el movimiento quien obliga al estado a introducir reformas encaminadas, reitero, a modernizar la vida política en la entidad, exigiendo, en particular, un tratamiento político —en lugar de un trato policiaco— a los conflictos sociales.

Desde luego, por libertad política el movimiento no entiende sólo —como a veces se interpreta— el respeto a la libre actuación de las organizaciones políticas, sino también el respeto a la libertad de pensamiento. No es por ello casual que en un desplegado publicado por el H. Consejo Universitario de la UAP —a pocas semanas del asesinato de Joel Arriaga Navarro— se plantease lo siguiente:

Nunca como hoy, nos mantenemos tan firmes de espíritu para rechazar los embates de los enemigos del pensamiento. Es cierto, la universidad se ve amenazada. Pero esa amenaza se abate no sólo sobre nuestra Casa de Estudios, sino sobre todas las universidades del país en donde se cobija el pensamiento y la acción de miles de jóvenes que aspiran a un futuro digno; pero también es cierto que con crímenes como el de Joel Arriaga se ven amenazadas todas las libertades democráticas, se ve amenazado el derecho a pensar y a disentir; en fin, se ve amenazado el PENSAMIENTO LIBRE. Esto, no es retórico, es así porque ese pensamiento libre no es abstracto, sino que se sustenta y desarrolla en un clima social libre. Pero ese clima social libre y democrático se ensombrece, porque hoy pensar y disentir, puede significar perder la vida y vidas tan valiosas como la del arquitecto Joel Arriaga, que

son la premonición de un mundo nuevo sin crímenes y sin represión. El arquitecto Joel Arriaga ha muerto y su muerte duele a la comunidad universitaria, duele a los hombres de bien, duele a todos aquellos que no comprenden cómo con la insolencia del crimen se pueden acallar las voces libres.⁶

No deja de causar estupor que en las postrimerías del siglo xx se enarbolase en Puebla una demanda de ese tipo: la exigencia de pensamiento libre.

De ahí —y ésta es una de las tesis principales que planteamos en este trabajo— que el movimiento desempeñe un papel de vital relevancia en la modernización política de Puebla, hecho que no se ha reconocido adecuadamente.

Lo curioso del caso es que tal exigencia no la enarbolan los sectores ilustrados de la burguesía o de la burocracia gubernamental —como sucedió en la mayoría de las entidades federativas— sino los universitarios y las clases populares. Esto nos da una idea del grado de atraso en que se encontraban las clases dirigentes poblanas en ese tiempo, quienes lejos de impulsar el progreso, eran un factor que impedía el desenvolvimiento del mismo.

En Puebla, como señalamos en capítulos anteriores, la mayoría de las organizaciones empresariales, clubes de servicio, asociaciones cívicas, culturales y religiosas se volcaron como un solo hombre en defensa del *status quo* “amenazado” por el movimiento democrático-popular, sin comprender que las reivindicaciones levantadas por éste no pretendían otra cosa que la modernización política y social de la entidad.

Efectivamente, hubo segmentos, núcleos y determinados grupos de la burguesía poblana que no sancionaron la política represiva del gobierno, pero no menos verdad es que los mismos constituían una minoría insignificante.

Es el movimiento democrático-popular, reiteramos, el que introduce las reformas que necesitaba el estado de Puebla para convertirse en una entidad moderna. Mientras que a nivel nacional por esos años el gobierno federal impulsaba una reforma democrática desde arriba, desde el poder, en Puebla son las clases subalternas las que se hacen cargo de dicho proyecto. Desde luego éstas por sí solas no habrían estado en condiciones para salir adelante, de no haber sido por la intervención del gobierno federal, quien, como ya lo señalamos, sostenía fuertes divergencias con la administración de Bautista O'Farril. Es aquí donde se entroncan las aspiraciones reformistas de las masas populares y de los universitarios poblanos con el proyecto de “apertura democrática” del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, factor que le permitió sobrevivir al movimiento universitario popular. De no ser por las contradicciones que surgen en esa etapa entre la federación y el gobierno del estado, seguramente aquél habría sido aplastado de manera avasalladora. Manuel Aguilar Mora escribía al respecto, no sin lucidez:

Esta posición troglodita de la oligarquía poblana, expresión de una situación social específica, explica por qué, en el conflicto con los estudiantes, el gobierno federal no podía dejar solos a estos últimos. Esta coyuntura permitió al movimiento estudiantil superar la terrible reacción que provocó en su contra. *Sin esta protección coyuntural la posibilidad de que el movimiento estudiantil saliera de su ensimismamiento se hubiera evaporado. Para poder ser el detonador potente de la movilización popular, la UAP necesitaba tiempo. Las pugnas interburguesas se lo dieron.*⁷

Cierto es que “las pugnas interburguesas” tuvieron un papel fundamental en el triunfo del movimiento universitario popular contra la administración de Bautista O’Farril. Sin embargo, tales pugnas, por sí mismas, no llevaron a la caída de éste: fue la movilización popular el factor decisivo que condujo a esta situación. Tal como observa Arturo Garmendia:

La agudización de la pugna interburguesa, motivada en gran parte por la coexistencia de la decadencia económica de la burguesía local con los intentos de modernización industrial del nuevo régimen presidencial, dio lugar a una coyuntura en la cual la acción decidida, constante y organizada de la Universidad incidió favorablemente. La caída de O’Farril, al contrario de las remociones aperturistas-premiaciones-aperturistas de otros altos funcionarios en conflicto (Cf. El caso de Martínez Domínguez), *fue un triunfo de la movilización popular, que descabezó a la facción burguesa más acerbamente enemiga de la Universidad Autónoma de Puebla.*⁸

Si realmente el gobierno federal estaba dispuesto a frenar la barbarie debió haber intervenido pronto, sin esperar a que la ofensiva de la derecha poblana generase tantos muertos. Tal como apunta Carlos Monsiváis:

¿Cuál podría ser una revisión excesivamente sintética y rápida de algunas de las “lecciones” (para usar el lenguaje ejemplarizante de Bautista O’Farril) de los hechos dolorosos de Puebla? Una primera, que sin esta represión extrema difícilmente se hubiese obtenido la reacción unánime de lo que se conoce como opinión pública. Se requirió un año de continua y salvaje persecución de los universitarios por parte de la iniciativa privada, el clero y las autoridades poblanas para que brotase la respuesta nacional de un sector.⁹

Ciertamente, a diferencia de lo que sucedió en otros estados del país, en los que el presidente Luis Echeverría influyó de manera decisiva para el derrocamiento de aquellas autoridades que no encajaban en su proyecto reformista, en Puebla fueron los universitarios y las clases populares quienes propiciaron una correlación de fuerzas tal que condujo al establecimiento de la reforma política. Subrayamos esto porque no pocos analistas e investigadores sostienen que fue gracias a la intervención del gobierno federal que el movimiento universitario popular logró salir adelante, lo cual encierra una verdad a medias: en efecto, reiteramos, las pugnas entre la federación y el gobierno de O'Farril jugaron un papel fundamental en la caída de éste, pero no menos cierto es que a esto coadyuvó de manera fundamental la movilización popular. Por ello sería más correcto decir que fue el “entronque” entre el proyecto aperturista de Echeverría y entre las demandas del movimiento universitario popular lo que llevó al triunfo de éste.

Esta aclaración es importante para salirle al paso a la versión que propalaron algunos ideólogos del PRI, quienes no tardaron en calificar el derrocamiento de O'Farril como una iniciativa que obedeció a la “política de equilibrio político y social del gobierno federal”.

Así, por ejemplo, véase cómo Jesús Reyes Heróles —el entonces presidente nacional de dicho partido— caracterizó el desenlace de la crisis política de Puebla:

Se evitó caer en una trampa grave: la de hacer el juego de quienes intentan plantear en Puebla una bipolarización política, una lucha entre dos extremos, un maniqueísmo que, a no dudarlo, sólo puede beneficiar a quienes pretenden invertir el sentido de la Revolución; esto es llevarnos a la contrarrevolución. De un lado, los de todo y de golpe, de otro lado, los de nada y nunca, que todo permanezca igual. Pues bien, este

planteamiento elemental, rudimentario, que únicamente podía favorecer a los contrarrevolucionarios y a los partidarios de volver atrás, fue eludido.¹⁰

Pronunció esas palabras en el acto de toma de protesta como gobernador de Alfredo Toxqui Fernández de Lara, en febrero de 1975.

Lo que no dijo el autor de *El liberalismo mexicano* y expresidente del PRI fue que, de no haber sido por la sangre derramada, el gobierno federal se hubiese limitado a emitir reconveniones al gobierno de Bautista O'Farril.

Sin temor a exagerar, pues, podríamos sostener que el movimiento universitario popular de 1972-1973 constituye un hito decisivo en la vida moderna del estado de Puebla, ya que permitió el establecimiento de condiciones que permitieron, en años posteriores, el desarrollo de la reforma política, y en general la modernización política y social de la entidad.

Algunos historiadores opinan que dicho movimiento es el más importante suceso en la vida política de Puebla, después del arribo al poder —en 1936— de Maximino Ávila Camacho. Así, por ejemplo, Leonardo Lomelí Vanegas observa:

El conflicto estudiantil de 1973 y la caída del gobernador Gonzalo Bautista O'Farril marcaron un segundo parteaguas en la historia política de Puebla. El primero había sido el arribo a la gubernatura del estado del general Maximino Ávila Camacho, quien había logrado consolidar un grupo político y un estilo de gobierno que con sus variantes se mantuvo durante casi 35 años. Aunque después de 1973 el PRI siguió en el poder, e incluso sería difícil afirmar que se produjo un cambio radical en el personal político que tuvo a su cargo el gobierno del estado, es posible asegurar que las relaciones políticas,

económicas y sociales entraron en un intenso proceso de reestructuración.¹¹

A nuestro parecer no es correcta tal interpretación, pues pensamos que el suceso político más importante de la vida política moderna de la entidad después de la llegada de Maximino Ávila Camacho al poder fue el movimiento estudiantil de 1961, el cual, como indicamos en páginas anteriores, propició que Puebla dejase de ser la sociedad levítica construida por el cacicazgo avilacamachista, para convertirse en una sociedad más moderna. Desde luego esto requirió de un largo proceso de luchas, que culminó en los años de 1972-1973.

En ese sentido, pues, más que afirmar que fue el movimiento que tuvo lugar en estos años el que transformó a Puebla, sería más correcto decir que fueron las luchas emprendidas en 1961 y 1972-1973 las que lograron tal objetivo.

En su libro *Las normas del poder*, el conocido líder priísta José Alarcón Hernández señala: “Entre el primero de febrero de 1963 y el primero de febrero de 1975, en sólo doce años, el estado había tenido seis gobernadores”. Y se pregunta: “¿Los acontecimientos políticos de este periodo, de esta docena trágica, explican la situación en que se encuentra hasta estos momentos y a finales del milenio la entidad poblana?”¹²

Sin duda la respuesta es sí, por supuesto que los acontecimientos de dicho periodo explican la situación en que se encuentra el estado de Puebla en nuestros días. La entidad dejó de ser, a partir de entonces, el reino de la intolerancia y del oscurantismo fomentado por las fuerzas reaccionarias.

Los cambios en el gobierno estatal

En una primera etapa, que podríamos caracterizar como “preventiva”, el gobierno estatal se ve ante la necesidad de poner en marcha —ante la presión del movimiento popular—

una política conciliatoria, una política orientada en lo fundamental a evitar que la situación se le escape de control. Nos encontramos ante un gobierno que, ante las vicisitudes de la lucha de clases, se ve obligado a actuar de manera prudente y cautelosa. En ese sentido, más que esforzarse por elaborar un nuevo discurso tendiente a reconquistar el consenso de la sociedad civil —principalmente de aquellas capas sociales que han sufrido en carne propia la intolerancia gubernamental— a partir de una visión más compleja de la hegemonía político-ideológica —que le permita asumir sobre nuevas bases la dirección intelectual y moral de la sociedad—, y más que esforzarse, en consecuencia, por establecer nuevas reglas del juego y normas de conducta en correspondencia con este discurso, el gobierno estatal busca más bien en esos momentos recuperar su capacidad de maniobra, y de ensanchar sus márgenes de acción política.

Esto quedó muy claro en el discurso que pronunció el gobernador interino, Guillermo Morales Blumenkron, en su toma de posesión:

Soy ajeno al dogmatismo y a la inflexibilidad de espíritu. Para progresar, requerimos de ser conformes, de actuar siempre con acuerdo a las convicciones, pero debemos de estar siempre dispuestos al diálogo constructivo y a la confrontación inteligente de opiniones... Reiteramos nuestro invariable respeto a la autonomía de los centros educativos. Moral y materialmente apoyaremos sus tareas para que puedan cumplir eficazmente con sus propósitos de formar profesionales. El respeto mutuo y la cooperación estrecha han de ser las normas reguladoras de la convivencia entre el gobierno y las universidades... Quienes buscan el enfrentamiento entre el Estado y los centros educativos, son en realidad agentes de la subordinación y de la dependencia.¹³

Tanto el gobierno interino de Morales Blumenkron, como el que le sigue, doctor Alfredo Toxqui Fernández de Lara, comprenden cabalmente que ya no era posible resolver los problemas sociales a través de la represión, sino que se requiere enfrentarlos mediante el trato político, mediante la negociación, o, como se dice en nuestros tiempos, a través de la concertación.

En un documento del PCM durante esa etapa, se señala:

Tras la derrota de la política represiva de O'Farril, se impuso una nueva correlación de fuerzas, una nueva situación política que los gobernantes se ven en la necesidad de reconocer. Se imponía una política más abierta y flexible, que hiciera concesiones en los puntos más difíciles, que recuperara prestigio y posiciones perdidas para el bloque dominante, e impidiera el avance del movimiento revolucionario.¹⁴

En la IV Conferencia Regional del PCM en Puebla y Tlaxcala se mencionaba:

El Gobierno de Alfredo Toxqui, en el curso de los primeros años de su sexenio, ha dado muestras de no estar dispuesto a favorecer una polarización de fuerzas en Puebla, y por tanto su forma de gobernar, hasta ahora, ha estado impregnada de una actitud de cautela, de conciliación y de indefinición frente a los múltiples conflictos que se han suscitado durante ese periodo. Los métodos despóticos y autoritarios no han caracterizado al gobierno de Toxqui. Aun cuando en ocasiones se ha recurrido para la solución de los conflictos sociales al uso de la fuerza pública, particularmente entre los agrarios, en general se ha preferido abordar políticamente los problemas a través de la discusión y la negociación. Este hecho no es casual. Es el resultado de la quiebra en Puebla de las tradiciones y métodos despóticos de gobernar que prevalecieron durante el predominio

del cacicazgo avilacamachista, y que entraron en crisis a partir de la década de los sesenta, como consecuencia del ascenso del movimiento de masas, su combatividad, y de la capacidad de respuesta y movilización ante la represión.¹⁵

En una segunda etapa, que podríamos ubicarla a partir de la mitad del mandato de Alfredo Toxqui Fernández de Lara, el gobierno estatal ya no trata sólo de actuar a la “defensiva”, por el afán de preservar su capacidad de maniobra, sino ahora le da a su discurso reformista unos contornos más nítidos y definidos. Es decir, ya no asume la reforma política como “un mal necesario”, sino quasi como un “programa de gobierno” encaminado a apuntalar el desarrollo político y social de la entidad. El gobernador Alfredo Toxqui Fernández de Lara saludó la propuesta del presidente José López Portillo de llevar a cabo una reforma política para ampliar la presencia de la oposición en la Cámara de Diputados del Congreso Federal y para promover el registro de nuevos partidos políticos —entre ellos el PCM— para encauzar legalmente su participación política. De ahí que no es casual que Puebla fuese una de las primeras entidades en que se aprobaron reformas a su Constitución para tener en el Congreso del Estado diputados elegidos bajo el criterio de representación proporcional.

Habría que aclarar que los avances mencionados se producen no sin tropiezos, vacilaciones y titubeos; y aún cuando el gobierno abandona el uso de la fuerza para dirimir los conflictos, no aplica un trato político homogéneo a los diversos problemas sociales de la entidad. Así, por ejemplo, mientras que en las zonas urbanas —particularmente en la ciudad de Puebla— pone el acento en la negociación y en la conciliación, en el campo se continúa recurriendo a la represión, sin llegar desde luego a los extremos que caracterizaron a los gobiernos precedentes, en particular al de Bautista O'Farril.

Del mismo modo persisten el fraude electoral, las resistencias a abrirle paso a una reforma política de fondo, el clientelismo y las otras expresiones patrimonialistas características de los llamados “gobiernos posrevolucionarios”. Y, lo que es más grave, continúan las concesiones a los principales grupos oligárquicos de la entidad.

Ante todo esto, sin embargo, no se debe dejar pasar por alto los grandes avances logrados en Puebla por el movimiento democrático popular, en cuanto se refiere a sus conquistas en el terreno de la libertad política.

¹ Citado por Vélez Pliego, Alfonso, *op.cit.*, p. 79.

² Citado por Sotelo, Humberto, en “El movimiento universitario de 1973...”, *op.cit.*, p. 75.

³ *Ibid*, p. 76.

⁴ En el I Congreso Regional del Partido Comunista Mexicano en Puebla y Tlaxcala, el entonces secretario general de esta organización en la entidad, Alfonso Vélez Pliego, observaba: “Para desarrollar su estrategia, la burguesía cuenta ahora no sólo con las organizaciones e instrumentos que tradicionalmente ha utilizado. Cuenta, además, con el apoyo abierto del aparato estatal. El gobierno de Bautista O’Farril no sólo protege las actividades que organiza la burguesía, sino que él mismo, personalmente, encabeza la ofensiva”, en *Informe y Resoluciones del Primer Congreso Regional del PCM en Puebla y Tlaxcala*, Ediciones del Comité Regional del PCM en Puebla y Tlaxcala, p. 41.

⁵ En un artículo publicado en la revista *Siempre!*, en mayo de 1973, Rolando Cordera escribía: “Aquí, en Puebla, las fórmulas rimbombantes de la democracia representativa y del régimen constitucional que desde los orígenes de la Nación han formado parte de la lista anual de promesas que el Poder ofrece al pueblo, estallan en mil pedazos ante la obscenidad militante de quien, desde el poder constituido, identifica el asesinato de cinco universitarios con una lección cívica ejemplar”.

⁶ *El Heraldo de Puebla*, 8 agosto de 1972.

⁷ Aguilar Mora, Manuel, “Puebla, a la hora del crimen político”, en revista *Siempre!*, Suplemento Cultural, núm. 999, 16 de agosto de 1972, pp. 1-7. Las cursivas son nuestras.

⁸ Garmendia, Arturo, *op.cit.*. Las cursivas son nuestras.

⁹ Monsiváis, Carlos, “Puebla: la matanza del Primero de Mayo”, en revista

Siempre!, La Cultura en México, núm. 1039, 23 de mayo de 1973.

¹⁰ Reyes Heróles, Jesús, *Escritos políticos*, México, 1975, p. 312.

¹¹ Lomelí Vanegas, Leonardo, *op.cit.*, p. 390.

¹² Alarcón Hernández, José, *Las normas del poder*, Porrúa, México, 1994, p. 149.

¹³ *Excelsior*, 10 de mayo de 1973.

¹⁴ Citado por Vélez Pliego, Alfonso, *op.cit.*, p. 83.

¹⁵ Sotelo, Humberto, “El movimiento universitario de 1973...”, *op.cit.*, p. 156.

APÉNDICE

1972 y 1973: génesis del proyecto de la derecha poblana de arribar al poder político

La caída de Bautista O'Farril en mayo de 1973, que trajo consigo la pérdida del aparato estatal para los grupos más beligerantes de la burguesía poblana, propició que éstos decidieran arribar al poder político, para dejar de una vez por todas de estar expuestos a las “veleidades populistas” y “socializantes” del régimen.

Si bien el sector privado fue el principal beneficiario de las políticas emanadas de los gobiernos del cacicazgo avilacamachista, estrictamente hablando nunca había detentado de manera directa el poder; esta tarea estaba reservada a la clase política, o mejor dicho a la clase político-militar forjada al calor de dicho cacicazgo. Will Pansters señala al respecto: “Es evidente que cuando Maximino Ávila Camacho fue electo gobernador, las instituciones gubernamentales, departamentos y gobiernos municipales eran administrados por personas cercanas y leales a él”.¹ Desde luego el férreo control que ejercía Maximino Ávila Camacho sobre la entidad se debía también, en no poca medida, a las excelentes relaciones que sostenía con el gobierno central, en particular con el presidente Lázaro Cárdenas.

Los diversos segmentos de la burguesía poblana estaban alineados rígidamente con los gobiernos avilacamachistas, quienes, aparte de asegurarles la estabilidad política y social de la entidad —estabilidad forjada, desde luego, a sangre y fuego—, les brindaban condiciones excelentes para el desarrollo de sus negocios.

Esto explica el por qué los principales sectores de la burguesía decidieran no involucrarse de manera directa en la vida política: ¿para qué hacerlo —pensaban— si los gobiernos avilacamachistas les brindaban todas las garantías que requerían para enriquecerse sin mayores problemas? El gobernador Carlos I. Betancourt (1945-1951) —en uno de sus informes— describió de manera muy gráfica el ambiente de referencia:

La general tranquilidad que se advierte en la entidad ha facilitado que las actividades creadoras, productivas y de transformación, fuesen enfrentadas por los núcleos de nuestra laboriosa y progresista población, con la justicia, seguridad y confianza que pone de relieve el alto sentido cívico de la colectividad poblana... Mediante el armonioso enlace de la acción privada con la colectiva se ha conseguido el fomento de las instituciones financieras de crédito público, la eficiencia en los servicios oficiales y el constante encauzamiento del régimen impositivo hacia metas de evidente equidad, mediante una juiciosa revisión.²

Debido a ese ambiente de “armonía” y “tranquilidad” las organizaciones patronales decidieron, pues, como escribe Alejandro C. Manjarrez, “dejar para mejores ocasiones su participación política, pues tenían la certeza de que el gobierno estaba de su parte”.³

Empero, como indicamos en capítulos anteriores, esa “arcadia” se esfumó al entrar en crisis el cacicazgo avilacamachista, la cual —sin temor a equivocarnos— se inicia con el estallido del movimiento de reforma de la UAP en 1961 y culmina con la caída del gobernador Bautista O’Farril.

Fue entonces que los sectores más beligerantes de la burguesía poblana decidieron ingresar de lleno a la arena política, en aras de “restaurar el orden” resquebrajado. Asunto que si bien ya lo abordamos ampliamente en el capítulo III, ahora sólo de-

seamos subrayar lo siguiente: en una primera etapa los sectores de referencia se limitan al papel de “francotiradores” de los movimientos sociales que estallan en la entidad, desplegando todo tipo de acciones destinadas a combatirlos. En este periodo tienen aún la esperanza —como lo anotamos en su momento— de que Puebla retorne al imperio del “orden”, anhelo que parece cristalizar cuando llega Bautista O’Farril al gobierno del estado, en abril de 1972, en quien tales sectores ven algo así como un “Maximino Ávila Camacho redivivo”. Pero este sueño se viene abajo definitivamente, reiteramos, una vez que el gobierno federal obliga a aquél a presentar su renuncia como resultado de la masacre del Primero de Mayo de 1973, experiencia amarga que induce a los sectores multicitados a tomar la decisión —y aquí comienza la segunda etapa a que me refiero— de conquistar el poder político, para aunarlo a su poder económico.

De este modo los grupos más radicales del sector privado poblano *deciden diferenciarse del régimen, y enarbola un proyecto propio encaminado a apoderarse del aparato estatal.*

Tales grupos se adelantan, así, al proyecto que habrán de enarbolar a finales de los ochenta las corrientes más radicales de la burguesía mexicana.

El proyecto de marras fue anunciado el 20 de diciembre de 1975, durante el encuentro que sostuvieron los líderes más aguerridos del sector privado en Puebla con el candidato del PRI a la presidencia de la República, José López Portillo. En ese evento, sin rubor alguno, los líderes de la derecha poblana Gerardo Pellico Agüeros y Francisco Bernat Solsona expresaron sus concepciones sobre el Estado mexicano, el régimen político, la política económica, y en general acerca de la conducta que debería caracterizar al nuevo gobierno, subrayando en particular su interés por fortalecer el papel y la influencia política de los empresarios en la dirección del estado. Señalando así:

Muchos de los sectores que forman la sociedad de nuestra patria han llegado a tener representantes permanentes en el congreso federal y en las legislaturas locales, incluso hasta gobernadores. *Nos parece equitativo que el sector empresarial tenga su voz auténtica en esos mismos cargos públicos. Nuestro sector, hasta el momento, ha estado marginado de servicios públicos sociales y, aún más, con frecuencia se le atribuyen todos los males sociales, económicos y políticos que sufre la nación en un momento dado.*⁴

Frente a dichos planteamientos, el aspirante a la presidencia de la república, respondió: “Soy un hombre de buena fe que no tiene compromisos con la clase social aquí representada”. Y, sin vacilación, manifestó su oposición tajante a la postura de los dirigentes empresariales poblanos: “la democracia no entraña representación por gremios o por intereses. Eso se llama corporativismo... Ello estaría muy cerca del fascismo”.⁵

Unos meses después del encuentro con López Portillo, Gerardo Pellico Agüeros y Eduardo García Suárez concurrieron, en abril de 1976, a la célebre conjura de chipinque, en Nuevo León, en donde se reunieron de manera secreta los sectores más duros de la derecha mexicana, en aras de avanzar en la cristalización del proyecto mencionado.

Como anotamos en el capítulo III, las reformas echeverristas alarmaron a los núcleos más radicales del sector privado del país, entre ellos los de Puebla, Jalisco y Monterrey, dado que estaban convencidos que la mismas implicaban “llevar a México al socialismo”.

Las leyes de Echeverría para regular la inversión extranjera y la transferencia de tecnología, expedidas en marzo de 1973, así como el proyecto para controlar la inflación, condujeron a dichos núcleos a desprender la conclusión de que el presidente estaba yendo demasiado lejos, por lo cual decidieron unir sus fuerzas

para combatir al gobierno federal,⁶ tal como lo habían hecho en la década de los sesenta, cuando combatieron las reformas del presidente López Mateos.

Para esto, desde varias décadas atrás, el Grupo Monterrey había comenzado a enarbolar un proyecto a nivel nacional enderezado a convencer a los principales grupos de la burguesía mexicana —principalmente a la poblana— acerca de la necesidad de que el sector privado arribase al poder político, para fortalecer de ese modo su poder económico, y para desembarazarse de la “presencia molesta” de la burocracia de los regímenes posrevolucionarios, cuyas “veleidades populistas” solían meter en aprietos a la iniciativa privada.

No era de ningún modo casual que el grupo de referencia formulase tal planteamiento. Como anotaba Roger Bartra, “El Grupo Monterrey encabeza a los sectores más antiguos de la burguesía, más independientes frente al gobierno y más ligados a la fabricación de bienes intermedios y de capital en estrecha asociación con el capital extranjero”.⁷

En contraste con dicho clan, la burguesía poblana actuaba sólo a nivel estatal, sin enarbolar un proyecto a nivel nacional. A este respecto Juan Manuel Fragoso, Elvira Concheiro y Antonio Gutiérrez, anotaban:

La burguesía poblana, caracterizada como los demás grupos, por su anticomunismo militante, se limitaba a enarbolar posturas alternativas en numerosos conflictos estatales, en los que en el centro estuvieron la lucha por el predominio en el gobierno local y el control sobre la Universidad. Sin embargo este grupo granburgués no desarrolló suficientemente posiciones políticas que se tradujeran en lo que podemos llamar un proyecto nacional propio. Esta situación cambió a partir de sus estrechas ligas con los Garza-Sada de Monterrey.⁸

Por lo tanto, a partir del fortalecimiento de sus vínculos con dicho clan, la burguesía poblana decidió ensanchar su campo de acción, conciente de que su actuación en el ámbito local no le permitía enfrentarse eficazmente al gobierno federal. Pasa, pues, a estrechar filas con otros sectores radicales de la burguesía mexicana para unir esfuerzos en su enconada oposición a las reformas echeverristas, y, sobre todo, para abrirle paso a un proyecto político que le permitiese a los empresarios adquirir posiciones propias en el Estado, coincidiendo con el Grupo Monterrey en que había llegado la hora de que los empresarios abandonaran su pasividad y su sujeción a los lineamientos del régimen, para conjugar el poder económico y el político.

En su obra *Los empresarios y el cambio político*, Matilde Luna Ledesma expone:

A lo largo del sexenio [de Luis Echeverría Álvarez. H.S], el proceso de transformación experimentado por los empresarios puede caracterizarse de la siguiente manera: primero, por un central cuestionamiento de la intervención del Estado en la economía que pronto se dirige a otros temas de la política gubernamental tales como la política exterior, la educativa, la agraria, la de comunicación, la política del uso de la fuerza pública, etc., cuestionamiento que tiene como referente ideológico más abstracto “la amenaza comunista”, la cual encarna en la alianza entre funcionarios públicos, políticos del PRI y dirigentes de la oposición (intelectuales, sindicalistas, etc.), pero sobre todo en la persona del presidente. Segundo, la oposición empresarial no solamente se refiere a los contenidos de las prácticas gubernamentales, sino que también involucra las modalidades de la participación privada en la toma de decisiones que en este periodo se dirige tanto a la restitución de los mecanismos de consulta como a enfatizar el carácter privatista (frente al capital)

de sus órganos de representación. Tercero, con una base de apoyo fundamentalmente de carácter regional (Monterrey y Puebla particularmente), la facción radical, representada por el Grupo Monterrey, va imponiendo su dominio, que en el seno de las organizaciones empresariales se expresa en el desplazamiento de dirigentes nacionales de la facción moderada por parte de líderes con posiciones más duras. Cuarto, el tránsito de la negociación al enfrentamiento significa pasar de una acción empresarial como grupo de presión, a una acción de clase y como movimiento social de derecha. Quinto, en el plano ideológico, aparece una nueva demanda política, la de sujetar las decisiones públicas a principios de racionalidad técnica. Sexto, sectores de la facción radical convocan a la creación de un partido empresarial.⁹

En mayo de 1975, los dirigentes de la CONCAMIN, CONCANACO, Asociación de Banqueros de México, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, unen sus esfuerzos para crear el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con el objeto de unir y coordinar las acciones de los diferentes grupos y fracciones de la burguesía mexicana. Estos objetivos son señalados en el artículo 5º de sus estatutos:

Procurar la unificación del sector empresarial y propugnar la coordinación de las políticas externas de los organismos empresariales, difundir las tesis empresariales, analizar la problemática política, social, económica y jurídica del país a fin de llegar a definiciones básicas que orienten la participación del sector empresarial en la vida del país.¹⁰

Esta iniciativa fue una de las acciones más importantes del sector privado durante el sexenio de Echeverría, pues a

través de dicho órgano expresaría sus discrepancias con el gobierno federal. El CCE sintetiza en gran medida la forma a través de la cual las fracciones de la gran burguesía fueron llegando a puntos de acuerdo. Además, nos expresa su capacidad de respuesta, su fuerza de negociación, su capacidad de irradiación política e ideológica sobre el resto de la clase y otros sectores de la sociedad.

La creación del CCE sería un paso fundamental para cristalizar el anhelo de los sectores más beligerantes de la burguesía de tener una participación más abierta y decidida en la vida política del país. Sin embargo, estrictamente hablando, no se concibió a ese organismo como un instrumento de guerra, sino, más bien, como un mecanismo de defensa. Así lo plantearon muy claramente Jesús Vidales Aparicio, presidente de la CONCANACO, Luis Guzmán de Alba, presidente de la AIEM y presidente de la CONCAMIN; y Javier Guerra, presidente de la Reunión de Ejecutivos de Finanzas, al expresar: “No debemos buscar la confrontación ni mucho menos provocar la guerra, pero debemos estar preparados para ejercitar nuestros derechos”.¹¹

En 1976 los sectores protagónicos de la burguesía poblana crean la versión local del Consejo Coordinador Empresarial, afiliándose al mismo la CANACO, la CANACINTRA, el Centro Patronal, la Cámara de la Industria de la Radiodifusión, el Centro Bancario, la Cámara de la Industria Textil y otras organizaciones.¹²

Aunque tal organismo, como indicamos, no fue diseñado como un “instrumento de guerra”, en los hechos así fue asumido por la iniciativa privada poblana, quien lo utilizó como bastión para imponer sus designios a los gobiernos estatal y federal.

En 1978, durante la reunión de la III CELAM en Puebla, el Consejo Coordinador Empresarial presentó un documento en que planteaba sus posturas respecto a la Iglesia, el sindicalismo, el Estado y otros tópicos. Así, por ejemplo, condenaban la apertura del gobierno hacia las fuerzas de izquierda, advirtiendo:

La apertura hacia la izquierda que se pretende es negativa, como lo demuestra en los últimos años, que muchos sacerdotes y laicos se han vuelto marxistas o socialistas, sin ningún beneficio real para los marginados sino más bien su contrario (*sic*). El sindicalismo es útil cuando se maneja en beneficio del trabajador, pero cuando se convierte en arma de la revolución socialista se transforma en un poderoso ariete de demolición del patrimonio de una nación; el sindicalismo debe ser depurado y humanizado tanto como la empresa misma, de lo contrario es un instrumento para la conquista del poder a expensas de la paz y del bien y sólo para satisfacer los resentimientos de minorías.¹³

En octubre de 1979, a raíz del secuestro de varios camiones del transporte público por parte de grupos estudiantiles de la UAP que protestaban contra el alza en la tarifa del pasaje, el Consejo Coordinador Empresarial decide convocar por enésima vez a un paro para el 30 de ese mes, en respaldo a los concesionarios y para frenar la “ola de inestabilidad que vivía Puebla”. El ingeniero Eduardo García Suárez, en su calidad de presidente del CCE, fue el principal promotor de tal iniciativa. Éste declaró, “En Puebla está roto el orden, la paz y la tranquilidad”.¹⁴ A lo que el gobernador Alfredo Toxqui Fernández de Lara respondió que sólo se trataba “de una expresión de inconformidad del sector privado”, y agregó que eran “puntos de vista personales las apreciaciones de García Suárez”. Advertía que “no todo el sector privado, pero sí algunos de sus miembros, intentaban escalar al poder político, y convertirse en factores de decisión política”.¹⁵

En otro desplegado público, García Suárez, en un reto dirigido al mismo gobierno federal, señalaba: “En momentos como éste debemos con actos como el que aquí señalamos y vamos a ejecutar todos, darle a nuestro gobierno una muestra por contraste (*sic*), del tipo de ejercicio de autoridad que queremos”.¹⁶

Para que no hubiera dudas acerca de quién era el destinatario del mensaje, García Suárez subrayó que no se trataba de un problema local, sino nacional. Además, en tono desafiante, exigió al presidente la República la desaparición de poderes en Puebla.

Frente a dicho reto, el gobernador Toxqui, imitando la respuesta de José López Portillo a los empresarios poblanos, expresó: “Sólo hay un poder: el poder público”.¹⁷

Comentando dichos acontecimientos, el destacado periodista Manuel Buendía señalaba, refiriéndose a la postura de García Suárez:

En el fondo y en la forma, la misma tesis, la misma línea política, las mismas intenciones... La inverecundia de García Suárez no desmerece un ápice del grosero estilo impuesto por el sector patronal más reaccionario para dirigirse al gobierno. En los tres años de la administración de JLP, ningún grupo, ningún sector o individuo, se había tomado el atrevimiento de encararse así con el gobierno federal.¹⁸

Ciertamente el desafío del CCE había sido directo, no sólo al gobierno estatal, sino también al gobierno federal.

El paro patronal, por cierto, no alcanzó esta vez las proporciones de las acciones convocadas por la derecha poblana en 1973. Si bien cerraron sus puertas algunos comercios y escuelas confesionales, no lo hicieron los bancos, ni la mayoría de las industrias. Algunos negocios únicamente bajaron sus cortinas, pero retuvieron adentro a los empleados laborando en preparativos para las ventas de navidad.

A la conquista de la sociedad civil

Habría que reconocerle a los sectores hegemónicos de la iniciativa privada poblana el haber sido pioneros de la estrategia que pondrá en marcha el PAN a partir de la década de los noventa: la conquista de la sociedad civil a través de las llamadas “organizaciones intermedias”.

Desde finales de los sesenta y principios de los setenta, tales sectores alentaron la creación de grupos fascistas como el FUA, Náhuatl, Juventud Nueva y otros, que fueron cobijados por el clero político y las fuerzas más reaccionarias de la entidad. Tales grupos tuvieron una actuación decisiva en la lucha que emprendió la derecha contra el movimiento democrático surgido en la UAP, creando el ambiente de histeria anticomunista que condujo a los crímenes de Joel Arriaga y Enrique Cabrera. Parte fundamental de la estrategia de la derecha poblana contra el movimiento democrático fue la creación de organismos como el Comité Coordinador de la Ciudadanía Poblana —antecesor del Comité Permanente de la Ciudadanía Poblana— que jugó un papel muy importante en la lucha contra la UAP en los años de 1961-1964, la Federación de Barrios y Colonias, y decenas de agrupaciones semejantes. Desde entonces se percató de la importancia de ese tipo de instancias en su estrategia para arribar al poder.

También utilizó a organismos como la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del Municipio de Puebla —mejor conocido como Junta de Mejoras— la cual, fundada en marzo de 1958, supuestamente con el propósito de “coadyuvar con las autoridades municipales”, en los hechos sirvió durante varias décadas a los intereses de los principales líderes del sector privado poblano, convirtiéndose en una “autoridad intermedia” entre la comuna y la ciudadanía.

El 16 de febrero de 1983, surge en Puebla la versión local de Desarrollo Humano Integral (DHIAC),¹⁹ a iniciativa de los colegios profesionales ligados a los empresarios. Al hacer del conocimiento público la constitución de este organismo, su directiva declaró:

*Nuestra actividad no pretende llegar a constituirse en un partido político nuevo, aunque esa posibilidad queda abierta... Como una meta a largo plazo que el DHIAC se ha propuesto, destaca la de influir para elegir a un alcalde de Puebla que sea el adecuado, para lo cual estamos dispuestos a buscar alianza con el PAN y vigilar las elecciones con urnas transparentes.*²⁰

Aparecen como dirigentes de esa organización Jorge Espina Reyes —actual presidente de la COPARMEX—, Luis Paredes Moctezuma —actual presidente municipal de Puebla—, Francisco Javier Torres, Felipe Álvarez Lozano y Alfredo Arizmendi. “Los intereses que mueven a esta agrupación —expresó Espina Reyes— son los del bienestar ciudadano, no estamos comprometidos políticamente con ningún partido, ni económicamente con ningún sector”.²¹ Sin embargo, dejó entrever que dicho organismo sí intervendría en política, en concreto, en la coyuntura de renovación de las autoridades municipales de 1983.

Tal organismo, a partir de entonces, ha desempeñado un papel importante para el fortalecimiento de la derecha poblana, apareciendo, desde luego, como “organismo apolítico que sólo busca el bienestar de la ciudadanía”. En las elecciones de 1983 esta “organización intermedia” no consigue cristalizar su sueño dorado de conseguir un “alcalde adecuado para Puebla”, pero logra este objetivo en la coyuntura electoral de 1995, cuando por vez primera en la historia de la entidad el PAN arriba al poder en la mayoría de los principales municipios —incluido el

de Puebla— habiendo lanzado como candidato a Gabriel Hinojosa Rivero, uno de los retoños consentidos del neopanismo.

Aunque Espina Reyes y Paredes Moctezuma ya no figuraban en la dirección del DHIAC, de hecho eran sus líderes “tras bambalinas”, al lado de Alfredo Sandoval. Años después el primero se convirtió en presidente de la COPARMEX, sección Puebla, y el segundo en presidente de la CANACO. Jorge Espina Reyes, en el año 2000 ascendió a la dirección nacional de la COPARMEX, y en 2001 Luis Paredes Moctezuma arribó a la presidencia municipal de Puebla.

También, en 1983, surge en Puebla la versión estatal de la Asociación Cívica Femenina (ANCIFEM)²² que, so pretexto de contribuir a la “dignificación del papel de la mujer”, se agrega al coro de organizaciones cívicas que combaten el “estatismo” del régimen político mexicano. Una de sus principales promotoras fue Teresa Aranda, actual presidenta del DIF en el gabinete de Vicente Fox Quezada. Es una de las principales dirigentes de la derecha, no sólo de Puebla sino también del país.

A través de dichas organizaciones la derecha poblana se dará a la tarea, reiteramos, de penetrar en los más diversos ámbitos de la sociedad civil, enarbolando la tesis de que aquéllas eran “organizaciones apolíticas”. Se trata desde luego de un simple artilugio político enderezado a influir en aquellos ámbitos sociales que se distinguen por su rechazo a la política, en particular los jóvenes y las mujeres de las clases medias y aquellas capas sociales que se caracterizan por su intensa religiosidad.

De esta forma, pues, la burguesía poblana se adelanta en varios años a lo que habrá de ser la estrategia favorita de la derecha mexicana—encabezada por el PAN— a partir de la década de los noventa: esto es, utilizar una gigantesca constelación de “organizaciones de la sociedad civil” para enfrentarlas al estado, para crear la impresión de que en el país sólo existen dos polos,

con intereses totalmente contrapuestos: la sociedad civil y el régimen político mexicano.

La izquierda, apenas en los últimos años, ha comprendido la importancia que reviste la lucha política en ese ámbito. Por su parte, el PRI aún no la entiende, y no descartamos la posibilidad de que la comprenda una vez que haya desaparecido totalmente del escenario político.

En 1996 surge Coordinadora Ciudadana, a instancias de los empresarios poblanos Alfredo Sandoval y Francisco Sánchez Díaz de Rivera. Como era de esperar, también fue presentada como un organismo “apolítico”. Esta organización consiguió su registro como asociación política a nivel nacional en 1998. En una interesante nota, el periodista Alejandro Mondragón escribía, refiriéndose a la misma:

De las agrupaciones que la conforman, ANCIFEM, DHIAC, y la Asociación de Derechos Humanos, llama la atención el Movimiento Popular Cristiano con antecedente en San Luis Potosí, como espacio de reflexión cristiana que cuenta con el respaldo de la jerarquía católica que hoy comanda Norberto Rivera Carrera, pero siempre recibió protección de Ernesto Corripio Ahumada. En Puebla, el Movimiento Popular Cristiano es representado por un alto directivo del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, Juan Escutia, que tiene vínculos familiares con el ideólogo empresarial Manuel Díaz Cid. Pero un nombre aparece detrás de las asociaciones que lo mismo se ligan a Provida que a la COPARMEX. Fue director del sindicato patronal por más de 20 años y vio pasar a dirigentes —todos activos del PAN— de la talla de José Luis Coindreau, Manuel J. Clouthier (q.e.p.d.), José María Basagoiti, Alfredo Sandoval González, Bernardo Ardavín, Jorge Ocejo Moreno, y el mismo Antonio Sánchez Díaz de Rivera. De apellido paterno

Velasco, materno Arzac, Guillermo es figura clave del proceso de transición que pretende llevar a cabo la cúpula patronal... Asesor del Instituto de Propositiones Estratégicas, órgano ideológico de la COPARMEX y del ayuntamiento de Gabriel Hinojosa, cuyo hijo Guillermo Velasco Barrera funge como director de Comunicación Social, Velasco Arzac no figura públicamente, pero tras bambalinas maniobra por el proyecto político patronal.²³

La creación de Coordinadora Ciudadana no fue vista con buenos ojos por algunos de los prohombres de la iniciativa privada poblana, entre ellos Eduardo García Suárez, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla y del Consejo Poblano de Hombres de Negocios. Según éste, “el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Antonio Sánchez Díaz de Rivera promueve una extraña mezcla de grupos empresariales, cívicos y religiosos para agruparlos en torno al Partido Acción Nacional”. Entre esas organizaciones aludió a la Asociación Nacional Cívica Femenina, Desarrollo Humano Integral, Solidaridad Cristiana, y otras organizaciones identificadas con la derecha. Y agregó: “toda vez que cuando los organismos empresariales se hacen partido, se crean frustraciones, divisiones profundas y figuras oligopólicas”.²⁴

Pareciera que las diferencias entre García Suárez y Díaz de Rivera tienen que ver con la cuestión del manejo de las cámaras empresariales. Aquél las defiende y éste las impugna, al igual que Gabriel Hinojosa Rivero y otros miembros del Foro de Cambio Empresarial.

Sin embargo, aparte de esa constelación de membretes, la derecha poblana cuenta también con sus propias instituciones educativas, como es el caso de la UPAEP. Esta institución, como apuntamos en párrafos anteriores, se inauguró el 7 de mayo de 1973, en el casco del exrancho La Noria. Su Junta Directiva (hoy Consejo Rector) estuvo presidida por Abelardo Sánchez

Gutiérrez, José Antonio Quintana Fernández, Eduardo García Suárez, Gerardo Pellico Agüeros y Vicente Pacheco Ceballos. En el patronato fundador se encontraban Rogelio Ojeda Alanís, Manuel Rodríguez Concha, Ricardo Villa Escalera, Javier Torres Leyva y Jorge Álvarez Martínez.²⁵

No pocas de dichas personalidades encabezaron los principales organismos del sector privado, y de las organizaciones sociales de la derecha, en las décadas de los setenta y los ochenta.

En la coyuntura electoral de 1995, cuando el PAN impulsa la candidatura de Gabriel Hinojosa Rivero, aparte de los membretes e instituciones con que contaba la derecha poblana, esta expresión política impulsa además la formación del Foro de Cambio Empresarial, el cual tendría una participación muy importante para el triunfo de aquél.

A través de todas esas agrupaciones de la sociedad civil, la derecha logra crear la impresión de estar arraigada en toda una constelación de instancias cívicas, estrategia muy inteligente que surtió efecto en 1995, cuando el PAN logra arribar al poder en los principales municipios de Puebla, incluyendo la ciudad capital.

En su libro, *Los bárbaros del Norte, la contra mexicana*, Abraham García Ibarra escribe:

La explosión de los membretes aparece como una de las características de las ofensivas derechistas. En la de 1934-1940, según el recuento que hicimos para uno de los apartados precedentes, logramos contar hasta 67. Cualquier observador puede encontrar que, independientemente de la membresía real —como ya hemos visto para otros casos— en muchos de los directorios aparecen los mismos nombres. Según parece, *supuestas agrupaciones autónomas no son más que comisiones de trabajo para una misma dirección central. Además de*

cumplir esa función específica, la proliferación de los membretes crean la idea de que esos movimientos poseen una capacidad expansiva y orgánica superior aun a la de los partidos. En los que arriba citamos como se ve, aparece dos veces el nombre de Octavio Elizalde; José Angel Conchello figura por lo menos en dos. Este, como se sabe, es actual jefe regional del PAN en el Distrito Federal. En todo caso los siete se han acercado al Desarrollo Humano Integral porque, hasta antes de la llegada de Clouthier, el PAN no les inspiraba confianza. Aún ahora mucha de aquella gente no se ha inscrito al partido.

Y, a manera de ilustración, Ibarra agrega:

El 12 de marzo de 1988 en el Hotel México, donde Desarrollo Humano Integral proclamó la candidatura presidencial de Clouthier, aparece —aunque da la impresión que surge— el membrete Acción Universitaria (AU). En realidad sus delirantes promotores... son los mismos que han participado en tres encuentros de estudiantes de universidades e institutos privados (1985, 1986 y 1987) en el campus de la Universidad Intercontinental. Estos encuentros —en cuya edición original participaron 44 establecimientos particulares, la mayoría confessionales—, son financiados por la Confederación Patronal de la República Mexicana desde que el propio Sandoval González presidía y creó para ello el Centro de Estudios de la Juventud Coparmex a cargo de Jorge de los Cobos. Entre los organizadores de esas reuniones se encuentran dirigentes de Juventud 85 y Abel Aguilar, del movimiento Testimonio y Esperanza, cuyo secretario de Relaciones Eclesiásticas es Jorge Serrano Limón. Juventud 85 a su vez es organizador de la peregrinaciones juveniles al Cerro del Cubilete. En la peregrinación de febrero de 1987, a iniciativa del obispo Ricardo Watti Urquidi se decide crear el Movimiento Aglutinador Juvenil.

Su presidente será Abel Aguilar, que lo era antes de Testimonio y Esperanza, del que también sale Serrano Limón a tomar el movimiento del grupo ProVida, cuya paternidad cardenalicia a cargo de Ernesto Corripio quedó establecida el 22 de octubre de 1980, por su expresidente Jaime Aviña, que lo sería después de Desarrollo Humano Integral, jefatura que dejó a cargo del ex presidente de la Coparmex, Sandoval González.²⁶

Esta “explosión de membretes” va acompañada de estrategias muy sutiles, enderezadas a potenciar la actuación de las diversas organizaciones de la derecha y de sus personajes más destacados. En su libro *La última cruzada*, Édgar González Ruiz —investigador que ha hecho magníficas aportaciones al pensamiento y acción de los grupos conservadores de México en los últimos años— observa:

Dado que se identifican por tener una misma filiación: católica, y por compartir un mismo conjunto de demandas y de tesis ideológicas, así como relaciones comunes con personajes del empresariado, de la política y de la jerarquía católica, es natural que los grupos conservadores unan esfuerzos en situaciones que consideran críticas, por ejemplo: para oponerse a una propuesta de despenalización del aborto, oponerse a la educación sexual, defender la educación religiosa, o apoyar a la jerarquía católica en alguno de sus conflictos con el Estado. Por ello es frecuente que un mismo grupo participe en acciones conjuntas con otros para alcanzar objetivos aparentemente ajenos entre sí. Por ejemplo, Alianza Fuerza de Opinión Pública (AFOP) participó en 1993 en las manifestaciones para protestar por la muerte del cardenal Posadas, en la campaña para prohibir el programa de Cristiana y otros espectáculos y publicaciones y en protestas contra la educación sexual. Dos años después la AFOP apoyó al PAN y su exdirigente, César Croll, se convirtió en

alcalde de Guadalajara, mientras que su esposa, Maribel de Croll, quien además pertenece al *Opus Dei*, pasó a ser presidenta del DIF municipal. En realidad todos esos objetivos —el respaldo a la iglesia, la censura moralista, la oposición a la educación sexual, el apoyo al PAN— son coherentes dentro del marco de la ideología y las relaciones de los grupos conservadores. Grupos como Testimonio y Esperanza, Fundice, Cecisol, han apoyado el activismo “provida” y las campañas contra la pornografía, pese a que sus objetivos principales se refieren a otros temas, como la “evangelización” de los jóvenes, la reivindicación de la herencia cristiana y colonial y la promoción de la solidaridad, respectivamente.²⁷

Esta tendencia a “entrelazar” y “entrecruzar” iniciativas de diversas organizaciones fue, reitero, una idea original de la derecha poblana. Disculpe el lector mi insistencia al respecto, pero lo hago porque pienso que la referencia de este fenómeno es fundamental para comprender la evolución del pensamiento y la praxis de dicha corriente política.

El movimiento de protesta contra la nacionalización de la banca y el surgimiento del neopanismo

A principios de los ochenta, imperan buenas relaciones de la iniciativa privada poblana con los gobiernos estatal y federal. Con el primero porque el gobierno, entre otras cosas, sale en auxilio de la Junta de Mejoramiento Material, Cívico y Moral, que estuvo a punto de desaparecer por la nueva ley del IVA. Con el gobierno federal porque los empresarios, aparte de ver con buenos ojos el Plan Global de Desarrollo 1980-1982, les complace la postura contemporizadora de López Portillo, quien viene a Puebla a inaugurar el edificio del CCE.

Sin embargo, ese clima se rompe cuando López Portillo decreta, en su último informe, la nacionalización de la banca,

iniciativa que propicia el recrudecimiento de las tensiones entre el gobierno federal y las principales fracciones de la burguesía mexicana, entre ellas la de Puebla, la Monterrey y las del noroeste del país.

Los más sorprendidos por la nacionalización de la banca y el control de cambios fueron los banqueros y los grandes empresarios. Los centros patronales más reaccionarios —de Monterrey, Guadalajara, Jalisco, Puebla—, se proponen inmediatamente llevar a cabo un paro para confrontar agresivamente al gobierno.

El 3 de septiembre de 1982 el Consejo Coordinador Empresarial publica un manifiesto en el que señala: “La estatización de la banca es un golpe definitivo a la actividad empresarial y una señal clara de la entrada del país al socialismo”. Sostenía, además, que el socialismo “reúne en el gobierno todo el poder económico y todo el poder político”, lo cual convertía al Estado mexicano en un gobierno “totalitario”.²⁸

Además, el CCE responde a esa medida convocando a las reuniones “México en la libertad”, las cuales tuvieron lugar en diversas ciudades de provincia; con el fin de invitar abiertamente a la población a desplegar movilizaciones políticas para frenar los “ímpetus socializantes” del gobierno mexicano.

Las facciones más radicales de la iniciativa privada del país, como las de Puebla y Monterrey, aprovecharon las reuniones de “México en la libertad” para convencer a sus correligionarios de la necesidad de detener el autoritarismo estatal, que había llegado al extremo de decretar una medida de carácter “socialista” como la nacionalización de la banca.

Estas reacciones, obviamente, no obedecían sólo a la indignación de los sectores más beligerantes de la burguesía mexicana ante la nacionalización de la banca, sino en realidad eran un resultado del proyecto que éstos venían forjando desde varios años atrás, enderezado a acceder al poder político.

Es en ese contexto cuando algunos de los sectores empresariales más poderosos del país deciden apoderarse del PAN, tomando en cuenta el gran ascendiente que esta organización tenía en las clases medias, en el sector privado y en amplias capas de la población católica.

Tales sectores abrirían paso al fenómeno conocido como “neopanismo”, hecho que provoca una profunda reacción por parte de la “vieja guardia” de dicho partido. El PAN, no obstante su política de oposición al gobierno, no había sido una organización que aspirase a la toma del poder, sino más bien perseguía el propósito de contribuir a la formación de una cultura democrática y humanista. La famosa frase de Manuel Gómez Morín —uno de sus principales “padres fundadores”— de que la lucha del PAN era “brega de eternidad” condensa muy bien esa aspiración.

Ahora bien, al apoderarse del PAN los principales grupos patronales del país, como era de esperar, se produjo una gran contradicción entre el ideario de ese partido y su plataforma programática. Roger Bartra describe en términos muy gráficos esta situación:

Hay una contradicción o al menos una gran diferencia, entre los principios doctrinarios del PAN y su plataforma programática (actual). La doctrina, cuyo origen se encuentra en el humanismo cristiano, plantea esencialmente reordenar o redistribuir el poder político, en función de unos cuantos supuestos básicos sobre la dignidad de la persona humana, el bien común y la familia. De ahí se desprende que la iniciativa privada es la más viva fuente de mejoramiento social, que las funciones políticas deben jerarquizar de acuerdo con el bien común y que la familia debe tener la preeminencia natural sobre todas las demás formas sociales. Pero, en contradicción con dicho ideario, la plataforma programática del PAN —del neopanismo, se podría decir— tiene un carácter

completamente diferente... El eje del discurso programático lo forman la democracia y el cambio estructural... *El viejo solidarismo sobrevive dificultosamente... ahora se habla más bien del bien común nacional... Esta nueva actitud del PAN expresa un cambio en la política de la derecha. Ahora hay una tendencia agresiva que renuncia al viejo solidarismo doctrinario y de vigilantismo en la sociedad civil, con el objeto de presionar al gobierno para evitar desviaciones de izquierda.*²⁹

De esa forma, pues, a finales de los ochenta el PAN deja de ser la tradicional organización de las “clases medias decentes, educadas y cristianas”, para convertirse en una organización controlada por las agrupaciones patronales más radicales, que consideraron que había llegado la hora de dejar atrás el pacto no escrito que había surgido entre los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana y el sector privado, en el sentido de que los primeros se dedicarían a gobernar, y el segundo a hacer negocios. Este pacto fue respetado hasta los ochenta. A partir de la nacionalización de la banca, las agrupaciones patronales mencionadas deciden, de una vez por todas, tomar el poder, para no estar expuestos a las veleidades populistas y “socializantes” del régimen.

Fue en las elecciones presidenciales de 1988 cuando cristaliza el proyecto de referencia. El candidato del PAN fue Manuel J. Clouthier. A partir de entonces se evidenció que los sectores empresariales más beligerantes del país —comenzando por los de Puebla, Jalisco y Monterrey— estaban dispuestos a apoderarse de ese partido con el objeto de convertirlo en su principal instrumento para arribar al poder político.

La “vieja guardia” panista, a partir de esa coyuntura, comenzó a ser desplazada por los grupos empresariales que se apoderan del blanquiazul fenómeno que —sin temor a equivocarnos— tiene su “laboratorio” en Puebla.

La “colonización” del PAN en Puebla por los grupos patronales

Unos meses antes de tomar posesión, el presidente electo Miguel de la Madrid se esfuerza por reconquistar la buena voluntad del sector privado, prometiendo todo un cúmulo de iniciativas orientadas a ese propósito. De este modo, los dirigentes empresariales suspenden las reuniones de “México en la libertad”. El entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Manuel J. Clouthier, declaró en noviembre de 1982 que “los empresarios se encontraban tranquilos en espera del nuevo gobierno”.³⁰

Cuando el presidente de la Madrid anuncia que se indemnizaría adecuadamente a los banqueros expropiados, Clouthier expresó que tal iniciativa “constituía un signo positivo que permitiría la recuperación de la confianza empresarial, ya que sin paz y tranquilidad la economía nacional no podía funcionar”.³¹

Además, los diversos círculos de la iniciativa privada del país asumieron complacidos las primeras señales del gobierno federal de dar “una vuelta de tuerca” en lo que concierne a las políticas estatistas, que habían conducido a lo que se denominó el “Estado obeso”. Esto había de reflejarse particularmente en el Tercer Informe de gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, donde señala que “la multiplicación de las empresas públicas debilitó al Estado al desequilibrarlo financieramente, al limitar su capacidad de atender suficientemente sus responsabilidades primordiales”.³²

En Puebla, sin embargo, la política contemporalizadora del gobierno federal no convence a las facciones radicales de la iniciativa privada, las cuales insisten en la necesidad de pasar a la acción política directa, para evitar que el Estado continuase adoptando medidas “socializantes”.

En su visita a Puebla, en febrero de 1983, el presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial Manuel J. Clouthier había declarado que, ante la crisis que sufría el país,

“la única salida era el sacrificio”. Señaló, asimismo, que los empresarios no debían realizar “políticas partidistas”.³³

Diversos empresarios poblanos vinculados con la derecha recusaron tales palabras, arguyendo que, por el contrario, más que nunca se requería que los hombres de negocios participaran en la vida política. Uno de ellos fue el ingeniero Ricardo Villa Escalera —presidente de la Cámara Textil de Puebla— quien expresó, de manera tajante: “a pesar de todo lo que se diga, es necesario participar en política, porque mientras los empresarios estaban dedicados a sus empresas y no se metían en política, ‘ya ven lo que pasó... ¿qué pasó?... Pues que México está hundido en la crisis’ ”.³⁴

En junio de 1982 Villa Escalera había anunciado su intención de lanzarse como candidato “independiente” a la presidencia municipal de Puebla en el proceso electoral que se llevaría a cabo el año siguiente. Lo de “independiente” era una baladronada, ya que el presidente de la Cámara Textil tenía planeado lanzarse como candidato del PAN, a la espera de que fructificasen las maniobras que realizaban un grupo de empresarios vinculados a ese partido, tendientes a superar el obstáculo que representaba el hecho de que aquél no era militante del blanquiazul.

Pero, si bien es verdad que dicha situación —esto es, el hecho de que Villa Escalera no fuese miembro del PAN— constituía una óbice para su candidatura, el verdadero desafío no estribaba en superar esta cuestión, sino otra, muchísimo más compleja: las resistencias que manifestaban los panistas de la “vieja guardia” a aceptar que un empresario vinculado con los grupos más recalcitrantes de la derecha se convirtiera en su candidato a la presidencia de la ciudad capital.

Para esto es necesario señalar —y a este respecto permítame el lector la siguiente digresión— que los panistas tradicionales de Puebla ya comenzaban a mostrar una gran

preocupación por lo que parecía un intento inequívoco de los altos mandos del PAN por abrirle de par en par las puertas del partido a aquellos núcleos empresariales que habían destacado en la lucha contra la nacionalización de la banca y en otros movimientos tendientes a impedir que el gobierno mexicano continuase con sus políticas “socializantes”. Villa Escalera se convirtió en la “punta de lanza” de dichos núcleos empresariales.

Los primeros indicios de tal intento se presentaron en 1983, cuando la COPARMEX intentó infiltrar a varios de sus miembros en los comités de los dos distritos de Puebla (en esa época solamente eran dos). Entre ellos se encontraban los hermanos Óscar y Héctor Vera, Alfonso Torres, Wilfredo Mejía, Agustín Ortiz, José Luis Mantilla y Francisco Fraile García, vinculados a dicho organismo empresarial. Este último era presidente del Comité Coordinador de la Ciudadanía Poblana, organismo que llevaba las mismas siglas de la tristemente célebre organización que utilizó la derecha en los sesenta para golpear al movimiento democrático. ¿Por qué la ciudadanía poblana revivió a este organismo? Por dos razones. Por un lado, porque el sucesor del mismo, el Consejo Coordinador Permanente de la Ciudadanía Poblana estaba envuelto en una tremenda ola de desprestigio, por el funesto papel que había adoptado como aliado del gobernador Baustista O’Farril. Por otro, porque la derecha necesitaba de un organismo que se diese a la tarea de convencer a la ciudadanía de que el próximo candidato del PAN a la presidencia municipal —que, como dijimos, apuntaba a la persona de Ricardo Villa Escalera— no sería sólo un candidato del PAN, sino “un candidato de todos los ciudadanos”, estrategia que también adoptó Manuel J. Clouthier en la campaña presidencial de 1988.

Al advertir el intento de los sectores empresariales más beligerantes de apoderarse de su partido, los panistas tradicionales cerraron filas, no solo entre sus miembros sino también

entre sus bases, frustrando la operación. Esto no les fue difícil, ya que eran ellos los que tenían el control del partido en la entidad, gracias al trabajo de varias décadas que llevaban realizando día a día, y en condiciones no precisamente fáciles, ya que en ese tiempo el blanquiazul aún no recibía prerrogativas económicas por parte del gobierno. En contraste, los advenedizos que intentaba infiltrar la COPARMEX nunca habían sido templados por el sacrificio ni la abnegación que exigían las tareas del partido (al que, por cierto, nunca habían pertenecido).

Entre los miembros más destacados de la “vieja guardia” del blanquiazul en Puebla destacaban, en particular, Rosalía Ramírez, Teodoro Ortega, Pedro Soto Dorantes y Alejandro Cañedo Benítez, quienes compartían el viejo ideario humanista y testimonial del PAN, oponiéndose tenazmente al intento de convertir al partido en una organización al servicio de los núcleos más recalcitrantes del sector privado.

No tardó en llegar el momento en que habrían de convertirse en los “enemigos a vencer” de los núcleos empresariales que buscaban apoderarse del partido, en colusión con los “altos mandos” del mismo. Al constatar éstos que su esfuerzo por infiltrar los comités distritales era inútil, decidieron entonces recurrir a otra maniobra: esto es, buscaron la manera de imponer la candidatura de Ricardo Villa Escalera a la presidencia municipal de Puebla en el proceso electoral de noviembre de 1983, concientes de que, de lograr este objetivo, tendrían en sus manos el control del aparato del partido y la dirección de la campaña. El candidato de la “vieja guardia” era Alejandro Cañedo Banítez.

Sin embargo, se enfrentaron al siguiente problema: ¿cómo lograr imponerse en la asamblea de referencia, siendo que en la misma predominaban los simpatizantes de la “vieja guardia”? Esta cuestión no la hubieran podido resolver a través de los métodos legales, respetando los estatutos y los procedimientos

tradicionales del partido. Frente a este dilema, decidieron pasar por encima de estos “pruritos” recurriendo a una práctica que hasta entonces era desconocida en la vida interna del PAN en Puebla: impusieron descaradamente como “representantes” a personas que no tenían nada que ver con el partido, situación que propició una enérgica protesta por parte de los representantes electos democrática y legalmente, de acuerdo con los estatutos del partido. Así las cosas se armó un ambiente de provocación que estuvo a punto de llegar a los golpes entre las corrientes enfrentadas. Pese a los “acarreados” que infiltró el grupo que intentaba imponer la candidatura de Villa Escalera, éste no logró la mayoría necesaria para derrotar a los seguidores de Cañedo Benítez. Los estatutos establecían que se requería de 65 por ciento de los votos. Si ninguno de los candidatos lograban este porcentaje después de tres rondas, entonces el Comité Ejecutivo Nacional decidía al respecto. Ni Cañedo Benítez ni Villa Escalera lograron superar tal requisito, por lo cual la dirección del PAN se inclinó por este último.

Fue así como se inició el reinado del neopanismo en Puebla. A partir de ese momento los grupos empresariales que habían encabezado a la derecha poblana se apoderaron del PAN, desplegando más adelante todo un cúmulo de artilugios enderezados a excluir a los panistas tradicionales. Éstos, pese a la derrota, cerraron filas, esperando a corto o mediano plazo recuperar las posiciones perdidas. El único de ellos que defecionó fue David Bravo Cid de León, quien decidió pasarse al bando de los neopanistas. Como premio se le nombró coordinador de la campaña electoral de Villa Escalera.

Una vez logrado su propósito, los nuevos “dueños” del partido se dieron a la tarea —con la bendición del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del mismo— de sancionar la participación del DHIAC y de la ANCIFEM en la campaña electoral de Villa Escalera.

Los panistas tradicionales, como decíamos, no doblaron la cerviz, decidiendo darle la batalla a los núcleos derechistas que pretendían convertir a su partido en un ariete al servicio de los empresarios. En todos esos años dieron batallas importantes que, aunque no culminaran en triunfos, les permitían mantenerse como una fuerza de oposición al interior del PAN, logrando así denunciar las maniobras del neopanismo.

Un factor vino en su ayuda, esto es, la espectacular declaración que formuló Pablo Emilio Madero —el entonces presidente nacional del blanquiazul— en el Consejo Nacional que se efectuó en 1986, en la cual denunció enérgicamente el intento de los grupos empresariales más poderosos del país por convertir al PAN en una organización a su servicio, refiriéndose en particular a los artilugios que desplegaron organismos como la COPARMEX tendientes a colocar a sus cuadros en los principales puestos de mando del partido.

Tal declaración tuvo un gran impacto, principalmente en el electorado panista, pero a esas alturas los grupos empresariales que buscaban apropiarse del blanquiazul ya habían logrado su propósito, tal como se puso de relieve en el cambio de la dirigencia nacional del partido que se llevó a cabo en 1987, cuando logran imponer a Luis H. Álvarez como presidente del mismo. Éste, al poco tiempo de arribar al cargo, no tardó en poner en marcha una compañía de hostigamiento contra los panistas tradicionales, principalmente contra los de Puebla. Así, en el Consejo Nacional de 1989, sacó adelante la propuesta de suspender de sus derechos partidarios a los tres diputados federales de Puebla, esto es, Jesús Bravo Cid de León, Juan José Medrano y Rosalía Ramírez, por el “delito” de oponerse a las maniobras del neopanismo en su entidad. La misma medida se aplicó a los dos diputados locales del PAN en Puebla, esto es, Teodoro Ortega y Gabino B. Delgado.

En 1989, frente a las hostilidades de Luis H. Álvarez y de la mayoría de los miembros del Comité Nacional del partido, los panistas sancionados, de acuerdo con otros sectores del panismo tradicional del país, deciden crear el Foro Doctrinario y Democrático, no sólo con el objeto de paliar las hostilidades de Luis H. Álvarez y de la mayoría de los miembros del Comité Nacional del partido, sino también —y fundamentalmente— con el propósito de defender y reivindicar el auténtico ideario del PAN, que como señalamos en líneas anteriores, no buscaba convertir al partido en un simple instrumento político para arribar al poder —y menos para facilitar la llegada al poder de los principales grupos empresariales del país—, sino pretendía sobre todo humanizar la política en México, generando condiciones —sobre todo de tipo espiritual y cultural— para que la lucha por el poder no fuese una simple lucha de facciones, sino una lucha por elevar la conciencia democrática del pueblo mexicano.

Sus esfuerzos logran un importante triunfo en marzo de 1992, cuando sus allegados se convierten en la corriente mayoritaria en la Asamblea Estatal que se realiza en ese año, la cual fue convocada con el propósito de renovar la dirigencia del PAN en Puebla. Los panistas tradicionales ganaron los 40 delegados por los que se votó en la asamblea.

Frente a tan apabullante derrota los neopanistas —encabezados por Francisco Fraile García, Jorge Ocejo Moreno, Teresa Aranda y Antonio Lezama— recurrieron entonces a un ingenioso —aunque no menos pérfido— ardid. Aparentando humildad, decidieron entablar negociaciones con el grupo liderado por Teodoro Ortega, con el fin de buscar un arreglo político enderezado a superar la división que enfrentaba el partido. Fue Fraile a quien aquéllos nombraron para tal misión y quien, fingiendo aprensión por las hostilidades que había desatado la dirección nacional contra la “vieja guardia” del PAN en el estado, planteó que había llegado la hora de superar ese tipo de situaciones, en

aras del beneficio de todos los panistas poblanos. Ortega aceptó encantado la propuesta, sin advertir las aristas peligrosas de la misma, o mejor dicho sin sentir la trampa preparada por Fraile. El acuerdo a que se llegó fue el siguiente: los panistas tradicionales, en una muestra inequívoca de buena fe, decidieron ofrecerle al grupo de Fraile la mitad de los delegados que les correspondían, para que de ese modo ambas corrientes quedaran “empataadas” en el Consejo Estatal, con 20 delegados cada una. Se llegó, además, a un “compromiso de honor”: la presidencia y la secretaría del partido serían asumidas por una u otra corriente, y ambas se comprometían a respetar de manera absoluta los principios y estatutos del partido.

La propuesta satisfizo —aparentemente, y en unas líneas más diremos por qué— a todo el mundo, incluyendo a la dirección nacional, quien para mostrar su beneplácito con la misma decidió enviar a la asamblea resolutive a dos representantes del alto mando panista, esto es, a Antonio Lozano Gracia y Felipe Calderón Hinojosa.

A la semana siguiente el acuerdo citado se sometió a la consideración del Consejo Nacional del PAN, y, para desconcierto —e indignación— de los panistas tradicionales, Luis H. Álvarez vetó a Teodoro Ortega y a otro de los consejeros de esta corriente, maniobra que obviamente perseguía el objetivo de que los neopanistas quedaran en mayoría. El CEN decidió imponer una vez más a Francisco Fraile como presidente del partido en Puebla.

Fue así como la “vieja guardia” del panismo poblano, aparte de percatarse de su ingenuidad —era obvio que los neopanistas poblanos estaban coludidos con Luis H. Álvarez—, llegó a la conclusión de que ya eran inútiles sus esfuerzos por sacudir al partido del neopanismo : a todas luces esta corriente ya no estaba dispuesta a soltar el timón del partido, llegando incluso a poner en entredicho el honor de sus miembros con tal de afianzarse en

el mismo (tal como lo puso de relieve el atropello al “compromiso de honor” que se había firmado entre Fraile y Ortega).

Al ver perdidas sus esperanzas de recuperar al partido, la “vieja guardia” panista de Puebla decide, finalmente, abandonar al PAN, iniciativa que fue imitada poco después por la mayoría de los panistas tradicionales del país, quienes, como ya lo señalamos, habían creado el Foro Doctrinario y Democrático. En 1992 toman la decisión de convertir a este organismo en una asociación política a nivel nacional.

Pocos años después habrían de palpase las consecuencias del entronizamiento del neopanismo en el partido fundado por Manuel Gómez Morín: tal corriente comenzó a poner en marcha las tristemente célebres “concertaciones” con el presidente Carlos Salinas de Gortari, gracias a las cuales se le abrió paso, entre otras cosas, a la contrarreforma agraria —con la modificación del artículo 127—; al fortalecimiento de la iglesia católica —con la modificación del artículo 130—; a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), y a otras iniciativas que llevarían a la coronación del proyecto neoliberal, enderezado a sancionar el desarrollo del capitalismo salvaje en México y a fortalecer la dependencia económica del país respecto a los Estados Unidos.

En Puebla el triunfo del neopanismo se manifestó en el fortalecimiento de todos aquellos grupos empresariales que se habían propuesto el arribo al poder político, proyecto que, como indicamos en páginas anteriores, surgió a partir de la caída de Bautista O’Farril en 1973.

La derrota de Villa Escalera en 1983 y el irresistible ascenso electoral del neopanismo en años posteriores

El neopanismo en Puebla logró un triunfo decisivo en la coyuntura electoral de 1983, cuando lanzó como candidato a la presidencia municipal al empresario textil Ricardo Villa Escalera. La campaña

electoral de éste se basó en intensas movilizaciones, visitas familiares, una lluvia de propaganda, y, sobre todo, en la explotación inteligente del malestar popular hacia los gobiernos emanados del PRI, logrando, en efecto, penetrar ampliamente, no sólo en los sectores tradicionales del PAN, sino también en otros sectores del electorado irritados por la crisis económica.

El candidato del PRI, Jorge Murad Macluf, un hombre respetado y de trayectoria democrática, no pudo frenar la impetuosa ola que se creó en torno a Villa Escalera. Éste logró, indiscutiblemente, un triunfo avasallador. Ante esa situación, el partido gobernante tuvo que hacer gala de su experiencia en maquinaciones electorales para revertir los resultados a su favor. Era un rumor a voces que el PAN había triunfado con una ventaja no menor al 70 por ciento de la votación, pero los “mapaches” del PRI, haciendo gala de sus conocimientos en “alquimia” electoral, se las ingeniaron para revertir los resultados.

Se anunció el resultado oficial a finales de enero de 1984. Las autoridades electorales presentaron las siguientes cifras: 66.8 por ciento de los votos al PRI, 30.2 por ciento al PAN y 2.6 por ciento para el resto de la oposición (PSUM, PST, PPS).

Se trató, sin duda, de uno de los más grandes fraudes electorales en la historia moderna de Puebla.

Como era de esperar, ello provocó la indignación de los neopanistas, quienes, además de organizar diversas manifestaciones de protesta, impulsaron algunas acciones violentas que estuvieron a punto de convertir a Puebla en una entidad sacudida por la violencia.

Frente a esa situación el gobernador Guillermo Jiménez Morales tuvo que recurrir a las argucias típicas del PRI para enfrentar ese tipo de situaciones: por un lado se dio a la tarea de “mediatizar” a los principales grupos empresariales que apoyaban a Villa Escalera a través del consabido recurso de la obra pública y, por otro, se las ingenió para echarle leña al

fuego de las contradicciones que existían entre el fogoso líder empresarial y el dirigente estatal del PAN, Alejandro Cañedo Benítez; contradicciones que —como indicamos en párrafos anteriores— iban más allá de problemas personales: obedecían a las concepciones diferentes que enarbolaban acerca del papel que debía desempeñar el partido. Mientras que Villa Escalera encarnaba el espíritu de las corrientes empresariales que buscaban apoderarse del partido para convertirle en un ariete de sus ambiciones políticas —corrientes que poco después le abrirían paso al fenómeno conocido como “neopanismo”—, Cañedo Benítez representaba a las viejas corrientes del PAN para quienes el partido debía limitarse a promover su mensaje testimonial y a ser la “conciencia crítica” del país, de acuerdo con las tesis de sus “padres fundadores”.

El gobierno explotó hábilmente tales contradicciones logrando, a corto plazo, que surgiera todo un cúmulo de fisuras al interior del PAN, gracias a las cuales se apagaron en apariencia los rescoldos de la hoguera social surgida al calor del fraude contra Villa Escalera. Y subrayo lo de “en apariencia” porque pocos años después el neopanismo se arrancaría la espina, o si se prefiere “la lanza”.

Los comicios de 1983, sin duda, se encuentran entre los más disputados en la ciudad de Puebla. Pese a que el PRI logró conseguir el triunfo, no pudo sacudirse el estigma de la derrota. En los hechos, como anota Pansters, “fue el perdedor moral y político”.³⁵

El gobernador Jiménez Morales —como decíamos— hizo todo lo posible para reconquistar la buena voluntad de los grupos empresariales, dándoles una montaña de concesiones. Esto se reflejó en las elecciones de 1985 para renovar el Congreso Federal y en las elecciones municipales de 1986, en las que ganó el PRI sin dificultad. Estos comicios se caracterizaron por transcurrir casi en completa calma, aunque eso sí, se destacaron

por el alto grado de abstencionismo. Mientras que en 1985 el porcentaje de dicho fenómeno casi llegó al 50 por ciento, en las elecciones municipales de 1986 alcanzó un porcentaje del 70 por ciento.³⁶

No cabe duda que el PRI se dejó engañar por los triunfos alcanzados en esos comicios, no advirtió que el abstencionismo encerraba un peligro potencial. En apariencia el PAN había sido el principal afectado por ese fenómeno, puesto que entre 1983 y 1986 perdió 35.6 por ciento de los sufragios obtenidos en los primeras elecciones.³⁷ Esto llevó seguramente a la dirigencia del tricolor a pensar que el blanquiazul ya estaba acabado, debido, reiteramos, a las políticas conciliatorias del gobernador Jiménez Morales y del presidente municipal Murad Macluf. Parecía, pues, que se había logrado neutralizar a los sectores de la iniciativa privada que habían respaldado a Villa Escalera en los comicios de 1983, pero, lo cierto es que el marcado abstencionismo de los comicios de 1985 y 1986 no fue sino un síndrome del deterioro político que ya enfrentaba el PRI, sólo que éste se encandiló con los triunfos obtenidos en los mismos.

Los grupos más radicales del sector privado nunca habrían de olvidar la herida de 1983, redoblando sus esfuerzos por arribar al poder político con la ayuda del PAN, que para esos años ya estaba plenamente copado por los grupos empresariales que fomentaron el neopanismo.

En años posteriores, si bien el PRI continuó obteniendo triunfos importantes —como sucedió, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 1988, en las que Puebla fue una de las pocas entidades que no sucumbió al torrente que despertó la candidatura del candidato del Frente Democrático Nacional (FDN), Cuauhtémoc Cárdenas—, lo cierto es que no ha logrado modificar sustancialmente su presencia electoral. El PAN, por el contrario, ha logrado incrementar de manera notable su votación.

Véase, al respecto, el siguiente cuadro elaborado por Raymundo García García, uno de los principales investigadores de los fenómenos electorales en el estado de Puebla.

Movimiento electoral municipal del estado de Puebla³⁸

Partido	1977	1980	1983	1986	1989	1992	1995
PAN	55 mil 617	45 mil 474	124 mil 369	83 mil 722	94 mil 073	166 mil 217	429 mil 993
PRI	548 mil 780	523 mil 847	694 mil 248	503 mil 836	435 mil 905	605 mil 332	574 mil 835
PPS	20 mil 185	8 mil 121	5 mil 184	9 mil 615	15 mil 270	18 mil 256	11 mil 520
PARM	15 mil 741	4 mil 503	—	3 mil 706	8 mil 568	14 mil 337	—
PDM	—	2 mil 608	5 mil 851	5 mil 453	—	—	—
PST/FCRN	—	3 mil 189	10 mil 876	8 mil 105	17 mil 332	22 mil 627	14 mil 485
PCM/PSUM CDI/PRD	—	17 mil 502	12 mil 233	15 mil 085	39 mil 516	54 mil 231	117 mil 162

Como se observa a simple vista, mientras que en los años de referencia el PRI mantuvo un electorado casi fijo —a excepción de los años de 1983 y de 1992— el PAN casi decuplicó su votación en dicho lapso.

En los comicios de 1995 el PAN —como señalamos en párrafos anteriores— triunfó en los principales municipios de la entidad, incluyendo el de la ciudad capital.

En los comicios de 1998, siendo gobernador del estado Manuel Bartlett Díaz, el PRI de nuevo gana casi de “carro completo” —y decimos que casi porque le fue arrebatada a última hora la presidencia municipal de Huejotzingo—, pero en el proceso electoral de 2000 el PAN vuelve a recuperar las posiciones perdidas.

En las elecciones municipales de 2001 el PAN triunfa en el municipio de Puebla, siendo abanderado suyo a la presidencia de la ciudad capital Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, uno de los más beligerantes líderes de la derecha poblana en los años setenta, de quien hablamos ampliamente en el capítulo III.

De esta forma, pues, todo parece indicar que ha comenzado a cristalizar el sueño de los círculos más beligerantes de la burguesía poblana, de arribar al poder político, para conjugarlo con su poder económico.

Cierto es que en nuestros días la burguesía poblana ha experimentado muchos cambios y transformaciones. Algunos de sus sectores que respaldaban a la derecha en los setenta decidieron respaldar al PRI, como es el caso de los llamados “hombres del cambio”, que participaron en la administración de Rafael Cañedo Benítez (1993-1996).

No pocos de sus líderes más sobresalientes, como es el caso de Eduardo García Suárez y Ricardo Villa Escalera, abanderaron otro tipo de proyectos (éste último se ha acercado al PRD, el cual lo postuló como candidato suyo al gobierno del estado en las elecciones de 1998).

En la actualidad la derecha poblana se ha diferenciado de manera notable, a tal grado que sería más correcto hablar de las derechas. Empero, en lo fundamental, el sector de dicha expresión

que ha conquistado en los últimos años algunos de los principales espacios políticos del estado —como el municipio de Puebla— es la misma fuerza que se propuso el asalto al poder desde mediados de los setenta. Me refiero, en concreto, al grupo que encabeza el actual alcalde de Puebla, Luis Eduardo Paredes Moctezuma.

Otra fuerza importante es la derecha de origen guajuatense, representada por Ana Teresa Aranda de Orea, que constituye uno de los pilares en que se sustenta el grupo del edil poblano.

La dirección estatal del PAN asume a finales de los ochenta la dirección política de la derecha, o mejor dicho de las derechas, respaldada por “organizaciones intermedias” como el DHIAC, ANCIFEM, Coordinadora Ciudadana, Vertebra, etcétera, que se convierten en los engranajes, en las palancas de apoyo a la política del blanquiazul en el terreno de la sociedad civil.

Hemos descrito a grandes rasgos el itinerario de dicho proyecto, señalando solamente algunos hechos y etapas que nos parecen decisivas para la cristalización del mismo. Desde luego tal proyecto no surge o se consolida en esas etapas, sino va madurando a través de un complejo proceso ideológico y político que no es posible detectar solamente a través de determinado periodo histórico.

La política de los neopanistas hacia las instituciones públicas de nivel superior

Los neopanistas, al igual que sus hermanos gemelos, los tecnócratas que se enquistaron en el gobierno desde el arribo de Miguel de la Madrid a la presidencia de la república, se caracterizan por su hostilidad hacia las universidades públicas del país, a las que consideran un obstáculo para sus planes de insertar a México entre las naciones del primer mundo. Para ellos el modelo a seguir es la universidad norteamericana, por

el hecho de estar diseñada para proporcionar los cuadros profesionales que requieren las empresas. De ahí que no sea de ningún modo casual que no oculten sus simpatías hacia aquellas instituciones privadas del país que se acerquen a ese modelo. Como escribe el destacado filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, esos sectores

persiguen una alternativa a la educación superior que responda, no a los intereses de toda la sociedad, sino solo a los de un sector privilegiado de ella, ¿cuál? El sector que de acuerdo con sus intereses particulares sólo ve al ser humano como *homo economicus*, y a la libertad omnímoda del mercado. A esta concepción del hombre y de la libertad únicamente puede corresponder una universidad “rentable”, en la que sobren las carreras “superfluas” de las humanidades, cuyos beneficios no pueden contabilizarse en términos de mercado.³⁹

Ahora bien, la llegada a la presidencia de la república de Vicente Fox ha sido asumida por los neopanistas —y, desde luego, por no pocos sectores de la tecnocracia— como una ocasión excelente para impulsar sus planes en el terreno de la educación superior, entre los que destaca el proyecto de privatizar a las universidades públicas, aunque habría que aclarar al respecto que por esto tales sectores no entienden la venta o el traspaso de tales instituciones al sector privado, tal como ha sucedido con las empresas paraestatales; más bien intentan despojarlas de su carácter de instituciones creadas con el objeto de servir a toda la nación, transformándolas en instituciones que se limiten a formar cuadros profesionales imbuidos del *know how* que requieren las principales empresas nacionales y extranjeras.

Aunque aún el gobierno de Fox no ha presentado un proyecto concreto respecto a la educación superior, lo cierto es que algunos de sus funcionarios han adelantado algunos

planteamientos en esa dirección. Es el caso, por ejemplo, de la propuesta —que surgió hace unos meses, en la Secretaría de Educación Pública— encaminada a respaldar a las universidades privadas, no a través de subsidios especiales, sino mediante estímulos indirectos como el otorgamiento de becas a estudiantes destacados quienes, según esto, tendrían plena libertad para decidir acerca de las instituciones de educación superior en las que realizarían sus estudios profesionales. Es obvio que este tipo de iniciativas no persiguen sino el propósito de apuntalar a las universidades particulares, por más que se asegure que las mismas no intentan perjudicar a las instituciones públicas de educación superior.

En contrapunto a ese tipo de iniciativas, algunas autoridades importantes del gobierno foxista han comenzado a plantear en diversos foros la necesidad de que las universidades públicas se desprendan de aquellas carreras que no contribuyen a las necesidades del mercado, como es el caso de las carreras humanísticas. Así, en el marco de la V Reunión Ordinaria del Consejo Regional Centro-Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) —que se llevó a cabo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en los primeros días de noviembre de 2001— el coordinador general del Plan Puebla-Panamá, Florencio Salazar Adame, planteó que había llegado la hora de que las instituciones públicas de educación superior desestimulasen su oferta de carreras humanísticas, “cuando lo que se debe hacer es reformar los planes de estudios y promover la instrucción técnica y tecnológica”.⁴⁰

Ironizando sobre ese tipo de proyectos, el exrector de la UNAM, Pablo González Casanova, comenta acerca de los grupos conservadores que arriban al poder en México:

...proponen como paradigma una universidad en la que la cultura general o flexible se limite a atender el idioma (a veces sólo se menciona el inglés), la computación y las matemáticas, sin inclusión de la antropología, la filosofía, la lógica, la economía, o con algunas de ellas cuidadosamente despojadas de cualquier pensamiento crítico y, sobre todo, de cualquier método histórico-político para pensar, investigar, comprobar, desechar, confirmar, hacer, probar, mejorar... *En formas subliminales y expresas, se pide que nada disfuncional al sistema dominante se aprenda.*⁴¹

Contra tal concepción de universidad se han alzado, a nivel nacional, varias voces, entre ellas el rector de la BUAP, Enrique Doger Guerrero, el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, y el actual secretario general de la ANUIES, Jorge Luis Ibarra Mendívil, quienes no sólo se han limitado a la defensa de las universidades públicas, sino han planteado también la necesidad de que éstas se transformen de acuerdo a los signos de los tiempos, empero sin perder su carácter de instituciones diseñadas para contribuir a la solución de los grandes problemas nacionales. Precisamente en la citada V Reunión Ordinaria del Consejo Regional Centro-Sur de la ANUIES, el rector de la BUAP recusó enérgicamente el planteamiento de Florencio Salazar Adame, en el sentido de que las carreras humanísticas son innecesarias; sosteniendo, por el contrario, que éstas sí desempeñan un papel de fundamental relevancia en la vida del país y del estado de Puebla. Le exigió, además, al gobierno federal, apoyar financieramente a las instituciones públicas de educación superior, en lugar de impulsar iniciativas orientadas al fortalecimiento de las universidades privadas. La postura de Doger Guerrero fue respaldada por la mayoría de los rectores presentes y por el secretario general de la ANUIES.

Unos meses antes, en su carácter de único orador en la ceremonia conmemorativa del 139 aniversario de la Batalla del

5 de Mayo de 1862, Doger Guerrero expuso algunos planteamientos destinados a rechazar la concepción de universidad que enarbolan los sectores conservadores del país:

En la medida en que logremos la incorporación de mayor número de mexicanos a la educación elevando la calidad de la formación que se les brinde, el desarrollo aparecerá como una meta real y accesible... Entender la educación como elemento multiplicador del desarrollo, es condición ineludible para preservar la soberanía nacional. Sólo una sociedad más y mejor preparada, con mayor acceso a la tecnología, y a los beneficios de la ciencia, podrá enfrentar en mejores condiciones los desafíos del nuevo siglo, y podrá alcanzar mayores niveles de bienestar.⁴²

Por otro lado, el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, también ha recusado enérgicamente el proyecto de transformar a las universidades públicas en instituciones que se limiten en formar cuadros para las empresas nacionales y extranjeras. Así, refiriéndose a dicho proyecto, expresó, en agosto de 2001:

Yo lo veo como una gran tentación de caer en un esquema simplista, y pensar que este país va a lograr un desarrollo con justicia sólo formando microempresarios que puedan activar localmente la economía... La Universidad ha formado a muchos de ellos, pero no podemos orientar la educación en un solo propósito, ya que tiene que formar también a sociólogos, psicólogos, químicos y físicos.⁴³

Unos meses antes, en un ensayo sobre tal problemática, el mismo rector de la UNAM subrayaba:

Es preciso insistir en la necesidad de evitar que las leyes del mercado se instalen de lleno en el sistema educativo. Si esto ocurre, la educación superior acabará convirtiéndose en el mejor de los casos en una industria. La polémica es conceptual y define la política educativa de un país: si la educación es un bien público, ¿por qué habría de subordinarse a las leyes del mercado?... Algunas instituciones de educación superior se han convertido ya más en empresas que ofertan sus servicios, que en instituciones que forman recursos humanos, generan conocimientos y difunden la cultura... *El problema de fondo, hay que insistir, es que donde prevalezca la ley del mercado, la educación correrá el riesgo de desnaturalizarse.*⁴⁴

En síntesis, pues, frente al proyecto neoliberal que considera “inútiles” a las universidades públicas, voces autorizadas como las que hemos citado se han dado a la tarea de reivindicar el papel de dichas instituciones, enfatizando que la principal función de las mismas es, reiteramos, preparar cuadros que contribuyan a la solución de los grandes problemas nacionales.

Mientras tanto, la administración de Vicente Fox ha adoptado una política financiera restrictiva hacia las instituciones públicas de educación superior, propiciando que éstas no estén en condiciones de crear nuevas plazas ni de emprender proyectos ambiciosos de investigación científica. La BUAP es una de las instituciones más afectadas por dicha política. En 2002 prácticamente recibió los mismos recursos ordinarios del año anterior y sufrió una merma de cuatro millones de pesos en la partida que recibía del CONACYT, hecho que afectará de manera notable a sus proyectos de investigación.⁴⁵

A sabiendas de los grandes problemas financieros que enfrentan la mayoría de las universidades públicas, la LVIII Legislatura aprobó una partida presupuestal extraordinaria de dos mil 850 millones de pesos, con el propósito de aliviar algunas

de sus principales carencias. Los tecnócratas de la SEP han puesto cientos de obstáculos para que tales recursos lleguen a sus destinatarias.

Pareciera, pues, que se trata de ahogar financieramente a las instituciones públicas de educación superior.

Empero no sólo son dichas instituciones las que han sufrido mermas considerables en sus recursos, sino todo el sector educativo. De acuerdo con datos proporcionados por la diputada Miroslava García Suárez, durante 2001 el gobierno no gastó tres mil 990 millones de lo presupuestado para el rubro de la educación.⁴⁶

Todo parece indicar, en síntesis, que el neopanismo se ha propuesto aprovechar su arribo al poder para dismantelar el sector educativo, en particular a las universidades públicas... ¿Nos mantendremos los mexicanos cruzados de brazos frente a dicha problemática?

¹ Pansters, Will, *op. cit.*, pp. 255, 256.

² Citado por Manjarrez, Alejandro C., en *Puebla, el rostro olvidado*, Grupo Gráfico Editorial, Puebla, 1999, p. 149.

³ *Ibid.*

⁴ Citado por Sotelo, Humberto, en “Los empresarios poblanos y la III CELAM”, en *Crítica*, revista de la Universidad Autónoma de Puebla, núm. 1, octubre-diciembre de 1978, p. 126. Las cursivas son nuestras.

⁵ *Ibid.*

⁶ Basáñez, Miguel, *La lucha por la hegemonía en México (1968-1980)*, Siglo XXI, México, 1982, p. 89.

⁷ Bartra, Roger, *El reto de la izquierda*, Grijalbo, México, 1982, p. 40.

⁸ Concheiro, Elvira; Juan Manuel Fragoso y Antonio Gutiérrez, *El poder de la gran burguesía*, Ediciones de Cultura Popular, México, 1979, p. 53.

⁹ Luna Ledesma, Matilde, *Los empresarios y el cambio político, 1970-1987*, Editorial Era-Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 1992, p. 46.

¹⁰ *Cfr.* Sotelo Humberto y Norberto Amaya, *La democracia del dinero*, Editorial Lozada, 1998, p. 68.

¹¹ *Excelsior*, 15 de marzo de 1975.

¹² Manjarrez C., Alejandro, *Puebla, el rostro olvidado*, *op. cit.*, p. 196.

- ¹³ Citado por Sotelo, Humberto, en “Los empresarios poblanos y la III CELAM”, *op. cit.*, p. 126.
- ¹⁴ *El Sol de Puebla*, 7 de noviembre de 1979.
- ¹⁵ *El Sol de Puebla*, 8 de noviembre de 1979.
- ¹⁶ Sotelo, Humberto, en “Los empresarios poblanos y la III CELAM”, *op. cit.*, p. 127.
- ¹⁷ *Ibid*, p.128.
- ¹⁸ Buendía, Manuel, *Pensamiento y acción de la derecha poblana*, *op. cit.*, p. 85.
- ¹⁹ El DHIAC fue impulsado por el mismo fundador de Pro vida, Jaime Aviña Zepeda. Surgió en 1975 como un proyecto para apoyar los intereses de grupos empresariales como COPARMEX y la Unión Social de Empresarios Mexicanos, así como algunos sectores de filiación católica. *Vid.* González Ruiz, Édgar, *La sexualidad prohibida*, *op. cit.*, p. 144.
- ²⁰ *Cambio*, 17 de febrero de 1983. Las cursivas son nuestras.
- ²¹ *Ibid*.
- ²² La ANCIFEM fue formada por un grupo de mujeres provenientes de León, la ciudad de México, Puebla, Monterrey, Querétaro y Veracruz, quienes en noviembre de 1973 organizaron el Primer Congreso Nacional Cívico Femenino con apoyo de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPD). En 1975 se constituyó como asociación civil. *Vid.* Édgar González Ruiz, *op. cit.* p. 146.
- ²³ *Cambio*, 13 de diciembre de 1996.
- ²⁴ *Momento*, 10 de diciembre de 1996.
- ²⁵ Díaz Cid, Manuel *et al.*, *Autonomía Universitaria*, *op. cit.* p. 83.
- ²⁶ Ibarra García, Abraham, *Los bárbaros del norte, la contra mexicana*, Ediciones Comunicación Meridiana, México, 1988, p. 101. Las cursivas son nuestras.
- ²⁷ González Ruiz, Édgar, *La última cruzada*, Grijalbo, México, 2001, pp. 62, 63.
- ²⁸ *Excélsior*, 3 de septiembre de 1982.
- ²⁹ Bartra, Roger, “La crisis del nacionalismo en México”, en *Revista Mexicana de Sociología*, Año LI, núm. 3, julio-septiembre de 1989, pp. 211, 212. Las cursivas son nuestras.
- ³⁰ Citado por Humberto Sotelo y Norberto Amaya, en *La democracia del dinero*, *op. cit.*, p. 49.
- ³¹ *Excélsior*, 19 de mayo de 1983.
- ³² De la Madrid Hurtado, Miguel, III Informe de Gobierno.
- ³³ *El Sol de Puebla*, 17 de febrero de 1983.
- ³⁴ Citado por Pansters, Will, *op. cit.*, p. 240.
- ³⁵ *Ibid*, p. 244.

³⁶ Melé, Patrice, *Geopolítica del estado de Puebla*, Instituto de Ciencias de la UAP-Gernika, México, 1990, p. 22.

³⁷ *Ibid.*, p. 62.

³⁸ García García, Raymundo, *Puebla, elecciones, legalidad y conflictos municipales (1977-1995)*, BUAP, 1998, p. 225.

³⁹ *La Jornada*, 28 de agosto de 2001.

⁴⁰ *El Sol de Puebla*, 7 de noviembre de 2001.

⁴¹ González Casanova, Pablo, *La universidad necesaria en el siglo XXI*, Editorial Era, México, 2001, p. 23. Las cursivas son nuestras.

⁴² Doger Guerrero, Enrique, “La defensa de la soberanía nacional a través de la educación”, en *Tiempo Universitario*, Gaceta Histórica de la BUAP, núm. 13, 16 de agosto de 2001.

⁴³ *La Jornada*, 29 de agosto de 2001.

⁴⁴ De la Fuente, Juan Ramón, “Perspectivas de la Educación Superior en México”, en *Revista de la Universidad de México*, mayo de 2001. Las cursivas son nuestras.

⁴⁵ *La Jornada de Oriente*, 28 de enero de 2002.

⁴⁶ *La Jornada*, 20 de junio de 2002.

ÍNDICE ONOMÁSTICO

- Abed, familia, 21
Acción Universitaria, AU, 197
Administración de Empresas, escuela de, 86, 141
Administración Pública, escuela de, 66
Aguilar Mora, Miguel, 171
Aguilar, Abel, 197, 198
Aguilera, Cosme, 30
Alarcón Hernández, José, 175
Alarcón, Alfonso G., 10, 36
Alemán, Miguel, 18, 30, 46
Alianza de Camioneros de Puebla, 112
Alianza Fuerza de Opinión Pública (AFOP), 198
Alianza Universitaria, 85
Alonso Ruiz, Teodoro, 126
Álvarez Lozano, Felipe, 192
Álvarez Martínez, Jorge, 196
Álvarez, Luis H., 208, 209, 210
Aparicio, Marco Aurelio, 99, 100
Aranda de Orea, Ana Teresa, 193, 209, 217
Ardavín, Bernardo, 194
Arizmendi, Alfredo, 192
Arquitectura, escuela de, 66, 86, 125, 126, 142
Arriaga Navarro, Joel, 11, 12, 75, 90-100, 107, 109, 112, 134, 135, 138, 139, 140, 143, 152, 169, 170, 191
Arrubarena, J. A., 149
Artes y oficios, escuela de, 36

Asociación de Abogados de Puebla, 141
Asociación de Banqueros de México, 187
Asociación de Charros de Puebla, 111
Asociación de Clínicas y Hospitales Particulares del Estado de Puebla,
147
Asociación de Clubes de Servicio, 112
Asociación de Derechos Humanos, 194
Asociación de Empresarios Textiles de Puebla y Tlaxcala, 128
Asociación de Hoteles y Restaurantes de Puebla, A. C., 111
Asociación de Sanatorios y Clínicas Particulares del Estado de Puebla,
111
Asociación Independiente de Empresarios Mexicanos (AIEM), 188
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, 187
Asociación Nacional Cívica Femenina (ANCIFEM), 193, 194, 195, 207,
217
Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles, 111
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), 119, 123, 219, 220
Aurioles Gamboa, Jaime, 125
Ávila Camacho, Manuel, 109
Ávila Camacho, Maximino, 30, 38, 39, 40, 109, 132, 174, 175, 181, 183
Ávila Camacho, Rafael, 38, 42, 43, 45
Aviña, Jaime, 198
Azcué Bilbao, Karmele, 43
Barrientos, Juan José, 64
Bartlett Díaz, Manuel, 216
Bartra, Roger, 185, 201
Basagoiti, José María, 194
Batalla del 5 de mayo de 1862, 221
Bautista Carrillo, Gonzalo, 40, 109
Bautista O'Farril, Gonzalo, 10, 11, 30, 31, 38, 64, 65, 69, 73, 74, 75, 79, 86,
89, 92, 93, 95, 96, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 120, 130, 131, 133, 134, 135,
139-142, 151, 152, 164, 167, 171-174, 177, 178, 181, 182, 183, 205, 211

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, 42, 219, 220, 222
Benítez, Fernando, 72
Benito Juárez, preparatoria diurna y nocturna, 29, 59, 65, 75, 90, 92,
125, 141
Bernal Saldaña, Teófilo, 142
Bernat Solsona, Francisco, 128, 183
Betancour, Carlos I., 38, 182
Bloque de Estudiantes de Ciudad Universitaria, 66, 85, 120, 126, 127,
130, 136
Bloque Unico de Estudiantes Socialistas, 37
Bravo Ahúja, Víctor, 119, 128, 131
Bravo Cid de León, David, 207,
Bravo Cid de León, Jesús, 208
Budib, familia, 21
Buendía, Manuel, 24, 129, 190
Burgos, Miguel Ángel, 98, 161, 164, 166
Cabrera Barroso, Enrique, 11, 12, 53, 54, 113, 132, 134-141, 143, 191
Cabrera Candia, Guillermo, 105, 136
Calderón Hinojosa, Felipe, 210
Calderón Moreno, Alfonso, 10, 150
Calderón, Miguel, 132
Calvario Gutiérrez, Ramón, 62
Cámara de Diputados del Congreso Federal, 178
Cámara de la Industria de la Construcción (sección Puebla), 111
Cámara de la Industria de la Radiodifusión, 188
Cámara de la Industria de la Transformación, 128
Cámara de la Industria Maderera de Puebla, 112
Cámara de la Industria Textil de Puebla y Tlaxcala, 49, 111, 188, 204
Cámara de la Propiedad Urbana, 111
Cámara Harinero de la Zona de Puebla, 112
Cámara Nacional de Comercio (CANACO), 188, 193
Cámara Nacional de Comercio de Puebla, 111
Cámara Nacional de Hospitales y Sanatorios de Puebla, 111

Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), 111, 148, 188
Cámara Nacional del Comercio en Pequeño del Estado de Puebla, 111
Camarillo Sánchez, Amado, 60, 64
Campos Román, Arturo, 117
Canetti, Elías, 10, 136, 137
Cañedo Benítez, Alejandro, 31, 206, 207, 213
Cañedo Benítez, Rafael, 216
Capistrán, Salvador, 117
Carbajal Caro, Martín, 64, 67, 74, 75
Cárdenas, Cuauhtémoc, 137, 214
Cárdenas, Lázaro, 181
Carrasco, Enrique, 37
Carrasco, Gabriel, 37
Carrillo Estrada, Francisco, 142
Carrillo Sánchez, Jesús, 62
Casados Guzmán, Guillermo, 125
Castillo Hernández, Rubén del, 142
Castillo, Heberto, 139
Cecisol, grupo conservador, 199
Central Campesina Independiente (CCI), 26, 27, 57, 94, 96, 125, 134, 149
Centro Bancario de Puebla, A. C., 111, 188
Centro de Cálculo Joel Arriaga Navarro, 94, 101, 103
Centro de Estudios de la Juventud COPARMEX, 197
Centro Patronal de Puebla, 49, 111, 128, 131, 188
Cerón, Leonardo, 99, 100
Chedraui, familia, 21
Cholula Tlalolini, Manuel, 131
Ciencias Físico Matemáticas, escuela de, 88
Ciencias Químicas, escuela de, 59
Ciudad Universitaria, 58, 59, 113, 129
Clouthier, Manuel J., 194, 197, 202, 203, 205
Club de Empresarios de Puebla, A. C., 111, 128

Club de Leones, 49
Club Rotario de Puebla, 49
Cobos, Jorge de los, 197
Coca, Leobardo, 109
Coindreau, José Luis, 194
Colegio Benavente, 148
Colegio de Arquitectos, 112
Colegio de Contadores Públicos, 111
Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla, 111
Colegio de Notarios de Puebla, 112
Colegio del Estado, 10, 35-38, 40, 163
Colegio Militar, 42
Comercio, escuela de, 86
Comité Coordinador de la Ciudadanía Poblana, 49, 66, 191, 205
Comité Coordinador Permanente de la Ciudadanía Poblana (CCPCP),
128, 129, 130, 152, 191, 205
Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 207, 209, 210
Concheiro, Elvira, 185
Conchello, José Ángel, 140, 141, 197
Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), 187, 188
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO), 187,
188
Confederación de Trabajadores de México (CTM), 28, 112, 165
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), 192-
195, 198, 205, 206, 208
Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROC), 52, 112
Confederación Regional Obrera de México (CROM), 112
Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos, 109
Conferencia de Estudiantes Democráticos (CNED), 47
Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), 188
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 187-190, 195, 199, 200, 203
Consejo de Honor, 44, 45, 55, 98
Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, 187, 195

Consejo Nacional de Huelga (sección Puebla), 61, 63
Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología (CONACYT), 222
Consejo Poblano de Hombres de Negocios, 195
Consejo Universitario de la UNAM, 120
Contaduría, escuela de, 66
Contreras Cruz, Carlos, 18
Coordinadora Ciudadana, 194, 195, 217
Corripio Ahumada, Ernesto, 194, 198
Cortés, Severino, 26
Cristo, 9
Croll, César, 198
Croll, Maribel de, 199
Cruz Quintas, Ernesto, 88
Cuaute Méndez, Jorge, 142
Curiel, Fernando, 152
Danzós Palomino, Ramón, 27, 57, 134
Dávalos, 54
Dávila Peralta, Nicolás, 24
Delgado, Gabino B., 208
Derecho y Ciencias Sociales, escuela de, 42, 86, 113, 142
Desarrollo Humano Integral (DHIAC), 192-195, 197, 198, 207, 217
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 193, 199
Díaz Cid, Manuel, 149, 194
Díaz Ordaz, Gustavo, 29, 30, 63, 69, 70, 73
Directorio Estudiantil Poblano, 61
Doger Guerrero, Enrique, 220, 221
Domingo, Alberto, 11, 91, 138, 140
Domínguez, Francisco, 109
Echeverría Álvarez, Luis, 22, 24, 67, 69, 70-73, 77, 79, 90, 93, 110, 114, 116, 119, 127, 128, 130, 152, 171, 173, 184, 186, 187
Eco, Umberto, 118
Economía, escuela de, 56, 59, 88

Edificio Carolino, 10, 52, 59, 63, 91, 92, 95, 104, 106, 110, 124, 129, 130, 143, 150

Editorial Universitaria, departamento de, 56

Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Puebla, A. C., 112

Elizalde, Octavio, 197

Emiliano Zapata, escuela preparatoria popular, 88, 113

Escamilla, Filomeno, 109

Escolar, departamento, 88

Escuela Nacional de Antropología e Historia, 151

Escutia, Juan, 194

Espejel, Trinidad, 110, 128, 130

Espina Reyes, Jorge, 192, 193

Extensión Universitaria, departamento de, 113, 132, 134

Ezcurdia, Mario, 91

Federación de Barrios y Colonias, A. C., 110, 111, 120, 124, 128-131, 191

Federación de Inquilinos, 149

Federación de Transporte del Estado de Puebla, 111

Federación Estudiantil Poblana (FEP), 43, 44

Federación Estudiantil Universitaria (FEU), 85, 126

Federación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (FIOAC), 27

Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC), 112

Fernández de Lara, Doroteo, 57

Fernández de Lara, Guillermo, 142

Filosofía y Letras, escuela de, 56

Física, escuela de, 113

Físico Matemáticas, escuela de, 41, 59

Flores Cruz, Miguel, 62

Flores de Beristain, María de los Ángeles, 96

Flores Narro, Felipe, 98

Flores Rojas, Ignacio, 67

Flores Suárez, Sergio, 75, 76, 85, 86, 88, 92, 98, 99, 102, 103, 105 106, 113, 117, 133, 134, 136, 154, 161

Foro de Cambio Empresarial, 195, 196

Foro Doctrinario y Democrático, 209, 211

Fox Quezada, Vicente, 13, 193, 218, 222

Fragoso, Juan Manuel, 185

Fraile García, Francisco, 205, 209, 210, 211

Franco Rodríguez, David, 93

Frente Democrático Nacional (FDN), 214

Frente Estudiantil Democrático (FED), 85

Frente Obrero Campesino Estudiantil Popular (FOCEP), 27, 28, 95, 97, 112, 117, 123, 124, 125, 130, 131, 143, 149

Frente Universitario Anticomunista (FUA), 46, 52, 66, 85, 88, 113, 120, 142, 148, 191

Frías Olvera, Manuel, 69

Fuente, Juan Ramón de la, 220, 221

Fuentes, Carlos, 72

Fundación Mary Street Jenkins, 59

Fundice, grupo conservador, 199

Galindo Flores, Fernando Antonio, 69

Galindo Flores, Sergio, 69

García Amero, Martha, 25

García Cantú, Gastón, 42, 144

García García, Lucas, 62

García García, Odilón, 62

García García, Raymundo, 215

García Ibarra, Abraham, 196, 197

García Suárez, Eduardo, 128, 129, 148, 184, 189, 190, 195, 196, 216

García Suárez, Miroslava, 223

García Valseca, 54

García Villegas, José Luis, 106

García, Judith, 90, 94

Garibay Ávalos, José F., 59, 60, 86
Garmendia, Arturo, 172
Garza- Sada, 185
Gatica, Nora, 58
Glockner, Julio, 37
Gómez Morín, Manuel, 201, 211
González Báez, Julián, 62
González Casanova, Pablo, 51, 114-117, 120, 123, 219
González Lara, Víctor, 17
González Romano, Ignacio Enrique, 10, 150
González Ruiz, Édgar, 198
Gramsci, Antonio, 50
Grupo 64, 64, 67, 74, 79, 86
Grupo Monterrey, 185, 186, 187
Grupo Náhuatl, 66, 85, 88, 92, 113, 120, 191
Guardia Unificadora Iberoamericana (GUIA), 117
Guerra, Javier, 188
Guevara, Pedro, 75
Gutiérrez, Antonio, 185
Guzmán de Alba, Luis, 188
Hermoso, Ignacio, 37
Herzen, Alexander, 12
Herzog, sistema, 35
Hinojosa Rivero, Gabriel, 193, 195, 196
Honorable Consejo Universitario, 41, 44, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 74, 75, 86, 90, 94, 98, 106, 107, 125, 142, 151, 169
Hospital Civil, 96, 97, 101, 103
Hospital Universitario, 147
Huerta Morales, Cuauhtémoc, 142
Huerta Sánchez, Luciano, 106
Huerta, Efraín, 7, 9
Ibarra Mendívil, Jorge Luis, 220

Idiomas, departamento de, UAP, 143
Ingeniería Civil, escuela de, 66
Ingeniería Química, escuela de, 86
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, 194
Instituto de Investigaciones Motolinía, 66
Instituto de Propositiones Estratégicas, 195
Instituto Politécnico Nacional (IPN), 60, 151
Investigaciones Arquitectónicas y Urbanísticas del Instituto de Investigaciones, departamento de, UAP, 15
Jiménez Morales, Guillermo, 212, 213, 214
Jiménez Zárate, Jorge, 142
Jodorowski, Alejandro, 23, 24
Juárez Torres, Nicandro, 64, 75
Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de la Ciudad de Puebla, 66, 111, 128, 191, 199
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 28
Juventud 85, 197
Juventud Comunista, 43, 78
Juventud Nueva, 66, 85, 88, 92, 113, 120, 191
Kundera, Milán, 13
Labastida Muñoz, Horacio, 40, 41, 42, 54
Lara y Parra, Manuel, 36, 37, 39, 52, 56, 59
Leal, Héctor Ulises, 117
Leduc, Renato, 132, 140
Lenin, 47
Ley Agraria, 96
Ley Orgánica de la UAP, 54, 55, 60, 113, 127, 129, 130
Lezama, Antonio, 209
Lombardo Toledano, Vicente, 30
Lomelí Vanegas, Leonardo, 17, 174
López Huerta, Federico, 64
López Mateos, 45, 46, 48, 49, 185

López Portillo, José, 178, 183, 184, 190, 199
López, Luis Miguel, 109, 142
Loranca Sentíes, Ricardo, 142
Louvier, J., 149
Loyola, Arturo, 132
Lozano Gracia, Antonio, 210
Luna Ledesma, Matilde, 186
Madero, Francisco I., 10, 36, 40
Madero, Pablo Emilio, 208
Madrid Hurtado, Miguel de la, 203, 217
Manjarrez, Alejandro C., 182
Mantilla, José Luis, 205
Marcué Pardiñas, Manuel, 57
Marín Dorado, Víctor, 132
Márquez Carrillo, Jesús, 14, 22, 37
Márquez de Ita, Jesús, 142
Márquez Martínez, Marco Antonio, 66, 99, 100
Márquez y Toriz, Octaviano, 23, 24, 50, 110
Márquez, Manuel L., 40
Martínez Domínguez, Alfonso, 29, 172
Martínez Solís, Antonio Ernesto, 147, 148
Martínez Verdugo, Ángel, 117
Martínez Verdugo, Arnoldo, 71, 117
Martínez, Bruno, 57
Mateos, Juan A., 5
Medicina, escuela de, 29, 65, 67, 86, 97, 147, 148
Medina Cuevas, Víctor Manuel, 10, 150
Medina, Octavio, 94, 151
Medrano, Juan José, 208
Mejía, Wilfredo, 205
Méndez Arceo, Sergio, 24, 25
Méndez Morales, Raúl, 64, 66

Merino Fernández, Aarón, 26, 30, 38, 58, 59
Meza Pérez, Enrique, 62
Miramón, Miguel, 54
Molina, Alfonso, 126
Mondragón, Alejandro, 194
Monsiváis, Carlos, 140, 172
Montero Ortega, Fernando, 68
Morales Blumenkron, Guillermo, 152, 154, 176, 177
Morales Flores, David, 12, 13, 143, 144, 145
Morales Piloni, Ángel, 125, 126, 142
Moreno Valle, Rafael, 29, 30, 38, 63, 64, 66-70, 86, 97
Movimiento Aglutinador Juvenil, 197
Movimiento de los lecheros, 161
Movimiento del grupo Pro Vida, 198
Movimiento democrático popular de 1972-1973, 9, 11-15, 65, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 95, 99, 107-110, 120, 124, 125, 132, 147, 163, 166, 168, 169, 170-174, 179, 191
Movimiento Estudiantil de 1968, 13, 60, 61, 62, 70
Movimiento obrero, 164
Movimiento popular cristiano, 194
Movimiento Revolucionario de 1910, 36, 39, 77, 124, 153, 202
Movimiento Revolucionario del Magisterio, 151
Movimiento Sindical Ferrocarrilero, 94
Movimiento Testimonio y Esperanza, 197, 198, 199
Movimiento universitario de 1964, 58
Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), 47
Murad Macluf, Jorge, 212, 214
Música, departamento de, 56
Nacional Financiera (NAFINSA), 20
Nava Castillo, Antonio, 38, 55, 56, 58
Naval, José Luis, 53
Navarro Rojas, Luis, 35

Obeso, Javier de, 118
Ocejo Moreno, Jorge, 194, 209
Odontología, escuela de, 86
Ojeda Alanís, Rogelio, 196
Olguín de la Llave, Manuel, 64, 66, 68
Ornelas Delgado, Jaime, 88, 105, 106
Ortega, Fausto M., 38, 45, 54
Ortega, Teodoro, 206, 208, 210, 211
Ortiz Legaria, Baraquiél, 152
Ortiz, Agustín, 205
Ortiz, Raúl, 132
Osorio García, Antonio, 60
Pacheco Ceballos, Vicente, 196
Palacios, Ramón J., 37
Pansters, Will, 15, 38, 46, 72, 181, 213
Paredes Moctezuma, Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús,
125, 131, 142, 192, 193, 216, 217
Partido Acción Nacional (PAN), 31, 140, 191-199, 201, 202, 204-209,
211-217
Partido Comunista Mexicano, (PCM), 27, 43, 53, 71, 75-79, 90, 103, 117,
133, 150, 153, 165, 177, 178
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 216
Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), 103
Partido Popular Socialista (PPS), 212
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), 103
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 29, 30, 31, 53, 56, 64, 70, 71,
73, 124, 162, 173, 174, 183, 186, 194, 212-216
Partido Socialista de los Trabajadores (PST), 212
Partido Socialista Unificado de México (PSUM), 212
Patiño Tovar, Elsar, 73
Paz Torres, Rodolfo, 126
Pellico Agüeros, Gerardo, 128, 183, 184, 196

Percino Escalante, Jesús, 142
Pérez Díaz, Antonio, 75
Pérez Ríos, Francisco, 96
Popoca, Manuel, 37
Popper, Karl, 13
Posadas, cardenal, 198
Prensa, departamento de, UAP, 153
Quintana Fernández, José Antonio, 196
Ramírez, Francisco, 68
Ramírez, Rosalía, 206, 208
Ramos, Francisco, 118
Reforma Universitaria, 14, 15, 25, 28, 42, 43, 47, 52, 56, 60, 61, 65, 75, 76,
78, 79, 88, 90, 93, 96, 98, 100-103, 132, 134, 144, 146, 161, 166, 175, 182
Revilla Ibarra, Rolando, 60
Revolución Cubana, 47, 48
Reyes Heróles, Jesús, 173
Reyes Vázquez, Alfonso, 132
Rivera Carrera, Norberto, 194
Rivera Cuervo, Enrique, 98
Rivera Terrazas, Luis, 43, 53, 88, 102, 105, 113, 116, 117, 127, 136, 146,
Rivera Torija, Jesús, 142
Rodríguez Concha, Manuel, 196
Rojano Aguirre, Roberto, 62
Rojas Sánchez, Marco Antonio, 64
Romano Soriano, Eduardo, 99, 100
Rosales Miranda, Manuel, 152
Rosete González, Jorge, 126
Ruiz Cortínez, Adolfo, 45, 46
Sáenz de Mier, Antonio, 37
Salazar Adame, Florencio, 219, 220
Salinas de Gortari, Carlos, 211
San Ildefonso, escuela preparatoria, 61

Sánchez Díaz de Rivera, Antonio, 194, 195
Sánchez Díaz de Rivera, Francisco, 128, 129, 194
Sánchez Gutiérrez, Abelardo, 49, 196
Sánchez Lara, Norberto, 10, 150
Sánchez Mc Gregor, Joaquín, 60
Sánchez Pontón, Luis, 10, 36
Sánchez Pontón, Manuel, 97, 109, 110, 124, 125
Sánchez Vázquez, Adolfo, 218
Sánchez, Abelardo G., 128
Sandoval González, Alfredo, 193, 194, 197, 198
Sandoval Trujillo, Juan, 117
Santos, Gonzalo N., 45
Secretaría de Educación Pública (SEP), 219, 223
Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública (SSA), 29, 63
Serdán, Aquiles, 8
Serdán, Carmen, 8
Serrano Limón, Jorge, 197, 198
Servicio Social, departamento de, 113, 132, 134
Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM), 28, 94, 96, 104
Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM (STEUNAM), 143, 151
Sindicato Independiente de Volkswagen, 164, 165
Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE), 124
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), 164
Sociedad de Estudiantes del Colegio, 36
Sociedad de Padres de Estudiantes Universitarios del Estado de Puebla, 126, 130, 151
Sociedad Mutualista de Dependientes, 112
Solidaridad Cristiana, 195
Soto Dorantes, Pedro, 206

Téllez, Saturnino, 37
Tello, Carlos, 147
Tenorio Pacheco, Josaphat, 11, 12, 140, 142, 143
Terán Olguín, Liberato, 117
Torres Leyva, Javier, 129, 196
Torres, Alfonso, 205
Torres, Francisco Javier, 192
Toxqui Fernández de Lara, Alfredo, 174, 177, 178, 189, 190
Tratado de Libre Comercio (TLC), 211
Ugartechea, Marco Antonio, 139
Unión de Defensa Inquilinaria, 94
Unión de Propietarios de Autotransportes Puebla-Cholula, 112
Unión Estatal de Padres de Familia, 111
Unión Ganadera Regional, 111
Universidad Autónoma de Nuevo León, 114, 117, 139
Universidad Autónoma de Puebla, (UAP), 9, 14, 21, 23, 24, 27-31, 36, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 74, 76, 79, 85, 86, 89, 90-103, 105, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 117, 120, 123, 126, 129, 130-133, 135, 137, 138, 139, 141, 143, 146-151, 153, 154, 161, 162, 163, 167, 169, 171, 172, 189, 191
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), 114, 117, 146, 151
Universidad de Guerrero, 114, 151
Universidad de Monterrey, 117
Universidad de Morelos, 151
Universidad Intercontinental, 197
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 60, 62, 114, 115, 117, 151, 219, 220, 221
Universidad Nicolaíta, 70
Universidad Patricio Lumumba de Moscú, 117
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), 86, 149, 195
Valerdi, Ángel, 132

Vázquez Huerta, Joaquín, 97, 98, 145
Velasco Arzac, Guillermo, 195
Velasco Barrera, Guillermo, 195
Vélez Pliego, Alfonso, 14, 42, 75, 88, 105, 106, 113, 146
Vera, Óscar, 205
Vera, Héctor, 205
Vera, Zito, 53
Vidales Aparicio, Jesús, 188
Villa Escalera, Ricardo, 128, 196, 204- 207, 211-216
Von Bertrad, Hermann, 118
Watti Urquidi, Ricardo, 197
Yáñez Delgado, Alfonso, 14, 23, 153, 154
Zamudio Muñoz, Raymundo, 112, 131, 133
Zerón Rojas, Ángel, 147
Zerón, Ángel, 68

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	7
CAPÍTULO I	
LA CRISIS DE PUEBLA EN LOS SETENTA.....	17
La crisis del sector textil y la modernización industrial.....	17
La crisis social.....	25
La crisis política.....	29
CAPÍTULO II	
LAS CONTRADICCIONES DEL BLOQUE EN EL PODER Y SU IMPACTO EN LA UNIVERSIDAD.....	35
El estallido del movimiento de Reforma Universitaria de 1961.....	46
La “revuelta” de 1964.....	56
El movimiento de 1968.....	60
Ascenso y caída de Rafael Moreno Valle.....	63
El enfrentamiento de la burguesía poblana con el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez.....	70
Se fortalecen las fuerzas de izquierda, en particular el Partido Comunista Mexicano.....	76
CAPÍTULO III	
LA “SANTA ALIANZA” CONTRA LA UAP.....	85
El asesinato del arquitecto Joel Arriaga Navarro.....	90
Pese a los golpes de la derecha, se fortalece la unidad entre los univer- sitarios, y se avanza en la Reforma Universitaria.....	98

Arrecia la embestida derechista contra el movimiento democrático universitario.....	106
La solidaridad nacional hacia la UAP y el deslinde del gobierno federal respecto a la postura de Bautista O'Farril.....	113
El asesinato de Enrique Cabrera Barroso.....	134
La matanza del Primero de Mayo y la caída de Bautista O'Farril....	149

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES PRELIMINARES

El movimiento democrático universitario le abre paso a la modernización de la universidad y al respeto a la autonomía de la institución.....	161
Gracias al movimiento democrático popular se crean en Puebla condiciones para el respeto a las libertades políticas.....	163
Los cambios en el gobierno estatal.....	175

APÉNDICE

1972 y 1973: génesis del proyecto de la derecha poblana de arribar al poder político.....	181
A la conquista de la sociedad civil.....	191
El movimiento de protesta contra la nacionalización de la banca y el surgimiento del neopanismo.....	199
La “colonización” del PAN en Puebla por los grupos patronales....	203
La derrota de Villa Escalera en 1983 y el irresistible ascenso electoral del neopanismo en años posteriores.....	211
La política de los neopanistas hacia las instituciones públicas de nivel superior.....	217

ÍNDICE ONOMÁSTICO.....	227
------------------------	-----

1972-1973, Puebla de los demonios, se reimprimió el 20 de enero de 2004 en **Litografía Magno Graf, S.A. de C.V.**, Calle E número 6, Parque Industrial Puebla 2000. El tiraje fue de mil ejemplares, financiado por el gobernador Melquiades Morales Flores. Diseño de portada e interiores de Ileana Gómez Torres, revisión y corrección de estilo de Sonia Ramírez Torres, el índice onomástico de Irma Quiroz Luna. El costo de negativos, impresión y encuadernación del libro es de \$30.00, incluyendo IVA.

